

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Viña del Mar
CAUSA ROL : C-3337-2017
CARATULADO : MOLINOS/EARNEST

Viña del Mar, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós

Visto:

I.- De la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en juicio ordinario de mayor cuantía.

En lo principal de presentación de 27 de septiembre de 2017, del folio 1, compareció don Cristóbal Valenzuela González, abogado, mandatario judicial de don **Carlos Manuel Molinos Orrego**, factor de comercio, domiciliado en Avenida Concón Reñaca N°65, Concón, y para estos efectos, en Avenida Libertad N°1405, oficina 1702, Viña del Mar, quien interpuso demanda ordinaria de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de doña **Bonnie Susan Elizabeth Earnest Callejas**, viuda, labores, con domicilio en Avenida Gastón Hamel Nieto N°350, departamento 33, Edificio La Foresta, Viña del Mar; de doña **Angélica Patricia Rodríguez Earnest**, casada y separada de bienes, psicóloga, con domicilio en Amunátegui N°1942, casa 7 B, Recreo, Viña del Mar; de don **Miguel Andrés Rodríguez Earnest**, soltero, ingeniero en medio ambiente, con domicilio en Avenida Central N°1390, Concón; y de doña **Catalina María Rodríguez Earnest**, casada y separada de bienes, relacionadora pública, con domicilio en José María Escrivá de Balaguer N°720, departamento 1501, Concón, en adelante indistintamente también como los “demandados” o “la sucesión”, de conformidad a los antecedentes de hecho y derecho que expuso.

En primer lugar, como cuestión general y previa, expuso que los demandados son los herederos del socio y accionista don Mario Patricio Rodríguez Olivos, quien junto a don Carlos Molinos Orrego, eran los principales socios y accionistas de las siguientes sociedades: (i) Inversiones Con-Con S.A., Rol Único Tributario N°76.067.965-8; (ii) Inspecciones, Asesorías Técnicas y Construcción Limitada, o INATEC Ltda., Rol Único Tributario N°77.167.300-7; (iii) Inversiones Con-Con Dos S.A., Rol Único Tributario N°76.085.664-9; (iv) Obras Civiles INATEC Limitada, Rol Único Tributario N°76.235.900-6; (v) Inmobiliaria



Foja: 1

Moro Limitada, Rol Único Tributario N°76.067.983-6; y (vi) Transportes Moro Limitada, Rol Único Tributario N°76.181.982-8.

Agregó que desde el lamentable fallecimiento de su socio, don Carlos Molinos Orrego siguió ejerciendo la administración de las sociedades, con estricto apego a los pactos y a la forma de gestión y administración que se venía ejerciendo desde que ambos administraban las sociedades, donde jamás existió reparo ni problema alguno.

A su vez, indicó que, tan pronto como falleció el señor Rodríguez, se tramitó la posesión efectiva de sus bienes y se modificaron los estatutos sociales de las sociedades Inspecciones, Asesorías Técnicas y Construcción Limitada (INATEC Ltda.), Inmobiliaria Moro Limitada y Obras Civiles INATEC Limitada, con el objeto de regularizar los derechos sociales de cada heredero en ellas y para nombrar a su vez a doña Bonnie Earnest Callejas como administradora (indistintamente con el Sr. Molinos con idénticas facultades a las de aquel).

Añadió que la composición societaria o accionaria en dichas sociedades quedó en definitiva de la siguiente forma:

Inversiones Con-Con S.A:

- Sucesión Mario Patricio Rodríguez Olivos 500 acciones.
- Carlos Manuel Molinos Orrego 498 acciones.
- Bonnie Susan Elizabeth Earnest Callejas 1 acción.
- Karla Pamela Morales Aguirre 1 acción.

Inspecciones, Asesorías Técnicas y Construcción Limitada (INATEC Ltda.):

- Inversiones Concón S.A. 50%.
- Sucesión Mario Patricio Rodríguez Olivos 25%.
- Carlos Manuel Molinos Orrego 25%.

Inversiones Con-Con Dos S.A:

- Carlos Manuel Molinos Orrego 1 acción.
- Bonnie Susan Elizabeth Earnest Callejas 666 acciones.
- INATEC Ltda. 333 acciones.

Obras Civiles INATEC Limitada:

- Inspecciones, Asesorías Técnicas y Construcción Limitada (Inatec) 50%.
- Carlos Manuel Molinos Orrego 20%.
- Inversiones Concón Dos S.A. 30%.

Inmobiliaria Moro Limitada:

- Sucesión Mario Patricio Rodríguez Olivos: 50%.
- Carlos Molinos Orrego: 50%.

Transportes Moro Limitada:

- Sucesión Mario Patricio Rodríguez Olivos: 50%.



Foja: 1

-Carlos Molinos Orrego: 50%.

Relató que, atendida la existencia de desavenencias entre los socios, las partes iniciaron conversaciones para evaluar la posibilidad que don Carlos Molinos o la sucesión del señor Rodríguez comprara la participación accionaria o societaria de la otra, para lo cual acordaron valorizar las sociedades, en un proceso que duró aproximadamente 2 años, durante el cual hubo varias ofertas de compra por parte de don Carlos Molinos.

Refirió que en el contexto de la negociación los demandados requirieron un informe a la empresa Deloitte con el objeto de que revisara la situación contable y tributaria respecto de las sociedades INATEC Ltda. y Obras Civiles INATEC Limitada, a lo que se accedió sin problema proporcionando la información requerida, la que fue entregada a los auditores de dicha sociedad en las dependencias de las sociedades para hacer las revisiones correspondientes. Al mismo tiempo, en el mes de septiembre de 2015, se optó por designar un árbitro de común acuerdo respecto de la sociedad INATEC Limitada, en los autos Rol C-3274-2015, seguidos ante el 1° Juzgado Civil de Viña del Mar, en el caso que fracasaran las conversaciones de acuerdo o diferencias entre las partes que requiriesen su intervención. Una vez efectuada la valorización de las sociedades, no obstante, se trató de un proceso acordado de buena fe por las partes, la demandada doña Bonnie Earnest Callejas simplemente desconoció el informe de tasación (que ni siquiera pagó y que elaboró don José Luis Palacios Ibaseta según su propia elección y directrices) y exigió como precio de venta sumas absolutamente desproporcionadas que impidieron, por razones lógicas, que se materializara algún acuerdo. Acto seguido, siendo lógico y coherente que los demandados recurrieran al árbitro que se había designado de común acuerdo, el 22 de junio del 2016 solicitaron medidas prejudiciales ante el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar, y dos días más tarde procedieron a solicitar el abandono del procedimiento en relación con el árbitro que ya había designado el Primer Juzgado Civil de Viña del Mar.

En cuanto a los hechos, dijo que según consta en los autos Rol C-2529-2016, caratulados "Earnest/Molinos" del 2° Civil de Viña Del Mar, el 22 de junio de 2016 los demandados doña Bonnie Susan Earnest Callejas, por sí y en representación de sus hijos, los demandados doña Angélica Patricia, don Miguel Andrés y doña Catalina María, todos de apellido Rodríguez Earnest, y en adelante también como los "solicitantes", pidieron se decretasen las siguientes medidas prejudiciales precautorias:

a.- Nombramiento de un interventor, de conformidad con los artículos 290 N°2 y 293 N°3 y 4, respecto de las seis sociedades ya referidas: Inversiones Con-



Foja: 1

Con S.A.; INATEC LTDA.; Inversiones Con-Con Dos S.A.; Obras Civiles INATEC Limitada; Inmobiliaria Moro Limitada; y Transportes Moro Limitada.

b.- Las siguientes medidas prejudiciales innominadas y provisionales respecto de las facultades de Carlos Manuel Molinos Orrego, en su calidad de administrador de esas seis sociedades: (i) Revocación general de todo poder especial otorgado a terceros para representar, administrar, disponer de los bienes sociales y obligar válidamente, conferido por don Carlos Molinos Orrego con anterioridad a la inscripción en el registro pertinente de la resolución que ordene tal revocación; (ii) Limitación de las facultades del administrador y representante legal don Carlos Molinos Orrego para la administración, disposición de los bienes sociales y facultad de obligar válidamente a las sociedades, limitaciones para administrarla y hacer uso de su razón social, en cuanto aquel sólo podría realizar dichos actos conjuntamente con el interventor o previa visa por escrito del interventor designado por el Tribunal a contar de la fecha de inscripción en el registro pertinente de la resolución que ordene tal limitación.

Adicionó que, en la misma solicitud, los demandados renunciaron a las sociedades INATEC Limitada y Obras Civiles INATEC Limitada.

Aseveró que, en términos generales, los solicitantes fundaron sus medidas prejudiciales ya referidas, atendida su calidad socios o accionistas de las seis sociedades mencionadas, al haber sucedido en sus derechos al fallecido socio o accionista de ellas, don Mario Patricio Rodríguez Olivos, con el objeto de resguardar los derechos sociales y patrimoniales comunes en esas seis sociedades.

Manifestó que, no obstante indicar o anunciar en el cuerpo de la solicitud de medidas la interposición de una serie de demandas y acciones de forma equívoca y poco precisa (de carácter penal, tributario, civil), en el sexto otrosí de dicha solicitud, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, los demandados solicitantes de las medidas anunciaron la *“acción de disolución de las sociedades, sin perjuicio de ejercer las acciones derivadas de su incumplimiento al deber ético jurídico contenido en los artículos 402, 403, 404 y siguientes del Código de Comercio”*.

Señaló que, por resolución de 4 de julio de 2016, el Tribunal accedió desde luego y sin previa notificación a su representado y a las sociedades, a la solicitud de medidas prejudiciales precautorias de la siguiente forma: *“Ha lugar a lo solicitado, concédase medida prejudicial de nombramiento de interventor respecto de las sociedades Inversiones Con-Con S.A; Inatec Ltda; Inversiones Concón Dos S.A; Obras Civiles Inatec Limitada; Inmobiliaria Moro Limitada; Transportes Moro Limitada y en todas ellas que en su conjunto constituyen la malla societaria, de*



Foja: 1

conformidad a lo dispuesto en el artículo 293 N°4 del Código de Procedimiento Civil, designándose como Interventor atendida su calidad de abogado y de pertenecer a la nómina de liquidador y veedor de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento a don Enrique Concha Matus, teléfono (41) 2227798–(9) 8263262, domiciliado en Orompello N°120, Concepción, correo electrónico enriqueconcha@sindicodequiebras.cl.

Notifíquese personalmente a fin de que acepte el cargo o notifíquese de la forma más idónea a fin de que tome conocimiento de la presente designación.

Del mismo modo, se concede desde luego la medida prejudicial precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos, respecto de las sociedades indicadas precedentemente, limitando las facultades de administración, disposición y representación legal de don Carlos Manuel Molinos Orrego para la administración, disposición de bienes sociales y facultad de obligar válidamente a la sociedad, pudiendo administrarla y hacer uso de su razón social únicamente en conjunto con el interventor designado a previa visa por escrito del interventor.”

Continuó relatando que el 5 de agosto de 2016, los solicitantes presentaron un cúmulo de demandas, y pidieron que se mantengan como precautorias las medidas prejudiciales referidas, a lo que el Tribunal accedió por resolución de 12 de agosto de 2016.

Expresó que, con posterioridad, su representado por sí y en representación de las sociedades afectas a las medidas, al evacuar el traslado respectivo se opuso a la concesión de aquellas y a los argumentos esgrimidos para su solicitud y concesión, aduciendo además lo confuso de su redacción de la cual no es posible determinar si se presentaban contra el señor Molinos o contra las sociedades, lo que fue rechazado por el Tribunal; luego, el 22 de agosto de 2016, solicitó el alzamiento de las medidas lo que fue rechazado por el Tribunal por resolución de 31 de agosto de 2016.

Añadió que, en contra de la última de las precitadas resoluciones se dedujo recurso de apelación (Rol ingreso Corte Civil N°2.130-2016), la que, junto a otras apelaciones interpuestas por las partes, se acumularon en los autos Rol 2128-2016 de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso. Así las cosas, y conforme lo resolvió la I. Corte de Apelaciones referida, en sentencia firme de 11 de julio de 2017, las medidas prejudiciales decretadas debieron alzarse el 31 de agosto de 2016, en mérito de lo solicitado por su parte el 22 de agosto del mismo año, ya que la parte solicitante no cumplió el requisito del artículo 280 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, los considerando 15 y 16 de la referida sentencia, dejaron en evidencia que los demandados solicitantes de las medidas precautorias anunciaron demanda en contra de don Carlos Manuel Molinos Orrego, en la que



Foja: 1

se pediría la disolución de las sociedades antes referidas, sin perjuicio de ejercer las acciones derivadas de su incumplimiento al deber ético jurídico contenido en los artículos 402, 403 y 404 y siguientes del Código de Comercio, lo que no hizo, ya que dedujo una acción de mera certeza en contra de las sociedades tantas veces citadas y no respecto de don Carlos Molinos Orrego, por lo que no habiendo cumplido la parte solicitante con la obligación que le impone el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, procedía dejar sin efecto las medidas prejudiciales decretadas.

Continuó señalando que, atendido el contexto en que se presentaron las medidas (en pleno proceso de conversaciones entre las partes sobre la venta y adquisición de la participación social y accionaria de las seis sociedades) y lo que ocurrió en definitiva durante la tramitación de la solicitud de medidas prejudiciales, según se acreditará oportunamente, demuestra que aquellas se solicitaron con un fin "instrumental" y ajeno absolutamente al verdadero objeto y sentido de las medidas prejudiciales, cual fue ejercer un medio de presión y derechamente perjudicar a don Carlos Molinos mediante medidas precautorias que afectaban a las seis sociedades, principal fuente de trabajo e ingresos del mismo.

Afirmó que, durante el tiempo que las medidas prejudiciales precautorias se decretaron y mantuvieron vigentes, afectaron gravemente a las sociedades objeto de las mismas (en especial las sociedades operativas INATEC Ltda. y Obras Civiles INATEC Limitada). En efecto, la figura de un interventor, quien en este caso correspondió a don Enrique Concha Matus, y el anuncio de que se demandaría la disolución de las sociedades, afectó la imagen de las sociedades redundando en un desprestigio ante sus clientes y el mercado de la construcción, su personal y ante los propios Bancos (principal fuente de financiamiento para la operación y marcha de las sociedades por su giro y actividad principal: la construcción). Claramente una sociedad "intervenida" judicialmente, no es lo mismo que una sin esa medida. En la práctica ello importó que los Bancos paralizaran las líneas de crédito que tenía INATEC Ltda. y Obras Civiles INATEC Limitada y que le permitían operar y funcionar en el dinámico giro de la construcción, afectando las obras vigentes de la empresa y obligando al demandante, en consecuencia, a tener que comprometer su patrimonio personal para financiar las sociedades y así continuar con las obras en ejecución.

Alegó que el interventor, sin perjuicio de sus facultades de tal, asumió facultades de administración respecto de las sociedades, en la forma que fue solicitada y concedida la intervención, lo que implicaba que todo movimiento de dinero en las sociedades debía ser visado o aprobado por aquel. Nada podía hacerse en las sociedades afectas con las medidas si el Interventor no lo aprobaba o visaba. De



Foja: 1

esta manera, se afectó también al propio demandante, quien hasta ese momento administraba las sociedades. En la práctica significó que un tercero absolutamente desconocido, de un momento a otro, pasara a ocupar y controlar de alguna manera el trabajo y la forma como administraba y disponía de su patrimonio el demandante.

Precisó además que las medidas también afectaron la marcha o funcionamiento normal de las sociedades intervenidas ya que el interventor vivía en Concepción, y él mismo reconoció que no asistía a las empresas intervenidas con la regularidad que se requiere, con suerte asistía una vez a la semana (en especial por otros temas que atender por su calidad de liquidador concursal) y luego de reiteradas insistencias del demandante y demás estamentos de las empresas, quienes atendido lo anterior, vieron prácticamente inmovilizado el funcionamiento de las empresas intervenidas, sobre todo en un rubro tan dinámico como la construcción, donde se requiere día a día realizar pagos a proveedores, trabajadores, etc.

Adujo que durante la vigencia de las medidas, el señor interventor nada hizo en cuanto a la función precisa que le encomienda la ley; ninguno de los informes que presentó en el contexto de la intervención contienen un informe que detalle y de cuenta sobre su verdadera y real función, limitándose a realizar “revisiones o indagatorias” (como el mismo señala en la página 19 de su informe preliminar) respecto a periodos anteriores de las sociedades intervenidas, extralimitándose de sus funciones, realizando labores distintas a las que indica la ley, actuando en definitiva como un verdadero mandatario de los demandados o bien, como un perito, desconociendo la labor que le correspondía llevar a cabo en virtud del nombramiento realizado por el Tribunal. Se negó a visar o autorizar pagos de honorarios de personas que prestaban servicios desde hace años para las empresas, llegando al extremo de amenazar que no aprobaría más pagos o egresos si no se accedían a sus requerimientos de información y materializó las amenazas, al no visar el pago del sueldo del demandante quien no pudo recibir su sueldo correspondiente por los meses de julio, agosto y septiembre de 2016.

Dijo que en el expediente de la referida medida prejudicial consta un informe técnico que da cuenta de manera clara del vínculo o relación que existió entre el señor interventor y los apoderados de los demandados, a tal punto que los documentos y requerimientos utilizados por el primero fueron redactados y modificados en la propia oficina de dichos apoderados, lo que constituye prueba a su vez, que durante toda la vigencia de las medidas decretadas, el interventor fue guiado o actuó bajo instrucciones de los apoderados de los demandados, lo que sin duda le restó absoluta credibilidad y seriedad a su gestión y a los objetivos de



Foja: 1

la misma. Lo anterior derivó en la presentación de una querrela en contra del interventor ya señalado.

Conjuntamente con lo anterior y como consecuencia de lo indicado, relató que las sociedades vieron gravemente comprometidas sus posibilidades de participar en licitaciones públicas y privadas, las que constituyen su principal negocio, lo anterior en razón de que ningún mandante se expondría a encargar una obra a una sociedad intervenida y respecto de la cual sus socios solicitantes han renunciado a la misma y, sobre todo, cuando se enunció como demanda a presentar la de disolución de las sociedades. De esta manera, durante la intervención no fue posible adjudicarse licitación alguna, lo que afectó y trastocó gravemente el flujo y funcionamiento de las sociedades y su patrimonio, precipitando el declive de las dos principales sociedades INATEC Ltda. y Obras Civiles INATEC Limitada, las cuales hoy en día se encuentran en proceso de liquidación.

En cuanto al derecho, indicó que la responsabilidad extracontractual surge cuando existe un hecho voluntario, ilícito, imputable y que ha sido la causa de un daño a una persona. Conforme lo dispuesto en el artículo 1437 del Código Civil, los delitos y cuasidelitos son fuentes de obligaciones, y esta responsabilidad se traduce, generalmente, en la necesidad en que se encuentra el hechor de indemnizar los daños ocasionados por el delito o cuasidelito.

Resumió que para que exista responsabilidad extracontractual se requiere la concurrencia de los siguientes supuestos: 1) existencia de un hecho u omisión que provenga de dolo o culpa; 2) que con tal hecho se cause un daño; 3) que entre el hecho u omisión dolosa o culposa y el daño exista una relación de causalidad; y 4) que el demandado sea capaz de cometer un delito o cuasidelito civil.

Aseveró que en el caso de autos, concurren los requisitos para que proceda la responsabilidad extracontractual demandada, ya que producto del actuar de los demandados se decretaron medidas prejudiciales precautorias que causaron graves y cuantiosos perjuicios patrimoniales y morales en la persona de don Carlos Molinos Orrego.

Expresó que el ejercicio de un derecho, en sí mismo justo (solicitud de una medida prejudicial), puede llegar a ser ilícito o injusto y puede causar daño ilegítimamente. En este caso la única explicación lógica para entender por qué los demandados solicitaron medidas prejudiciales precautorias que afectaron y dañaron a las propias sociedades de las cuales ellos son también dueños, es ya que por medio de ellas sólo pretendían incomodar al demandante, presionarlo y perjudicarlo. Este especial interés se demuestra en las medidas prejudiciales precautorias innominadas que afectaron directamente al demandante, atacando derechamente



Foja: 1

su principal fuente de trabajo, ya que afectaron la forma de administración de las sociedades por medio de un interventor que en definitiva fue un portavoz o vocero de los intereses de los demandados, que al mismo tiempo restringió y entorpeció las facultades de administración del señor Molinos, quien de un momento a otro se encontró en conjunto con un tercero absolutamente desconocido administrando su patrimonio. El actuar de los demandados al solicitar y obtener medidas con ese objetivo (aunque haya existido otro), es claramente constitutivo de dolo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 44 inciso final del Código Civil.

Por otra parte, arguyó que los demandados actuaron con culpa lata o grave, culpa que al tenor de la norma antes citada equivale a dolo, ya que los demandados solicitaron que se decretaran las medidas prejudiciales precautorias sin audiencia, lo cual fue concedido por el Tribunal mediante resolución de 4 de julio de 2016, el que dio un plazo de 30 días para presentar la demanda correspondiente, cuestión que no se hizo, ya que dedujeron una acción de mera certeza (no anunciada) en contra de las sociedades tantas veces referidas y no respecto de don Carlos Molinos Orrego. Dicha culpa lata fue establecida por la propia I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, quien resolvió el 11 de julio de 2017 dejar sin efecto las medidas, en atención a que los demandados no dieron cumplimiento con la obligación que le impone el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil.

Transcribió el inciso 2° del artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, que señala: *"...Si no se deduce demanda oportunamente, o no se pide en ella que continúen en vigor las medidas precautorias decretadas, o al resolver sobre esta petición el tribunal no mantiene dichas medidas, por este solo hecho quedará responsable el que las haya solicitado de los perjuicios causados, considerándose doloso su procedimiento."* Así, teniendo en consideración la presunción de dolo que establece la norma, y los graves y cuantiosos perjuicios patrimoniales y morales que ha sufrido don Carlos Molinos Orrego como consecuencia de las medidas prejudiciales ya señaladas, se interpone la presente demanda.

Hizo presente que la responsabilidad de los demandados es solidaria, conforme lo dispuesto en el artículo 2317 del Código Civil, conforme al cual si un delito o cuasidelito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito.

Concluyó, que en el caso de marras se dan todos los supuestos para que se configure la responsabilidad extracontractual de los demandados, a saber:

- 1.- Capacidad de los demandados.
- 2.- Existencia de un hecho ilícito por parte de los demandados, consistente en la solicitud de medidas prejudiciales precautorias con un fin netamente instrumental,



Foja: 1

esto es, incomodar, presionar y perjudicar a su representado, todo lo cual constituye un ejercicio abusivo de un derecho, incluso de manera negligente, ya que en definitiva no se cumplió con la obligación de presentar la demanda anunciada en la solicitud en los términos del artículo 280 del Código de Procedimiento Civil. Según el profesor Enrique Barros, en su libro Tratado de Responsabilidad Extracontractual: *“La hipótesis de ejercicio abusivo de un derecho se satisface con la presencia del dolo, esto es, por el ejercicio del derecho con la intención de causar daño a otro, aun cuando ése no haya sido el único propósito perseguido por el agente. (Alessandri 1943 265, J. C. Marín 2004 b 227; en la jurisprudencia, véanse Corte de Concepción, 24.6.1907, RDJ, t. V, sec. 2, 85; y Corte de Santiago, 14.10.2003, rol N° 1.351-1999, confirmada por la CS [cas. forma y fondo], 15.3.2005, rol N° 5.487-2003). De este modo, es posible asumir que se ha incurrido en el ejercicio doloso de un derecho cuando éste se ejerce con la intención de satisfacer el propio interés, pero aceptando el perjuicio ajeno como una consecuencia de la propia conducta. La responsabilidad requiere, en esta hipótesis, de la prueba del dolo de acuerdo a las reglas generales. La excepción está dada por los supuestos legales en que el dolo se presume. El ejemplo típico se refiere al solicitante de una medida prejudicial precautoria que tiene la carga de presentar una demanda civil dentro del plazo de diez días y de pedir que se mantengan las medidas decretadas. Si el solicitante no cumple con estas cargas o el tribunal decide no mantener las medidas precautorias solicitadas, “por este solo hecho quedará responsable el que las haya solicitado de los perjuicios causados, considerándose doloso su procedimiento”. Se trata de una presunción de dolo por el ejercicio de un derecho potestativo que, al causar daño a otro, da lugar a responsabilidad civil”*. A juicio de su parte, y en mérito de lo expuesto y los efectos que generaron las medidas solicitadas, es evidente el desinterés y desprecio por el daño ajeno y fundamentalmente por el abuso del derecho en el ámbito procesal de los demandados, quienes lograron la concesión de las medidas prejudiciales sin preocuparse de su anunciada demanda. Las medidas precautorias se lograron con abuso del derecho, dolo o culpa, determinantes de una conducta totalmente reprochable y, además, con negligencia del cumplimiento del *mínimum* de su deber procesal.

3.- El ilícito anterior es imputable a los demandados.

4.- Dicho ilícito ha causado daños a su representado (los cuales se detallarán en el apartado siguiente).

5.- Por último, existe una relación causal entre el ilícito cometido por los demandados y los daños que ha sufrido su representado.



Foja: 1

Posteriormente se refirió a los perjuicios y daños que ha sufrido su representado, a saber:

En cuanto al daño emergente, por este concepto demanda la suma de \$1.000.000.000.- o la suma mayor o menor que el Tribunal estime conforme al mérito de autos.

En cuanto al lucro cesante, por este concepto se demanda la suma de \$1.200.000.000.- o la suma mayor o menor que el Tribunal estime conforme al mérito de autos.

Finalmente, en cuanto al daño moral que ha sufrido su representado debido a los ilícitos cometidos por los demandados, indicó que aquel está representado por el daño a su reputación y el desprestigio tanto respecto de los trabajadores de la empresa, Bancos, clientes y proveedores, la angustia, ansiedad, preocupación e incluso depresión que le ha causado el hecho de la intervención, como se desarrolló y la forma en que esta se instrumentalizó, causando un gran impacto y angustia para él y su familia; en razón de ello, por este concepto demanda la suma de \$500.000.000.- o la suma mayor o menor que el Tribunal estime conforme al mérito de autos.

Por tanto, en mérito de lo expuesto, artículos 44, 1437 y 2314 y siguientes del Código Civil, artículo 280 inciso 2° del Código de Procedimiento Civil y demás normas pertinentes, solicitó tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en contra de doña Bonnie Susan Elizabeth Earnest Callejas; doña Angélica Patricia Rodríguez Earnest; don Miguel Andrés Rodríguez Earnest y doña Catalina María Rodríguez Earnest, todos ya individualizados, darle la tramitación correspondiente y, en definitiva, acoger la demanda declarando:

a) que los demandados son responsables de los daños causados por las medidas prejudiciales precautorias solicitadas en los autos Rol N°C-2529-2016, caratulados "Earnest/Molinos" del 2° Civil de Viña Del Mar;

b) que, en consecuencia, se condena a los demandados a pagar al demandante a título de indemnización la suma de \$2.700.000.000.- o la suma menor que el Tribunal estime en justicia conforme al mérito del proceso, en forma solidaria o la forma que se estime;

c) que las sumas antes referidas se deberán pagar con los reajustes e intereses legales que correspondan calculados desde la fecha de presentación de la demanda, o desde la fecha que prudencialmente se determine, y hasta la fecha del pago efectivo;

d) que se condena a los demandados al pago de las costas de la causa.

II.- De la notificación de la demanda a los demandados.



Foja: 1

La demandada doña Bonnie Earnest Callejas se notificó personalmente de la demanda y su proveído el 12 de octubre de 2017, ante la señora Secretaria Subrogante del Tribunal, conforme da cuenta actuación que se lee en folio 3 de autos.

Por su parte, el demandado don Miguel Andrés Rodríguez Earnest, fue notificado personalmente de la demanda y su proveído en su domicilio registrado en autos, el 19 de octubre de 2017; así da cuenta estampe de Receptor Judicial agregado el 20 de octubre del mismo año y que se lee en folio 7.

Luego, la demandada doña Catalina María Rodríguez Earnest, fue notificada personalmente de la demanda y su proveído en su domicilio registrado en autos el 20 de octubre de 2017; así da cuenta estampe de Receptor Judicial agregado en la misma fecha y que se lee en folio 8 de autos.

Finalmente, la demandada doña Angélica Patricia Rodríguez Earnest fue notificada de la demanda y su proveído de conformidad con lo prevenido en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil -previas búsquedas de rigor- el 7 de noviembre de 2017; así da cuenta estampe de Receptor Judicial agregado el 8 de noviembre del mismo año y que se lee en folio 14 de autos.

III.- De la contestación de la demanda por la demandada doña Bonnie Susan Elizabeth Earnest Callejas.

En lo principal de presentación de 24 de noviembre de 2017, que lee en el folio 15, compareció don Roberto Arroyo Correa, abogado, mandatario judicial de doña Bonnie Susan Elizabeth Earnest Callejas, quien contestó la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual deducida por don Carlos Manuel Molinos Orrego, ya individualizado, solicitando su más completo rechazo, con expresa condena en costas, en razón de los antecedentes de hecho y derecho que expuso.

En primer lugar, dijo ser efectivo que don Carlos Molinos Orrego durante todos estos años inició diversas tratativas tendientes a comprar la participación societaria, tanto de doña Bonnie Susan Earnest Callejas como de sus tres hijos doña Angélica Patricia, don Miguel Andrés y doña Catalina María, todos de apellidos Rodríguez Earnest, cuya insistencia de compra por parte del señor Molinos, decía relación primordial sobre las empresas o sociedades INATEC LTDA y Obras Civiles INATEC Limitada.

Afirmó la veracidad de lo señalado por el actor, en cuanto la señora Earnest y sus tres hijos, en forma previa a tomar cualquier tipo de decisión al respecto, requirieron un informe de la empresa Deloitte con el objeto de revisar la situación tributaria, contable y financiera de estas dos empresas, dado que el señor Molinos Orrego les negaba todo tipo de información de aquellas, administrándolas él



Foja: 1

mismo, impidiendo que la señora Earnest participara en todo tipo de decisiones, aun cuando y según consta en los estatutos sociales esta última era también socia, administradora y representante legal.

Relató que una vez evacuado el informe de la empresa Deloitte, su representada y sus tres hijos tomaron conocimiento de las graves irregularidades financieras, contables y tributarias cometidas en la administración del señor Molinos Orrego, a modo ejemplar, traspasos millonarios a las cuentas personales del señor Molinos, falta de comprobantes contables y bancarios, falta de información de las empresas, etc., irregularidades que bien expone dicho informe de la empresa Deloitte.

Hizo presente que, aun con estos antecedentes, la señora Earnest y sus tres hijos insistieron en que el señor Molinos Orrego transparentara toda la información societaria, lo que negó a través de sus asesores legales, entre estos, por intermedio de los abogados Guillermo de Las Heras y Cristian Chadwick, manifestando que la documentación para su análisis era solo la que había sido entregada a la empresa Deloitte, aun cuando dicho informe refería que no se les había entregado toda la información requerida para realizar el análisis encomendado, principalmente de las empresas INATEC LTDA. y Obras Civiles INATEC Limitada.

Manifestó que, atendido estos antecedentes, y tomando conocimiento la demandada y sus tres hijos por intermedio de trabajadores de la misma empresa de las innumerables irregularidades que estaba cometiendo el señor Molinos, ahora distrayendo bienes, y dado que este último negaba todo tipo de información así como la entrada a las empresas para revisar papeles, es que tomaron la decisión de solicitar ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar la medida prejudicial precautoria de nombramiento de interventor y de prohibición de celebrar actos y contratos sobre los bienes sociales de todas las empresas que formaban la malla societaria, las que el mismo demandante se encarga de individualizar en su demanda de indemnización de perjuicios, causa que lleva el Rol C-2529-2016, caratulados "Earnest con Molinos", pero no señala de qué Tribunal.

Indicó que resulta relevante en este punto recordar lo reconocido por el propio actor en el numeral 5 de su solicitud de medida prejudicial, quien expresamente señala las motivaciones y calidades que tuvieron los demandados para solicitar –a su vez- las medidas prejudiciales de interventor y de prohibición de celebrar actos y contratos respecto de las seis sociedades que formaban la malla societaria, al efecto, citó: *"Los solicitantes fundaron sus medidas prejudiciales, atendida su calidad de socios o accionistas de las 6 sociedades mencionadas, al haber sucedido en sus derechos al fallecido socio o accionista de ellas, Sr. Mario*



Foja: 1

Patricio Rodríguez Olivos, con el objeto de resguardar sus derechos sociales y patrimoniales comunes en esas 6 sociedades, en las cuales también es socio o accionista el Sr Carlos Molinos Orrego". Es decir, el propio señor Molinos reconoce expresamente cuáles fueron las motivaciones y objetivos de solicitar las medidas ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar por parte de los actores, estos es, resguardar sus derechos sociales y patrimoniales comunes en esas 6 sociedades. En otras palabras, no por un mero capricho, sino con antecedentes graves y calificados, que el mismo Sr. Molinos se encarga de reconocer.

Argumentó que el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar, tomando en consideración como antecedente grave y calificado el mismo informe de la reconocida empresa auditora Deloitte, es que concedió la medida prejudicial precautoria, que fue del siguiente tenor: "A lo principal: Atendido el mérito de los antecedentes, lo expresado por el demandante, teniendo en especial consideración lo dispuesto en los artículos 290 N° 2, 293 N°3, 294, 298 y 300 del Código de Procedimiento Civil, así como el hecho que los documentos acompañados constituyen, a juicio de esta sentenciadora, presunción grave del derecho que se reclama, lo que unido al hecho que lo que se pretende a través de esta medida es el resguardo respecto del paquete accionario de que es parte la demandante, como asimismo, su fin último, cual es, asegurar el resultado de la acción, se resuelve que: Ha lugar a lo solicitado, concédase medida prejudicial de nombramiento de interventor respecto de las sociedades Inversiones Con cón S.A; Inatec Ltda; Inversiones Concón Dos S.A; Obras Civiles Inatec Limitada; Inmobiliaria Moro Limitada; Transportes Moro Limitada y en todas ellas que en su conjunto constituyen la malla societaria, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 293 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, designándose como Interventor atendida su calidad de abogado y de pertenecer a la nómina de liquidador y veedor de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento a don Enrique Concha Matus, teléfono (41) 2227798-(9) 8263262, domiciliado en Orompello N° 120, Concepción, correo electrónico enriqueconcha@sindicodequiebras.cl.

"Notifíquese personalmente a fin de que acepte el cargo o notifíquese de la forma más idónea a fin de que tome conocimiento de la presente designación.

"Del mismo modo, se concede desde luego la medida prejudicial precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos, respecto de las sociedades indicadas precedentemente, limitando las facultades de administración y representación legal de don Carlos Manuel Molinos Orrego para la administración, disposición de bienes sociales y facultad de obligar válidamente a la sociedad, pudiendo



Foja: 1

administrarla y hacer uso de su razón social únicamente en conjunto con el interventor designado o previa visa por escrito del interventor.

"Inscríbese la medida a través de Receptor judicial en el Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar y Conservador de Bienes Raíces de Concón, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 297 inciso 1° del Código de Procedimiento Civil."

Agregó que la citada medida prejudicial fue mantenida en carácter de precautoria por el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar, rechazando sendas solicitudes de alzamiento por parte del señor Molinos, quien compareció a estrados en representación de las seis sociedades y, apelada que fue, la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso alzó la medida en la causa Rol de Corte 2128-2016, por considerar que dentro de las acciones enunciadas, no se interpuso la acción de disolución de esas seis sociedades.

Dijo, que fundado en antedicha resolución judicial, es que don Carlos Molinos Orrego comparece ahora en calidad de persona natural ante este Tribunal, interponiendo demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, en virtud del artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, por considerar "doloso el procedimiento", alegando en su calidad de persona natural sendos daños sufridos con ocasión de la medida prejudicial decretada, a saber, daño emergente, lucro cesante y daño moral.

Luego, alegó como excepción de fondo la falta de legitimación activa de don Carlos Molinos Orrego, toda vez que resulta ser un hecho no discutido en estos autos que el actor comparece en calidad de persona natural, mas no en calidad de representante legal de las seis sociedades que conforman la malla societaria.

Expresó que para que opere el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil con las circunstancias y consecuencias señaladas en su inciso 2°, se requiere imperiosa y necesariamente que se haya decretado una medida prejudicial precautoria, y que esta medida haya afectado directamente al futuro demandado invadiendo su esfera patrimonial, no pudiendo aprovecharse de tal circunstancia aquellos demandados que no se vieron afectados en su esfera patrimonial con la medida prejudicial o precautoria. En otras palabras, el titular de la acción indemnizatoria, fundado en el inciso 2° del Artículo 280 del Código de Procedimiento Civil (doloso el procedimiento), será necesariamente el demandado que se vio afectado directamente en su esfera patrimonial, privándolo de los atributos de su dominio o patrimonio, a modo ejemplar, el demandado afectado por una medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos sobre su propiedad; el demandado objeto de una medida de secuestro sobre un bien mueble de su dominio; etc., no pudiendo aprovecharse los otros demandados que



Foja: 1

no vieron afectado su dominio o esfera patrimonial de disposición de bienes con la media decretada, última hipótesis en la que se ajusta el señor Molinos Orrego, desde el momento que las medidas prejudiciales precautorias decretadas por el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar, fueron decretadas en contra de las seis sociedades y no en contra de aquel en su calidad de persona natural, hechos que este mismo reconoció ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar al solicitar el alzamiento de dicha medida prejudicial precautoria y también ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso (Recurso de Apelación), no tendiendo la titularidad o legitimación activa para demandar los daños y perjuicios que livianamente invoca, ahora en calidad de persona natural.

Transcribió, en lo que le resultó pertinente, el escrito de 22 de agosto del 2016, presentado en autos Rol 2529-2016 del Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar, en el cual el actor solicitaba el alzamiento de la medida, señalando y reconociendo lo siguiente: página 5, párrafo 4º: *"Como consta de la solicitud, toda la lata exposición de los fundamentos que harían procedentes las medidas prejudiciales, se basa en que el futuro demandado de autos sería el Sr. Carlos Molinos Orrego, sin embargo, las medidas solicitadas se solicitaron y decretaron respecto de terceros, esto es, las sociedades Inversiones Con-Con S.A; INATEC LTDA; Inversiones Con-Con Dos S.A; Obras Civiles INATEC LTDA; Inmobiliaria Moro Limitada y Transportes Moro Limitada, mediante el nombramiento de un interventor y mediante la prohibición de celebrar actos y contratos que limitó las facultades de administración, disposición y representación legal de don Carlos Manuel Molinos Orrego, última la cual si bien atañe al Sr. Carlos Molinos Orrego (porque afecta su calidad de administrador), lo cierto es que afecta directamente a las sociedades, ya que altera su normal funcionamiento" (SIC); en la página 5, párrafo 5º: "De esta forma, las medidas prejudiciales decretadas pueden impetrarse solamente por el demandante en contra de quien este se propone dirigir la demanda y consta de autos que el nombramiento de interventor y de prohibición de celebrar actos y contratos respecto de las sociedades resulta improcedente, pues dichas entidades conforman una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados de acuerdo a la normativa legal, en este caso, son entidades distintas del futuro demandado Sr. Molinos. (SIC)."; en la página 6, párrafos 4 y 5 respectivamente: "Como se ha dicho, y como consta del tenor de la resolución de fecha 4 de Julio pasado, las Medidas Prejudiciales de autos se decretaron respecto de sociedades" (SIC). No obstante, fueron las seis sociedades las personas jurídicas contra quien se dictaron las medidas prejudiciales.*



Foja: 1

Se refirió, también, al recurso de apelación deducido por el actor en septiembre de 2016 para ante la Ilma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, dando origen al Rol N°2128-2016, hoy invocado por el demandante. En dicho recurso, en su página 2, párrafos 4 y 5, reiteró en idénticos términos lo ya señalado: que las medidas se solicitaron y decretaron respecto de terceros, seis sociedades o personas jurídicas.

Expuso que no cabe ninguna duda entonces, al ser un hecho expresamente reconocido por el propio demandante, lo que se extrae de sus propias presentaciones o escritos, que las medidas prejudiciales afectaron y se decretaron directamente en contra de terceras personas, en contra de 6 sociedades, lo que resulta ser un hecho no discutido por las partes en este proceso judicial.

Así las cosas, reiteró que don Carlos Molinos Orrego no tiene ningún tipo de titularidad o legitimación activa para demandar los supuestos perjuicios que señala haber sufrido, ahora en calidad de persona natural, quien reconoció que las medidas afectaron a terceras personas, siendo en consecuencia las titulares para interponer la presente demanda indemnizatoria dichas seis sociedades y no el actor en calidad de persona natural.

Dijo que, además, dicha falta de titularidad o de legitimación activa, se ve también claramente reflejada a partir de los hechos en que sustenta la presente demanda indemnizatoria, en cuanto al origen de los perjuicios y daños ocasionados en que funda el daño emergente, lucro cesante y daño moral, de lo cual se constata que las medidas afectaron a las seis sociedades las que se vieron afectadas en su imagen. A modo ejemplar, transcribió la página 7, numeral 10: *"En efecto, la figura del interventor, quien este caso correspondió al Sr. Enrique Concha Matus y el anuncio de que se demandaría la disolución de las sociedades, afectó la imagen de las sociedades, redundando en un perjuicio para sus clientes y en el mercado de la construcción, su personal y ante los propios Bancos" (...) "En la práctica ello importó que los Bancos paralizaran las líneas de créditos que tenían INATEC LTDA y Obras Civiles INATEC limitada y que le permitieran operar y funcionar en el dinámico giro de la construcción, afectando las obras vigentes de la empresa";* la página 8, numeral 11: *"Las medidas también afectaron la marcha y funcionamiento normal de las sociedades intervenidas.- El señor interventor vivía en concepción y mismo reconoció que no asistía a las empresas intervenidas con la regularidad que se requiere...";* y la página 9, numeral 13: *"Conjuntamente con lo anterior y como consecuencia de lo indicado, las sociedades vieron gravemente comprometidas sus posibilidades de participar en licitaciones públicas y privadas, las que constituyen su principal negocio, lo anterior en razón de que ningún mandante se expondría a encargar una obra a una sociedad intervenida...". "De*



Foja: 1

esta manera, durante la intervención no fue posible adjudicarse licitación alguna, lo que afectó y trastocó gravemente el flujo y funcionamiento de las sociedades y su patrimonio, precipitando el declive de las 2 principales sociedades, a saber, INATEC LTDA y Obras Civiles INATEC limitada, las cuales hoy día se encuentran en proceso de liquidación”.

Aseveró que los supuestos daños y perjuicios sufridos a partir de la medida de intervención decretada por el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar, el propio señor Molinos los radica expresamente en las seis sociedades, especialmente en las empresas INATEC LTDA y Obras Civiles INATEC Limitada, las que supuestamente se habrían visto afectadas en su imagen, ante los mandantes, los bancos, etc. Entonces, el actor al comparecer en calidad de personal natural no tiene ningún tipo de titularidad o de legitimidad activa, para ahora, comparecer demandando daño emergente, lucro cesante y daño moral, si él mismo reconoce que estos supuestos daños los padecieron los entes jurídicos, totalmente ajenos a la presente relación jurídico procesal, por lo que la presente demanda deberá ser rechazada en todas sus partes.

Precisó que, a mayor abundamiento, atendido los antecedentes expuestos, no existe la relación causa y efecto entre los hechos invocados por el demandante y los perjuicios demandados, a partir que estos supuestos perjuicios los habrían padecido las seis sociedades, que no se encuentran demandadas en los presentes autos.

Agregó que la presente demanda indemnizatoria carece totalmente de antecedentes verídicos, así transcribió lo señalado por el actor en la página 9, numeral 13 de la demanda: *"De esta manera, durante la intervención no fue posible adjudicarse licitación alguna, lo que afectó y trastocó gravemente el flujo y funcionamiento de las sociedades y su patrimonio, precipitando el declive de las 2 principales sociedades, a saber, INATEC LTDA. y Obras Civiles INATEC Limitada, las cuales hoy día se encuentran en proceso de liquidación"*, lo que no resulta en lo más mínimo un hecho verídico a la luz de los antecedentes.

En efecto, ilustró que el actor, en representación de la Sociedad Inspecciones, Asesorías Técnicas y Construcción Limitada (INATEC Limitada), en el mes de mayo de 2017, se apersonó ante el mismo Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar, en causa Rol C-1823-2017, solicitando la reorganización y liquidación de la misma, sustentando esta primera gestión lo siguiente: *"Que, en la representación que invisto y de conformidad a los artículos 54 y siguientes de la Ley N°20.720, de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas, vengo en solicitar el inicio de un procedimiento concursal de reorganización respecto de la sociedad Inspecciones, Asesorías Técnicas y Construcción Limitada. Lo señalado*



Foja: 1

en virtud de la delicada situación financiera en que se encuentra la sociedad, la que se ha visto agravada en virtud del no pago por parte del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago de facturas emitidas desde septiembre del año 2016 por la suma de \$1.876.570.985.-, correspondientes al Contrato de Construcción de Red Secundaria de Alcantarillado Público de la comuna de Isla de Maipo". Como se podrá apreciar, en el proceso concursal de reorganización, se señala una causa diversa para la mala situación de la empresa, hecho que no expuso en la presente demanda indemnizatoria, procurando con ello confundir al tribunal con hechos y antecedentes carentes de total y absoluta veracidad, haciendo aparentar que la mala situación económica se debió a la medida prejudicial de interventor, lo que no resulta ser efectivo. Claramente la presente demanda indemnizatoria resulta ser absolutamente instrumental, con el claro propósito de sacar un provecho injusto, lo que no puede ser aceptado debiendo rechazarse la presente demanda en todas sus partes.

En cuanto a la presunción del artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, expresó que esta admite prueba en contrario, agregando que la falta de legitimación activa y la evidente falta de argumentos verídicos o fidedignos que detenta la presente demanda indemnizatoria debe ser relacionada con la presunción de dolo que establece el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, la que admite prueba en contrario. Dicha presunción de dolo que señala la referida disposición legal se desvirtúa por los mismos antecedentes expuestos en su contestación de la demanda y de los propios hechos reconocidos expresamente por el propio actor.

En primer lugar, arguyó que la medida prejudicial precautoria decretada por el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar, se basó en un hecho totalmente objetivo, esto es, en un informe de la reconocida empresa auditora Deloitte, la cual daba cuenta de las graves irregularidades en la administración del señor Carlos Molinos Orrego, tanto contables, financieras y tributarias, con operaciones sin ningún tipo de respaldo, tal como se expuso al comienzo de la contestación de la demanda.

En segundo lugar, se fundó en los propios dichos del actor, al reconocer en su solicitud de alzamiento de la medida prejudicial precautoria ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar, las motivaciones y calidades que tuvo la señora Earnest Callejas y sus tres hijos para solicitar las medidas prejudiciales de interventor y de prohibición de celebrar actos y contratos respecto de las seis sociedades que formaban la malla societaria, al señalar: "*Los solicitantes fundaron sus medidas prejudiciales, atendida su calidad de socios o accionistas de las 6 sociedades mencionadas, al haber sucedido en sus derechos al fallecido socio o*



Foja: 1

accionista de ellas, Sr. Mario Patricio Rodríguez Olivos, con el objeto de resguardar sus derechos sociales y patrimoniales comunes en esas 6 sociedades, en las cuales también es socio o accionista el Sr. Carlos Molinos Orrego”.

En tercer lugar, argumentó que los informes evacuados durante la gestión del interventor Enrique Concha Matus, no solo reafirmaron los hechos graves que daba cuenta el informe de Deloitte, sino que constató un sinnúmero de operaciones con sendos trasposos de dineros a las cuentas personales del señor Molinos sin ningún tipo de respaldo ni explicación lógica, ante la falta de documentación, etc.

Hizo presente, en este punto, y como se aprecia de la propia demanda, que sus fundamentos dicen más bien relación con un cuestionamiento a la labor que desplegó el interventor en las sociedades intervenidas y no con los fundamentos que hagan procedente esta acción indemnizatoria, lo que claramente no fue del gusto del actor, por cuanto se pudo constatar un sinnúmero de estas irregularidades, la que no fue solamente objeto de una medida prejudicial precautoria por parte de la Sra. Earnest y sus tres hijos, sino también objeto de una querella criminal por apropiación indebida y delito de estafa ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, la que se encuentra actualmente en etapa investigativa ante la Fiscalía Local de Viña del Mar. No puede entonces, considerar instrumentalizado o doloso el procedimiento, cuando a la luz de los antecedentes existen motivos graves y fundados en documentos, que han hecho procedente una medida prejudicial precautoria, con el único objeto, como lo reconoció el propio actor, de resguardar los derechos sociales y patrimoniales comunes en las sociedades.

Por último, indicó que en la medida prejudicial precautoria decretada por el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar, en cuanto a la medida de interventor, esta intervención se llevó a efecto conjuntamente con el señor Carlos Molinos Orrego, no perdiendo en ningún momento su administración y representación legal, por el contrario, este último pudo seguir adelante con las empresas, pero ahora controlado por el interventor, otra cosa es que el actor se vio sorprendido con esta figura legal, pudiendo tener su representada y sus tres hijos acceso a parte de la documentación de las empresas, a las que el señor Molinos no solo prohibía su acceso, sino que procuraba bajo todos los medios que los mismos no ingresaran a las instalaciones de estas empresas, situación que por lo demás se constató mediante la utilización de tres trabajadores de la empresa Inatec que interpusieron una demanda laboral en contra de la señora Earnest ante el Juzgado Laboral de Valparaíso por "vulneración de derechos", los cuales, sorprendentemente solicitaron en sus peticiones concretas, que *"se le prohibiera el ingreso a las*



Foja: 1

instalaciones de estas empresas", demanda que fue rechaza en todas sus partes por dicho juzgado del trabajo y confirmada por la Ilma. Corte de Apelaciones de Valparaíso. Lo mismo ocurrió con la medida de prohibición de celebrar actos y contratos respecto de las seis sociedades afectadas por la medida, como bien se aprecia de su parte final, en cuanto el señor Molinos mantuvo la administración y disposición de bienes, pero visado por el interventor, no vislumbrando perjuicio alguno.

Por tanto, finalizó solicitando tener por contestada la demanda indemnizatoria por responsabilidad extracontractual, deducida por don Carlos Molinos Orrego y, en mérito de lo expuesto, rechazarla en todas sus partes, con expresa condena en costas.

IV.- De la contestación de la demanda por los demandados doña Angélica Patricia Rodríguez Earnest, don Miguel Andrés Rodríguez Earnest y doña Catalina María Rodríguez Earnest.

A lo principal de presentación de 27 de noviembre de 2017, que se lee en folio 17, comparecieron doña Angélica Patricia Rodríguez Earnest, don Miguel Andrés Rodríguez Earnest y doña Catalina María Rodríguez Earnest, todos ya individualizados, quienes contestaron la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual deducida por don Carlos Manuel Molinos Orrego, ya individualizado, solicitando su más completo rechazo, con expresa condena en costas, en razón de los antecedentes de hecho y derecho que expusieron.

En primer lugar, dijeron que es efectivo que don Carlos Molinos Orrego, durante todos estos años, inició diversas tratativas tendientes a comprar la participación societaria, tanto de doña Bonnie Susan Earnest Callejas como de los tres demandados comparecientes, cuya insistencia de compra por parte del actor decía relación primordial con las empresas o sociedades Inatec Ltda. y Obras Civiles Inatec Limitada.

Reconocieron, también, ser efectivo lo señalado por el actor en cuanto que su madre la Sra. Earnest conjuntamente con los comparecientes, en forma previa a tomar cualquier tipo de decisión, requirieron un informe de la empresa Deloitte con el objeto de revisar la situación tributaria, contable y financiera de las dos empresas señaladas precedentemente, dado que el señor Molinos Orrego les negaba todo tipo de información de aquellas, administrándolas él mismo, impidiendo que su madre y ellos participasen en todo tipo de decisiones, aun cuando, según consta en los estatutos sociales, su madre era también socia, administradora y representante legal.



Foja: 1

Relataron que una vez evacuado el informe de la empresa Deloitte, su madre la Sra. Earnest y los comparecientes, tomaron conocimiento de las graves irregularidades, tanto financieras, contables y tributarias cometidas en la administración del señor Molinos Orrego, a modo ejemplar, traspasos millonarios a las cuentas personales del señor Molinos, falta de comprobantes contables y bancarios, falta de información de las empresas, etc., irregularidades que bien expone dicho informe de la empresa Deloitte.

Expresaron que, aun con estos antecedentes, insistieron en que el señor Molinos Orrego transparentara toda la información societaria, lo que negó a través de sus asesores legales, entre estos, los abogados don Guillermo de Las Heras y don Cristian Chadwick, manifestando que la documentación para su análisis era solo la que había sido entregada a la empresa Deloitte, aun cuando dicho informe refería que no se les había entregado toda la información requerida para realizar el análisis encomendado, principalmente de las empresas INATEC Ltda. y Obras Civiles INATEC Limitada.

Señalaron que, con antedichos antecedentes, y tomando conocimiento su madre la señora Earnest por intermedio de trabajadores de la misma empresa de las innumerables irregularidades que estaba cometiendo el actor, distrayendo bienes y dado a que este negaba todo tipo de información y más aún, negaba la entrada a las empresas para revisar papeles, es que tomaron la decisión de solicitar ante el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar la medida prejudicial precautoria de nombramiento de interventor y prohibición de celebrar actos y contratos sobre los bienes sociales de las empresas que formaban la malla societaria que el mismo Sr. Molinos se encarga de individualizar en su demanda de indemnización de perjuicios, causa Rol C-2529-2016, caratulada "Earnest con Molinos", aunque no señalan el Tribunal.

Les resultó relevante en este punto lo reconocido por el propio actor en el numeral 5.2 de su solicitud de medida prejudicial, quien manifiesta expresamente las motivaciones y calidades que tuvieron los comparecientes y su madre Sra. Earnest Callejas para solicitar las medidas prejudiciales de interventor y de prohibición de celebrar actos y contratos respecto de las seis sociedades que formaban la malla societaria, punto que transcribieron: *"Los solicitantes fundaron sus medidas prejudiciales, atendida su calidad de socios o accionistas de las 6 sociedades mencionadas, al haber sucedido en sus derechos al fallecido socio o accionista de ellas, Sr. Mario Patricio Rodríguez Olivos, con el objeto de resguardar sus derechos sociales y patrimoniales comunes en esas 6 sociedades, en las cuales también es socio o accionista el Sr. Carlos Molinos Orrego"*. Es decir, el propio actor reconoce expresamente cuáles fueron las motivaciones y



Foja: 1

objetivos de solicitar las medidas ante el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar por parte de los demandados, estos es, resguardar sus derechos sociales y patrimoniales comunes en las seis sociedades. En otras palabras, no por un mero capricho, sino por antecedentes graves y calificados, que el mismo actor se encarga de manifestar.

Destacaron que el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar tomando en consideración como antecedente grave y calificado el mismo informe de la reconocida empresa auditora Deloitte, es que concedió la medida prejudicial precautoria en el siguiente tenor: *“A lo principal. Atendido el mérito de los antecedentes, lo expresado por el demandante, teniendo en especial consideración lo dispuesto en los artículos 290 N°2, 293 N°3, 294, 298 y 300 del Código de Procedimiento Civil, así como el hecho que los documentos acompañados constituyen, a juicio de esta sentenciadora, presunción grave del derecho que se reclama, lo que unido al hecho que lo que se pretende a través de esta medida es el resguardo respecto del paquete accionario de que es parte la demandante, como asimismo, su fin último, cual es, asegurar el resultado de la acción, se resuelve que: Ha lugar a lo solicitado, concédase medida prejudicial de nombramiento de interventor respecto de las sociedades Inversiones Con-Con S.A; Inatec Ltda.; Inversiones Concón Dos S.A; Obras Civiles batee Limitada; Inmobiliaria Moro Limitada; Transportes Moro Limitada y en todas ellas que en su conjunto constituyen la malla societaria, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 293 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, designándose como Interventor atendida su calidad de abogado y de pertenecer a la nómina de liquidador y veedor de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento a don Enrique Concha Matas, teléfono (41) 2227798 - (9) 8263262, domiciliado en Orompello N°120, Concepción, correo electrónico emiqueconcha@sinclicodequiebras.cl.*

“Notifíquese personalmente a fin de que acepte el cargo o notifíquese de la forma más idónea a fin de que tome conocimiento de la presente designación.

“Del mismo modo, se concede desde luego la medida prejudicial precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos, respecto de las sociedades indicadas precedentemente, limitando las facultades de administración y representación legal de don Carlos Manuel Molinos Orrego para la administración, disposición de bienes sociales y facultad de obligar válidamente a la sociedad, pudiendo administrarla y hacer uso de su razón social únicamente en conjunto con el interventor designado o previa visa por escrito del interventor.

“Inscríbese la medida a través de Receptor judicial en el Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar y Conservador de Bienes Raíces de Concón, a los



Foja: 1

efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 297 inciso 19 del Código de Procedimiento Civil".

Agregaron que antedicha medida prejudicial, fue mantenida en carácter de precautoria por el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar, rechazando sendas solicitudes de alzamiento por parte del actor, quien compareció a estrados en representación de las seis sociedades y, apelada que fue, la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso alzó la medida en la causa Rol de Corte 2128-2016, por considerar que dentro de las acciones enunciadas no se interpuso la acción de disolución de dichas seis sociedades.

Argumentaron que, fundado en la precitada resolución judicial, don Carlos Molinos Orrego comparece ahora, en calidad de persona natural ante este Tribunal, interponiendo demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, fundado en el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, por considerar "Doloso el procedimiento", alegando en su calidad de persona natural sendos daños sufridos con ocasión de la medida prejudicial decretada, a saber, daño emergente, lucro cesante y daño Moral.

Alegaron -además- como excepción de fondo, la falta de legitimación activa del actor, toda vez que, resulta ser un hecho no discutido en estos autos que el señor Molinos Orrego comparece en calidad de persona natural, mas no en calidad de representante legal de las 6 sociedades que conforman la malla societaria.

Sin embargo, expresaron que para que opere el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil con las circunstancias y consecuencias señaladas en su inciso 2°, se requiere imperiosa y necesariamente que se haya decretado una medida prejudicial precautoria y que esta medida haya afectado directamente al futuro demandado invadiendo su esfera patrimonial, no pudiendo aprovecharse de tal circunstancia aquellos demandados que no se vieron afectados en su esfera patrimonial con la medida prejudicial o precautoria. En otras palabras, el titular de la acción indemnizatoria, fundado en el inciso 2° del artículo 280 del Código de Procedimiento Civil (doloso el procedimiento), será necesariamente el demandado que se vio afectado directamente en su esfera patrimonial, privándolo de los atributos de su dominio o patrimonio, a modo ejemplar, el demandado afectado por una medida precautoria de prohibición de celebrar actos contratos sobre su propiedad; el demandado objeto de una medida de secuestro sobre un bien mueble de su dominio; etc., no pudiendo aprovecharse los otros demandados que no vieron afectado su dominio o esfera patrimonial de disposición de bienes con la medida decretada, última hipótesis en la que se ajusta el actor, desde el momento que las medidas prejudiciales precautorias decretadas por el 2° Juzgado Civil de



Foja: 1

Viña del Mar lo fueron en contra de las seis sociedades y no en contra del señor Molinos en su calidad de persona natural, hechos que este mismo reconoció ante el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar al solicitar el alzamiento de dicha medida prejudicial precautoria y también ante la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso (Recurso de Apelación), no tendiendo la titularidad o legitimación activa para demandar los daños y perjuicios que livianamente invoca, ahora en calidad de persona natural.

Trascribió, en lo pertinente, la presentación de 22 de agosto del 2016, para ante el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar, en causa Rol 2529-2016, mediante la cual el actor solicitó el alzamiento de la medida, señalando lo siguiente: página 5, párrafo 4°: *"Como consta de la solicitud, toda la lata exposición de los fundamentos que harían procedentes las medidas prejudiciales, se basa en que el futuro demandado de autos sería el Sr. Carlos Molinos Orrego, sin embargo, las medidas solicitadas se solicitaron decretaron respecto de terceros, esto es, las sociedades Inversiones Con-Con S.A; INATEC LTDA; Inversiones Con-Con Dos S.A; Obras Civiles INATEC LTDA; Inmobiliaria Moro Limitada y Transportes Moro Limitada, mediante el nombramiento de un interventor y mediante la prohibición de celebrar de celebrar actos y contratos que limitó las facultades de administración, disposición y representación legal de don Carlos Manuel Molinos Orrego, última la cual si bien atañe al Sr. Carlos Molinos Orrego (porque afecta su calidad de administrador), lo cierto es que afecta directamente a las sociedades ya que altera su normal funcionamiento"* (SIC). Luego, en la página 5, párrafo 5° refirió: *"De esta forma, las medidas prejudiciales decretadas pueden impetrarse solamente por el demandante en contra de quien este se propone dirigir la demanda y consta de autos que el nombramiento de interventor y de prohibición de celebrar actos y contratos respecto de las sociedades resulta improcedente, pues dichas entidades conforman una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados de acuerdo a la normativa legal, en este caso, son entidades distintas del futuro demandado Sr Molinos. (SIC)*. Finalmente, en la página 6, párrafos 4 y 5 dijo: *"Como se ha dicho, y como consta del tenor de la resolución de fecha 4 de Julio pasado, las Medidas Prejudiciales de autos se decretaron respecto de sociedades"*(SIC). No obstante, fueron las seis sociedades las personas jurídicas contra quien se dictaron las medidas prejudiciales.

Además, se refirió, en lo pertinente, al recurso de apelación deducido en septiembre de 2016 por don Carlos Molinos Orrego, para ser conocido por la Ilma. Corte de Apelaciones de Valparaíso y que dio origen al Rol N°2128-2016, hoy invocado por el actor. En dicho recurso, el demandante en su página 2, párrafos 4 y 5, reiteró en idénticos términos lo señalado recientemente, esto es, que las



Foja: 1

medidas se solicitaron y decretaron respecto de terceros, las seis sociedades ya citadas.

Sostuvieron que ninguna duda cabe, al ser un hecho expresamente reconocido por el propios Sr. Molinos, que se extrae de sus propias presentaciones o escritos, que las medidas prejudiciales afectaron y se decretaron directamente en contra de terceras personas, en contra de seis sociedades siendo, por tanto, un hecho no discutido por las partes en este proceso judicial.

Reiteraron que, así las cosas, don Carlos Molinos Orrego no tienen ningún tipo de titularidad o legitimación activa para demandar los supuestos perjuicios que señala haber sufrido, ahora en calidad de persona natural, si él mismo reconoció que las medidas afectaron a terceras personas (seis sociedades), siendo en consecuencia aquellas las titulares para interponer la presente demanda indemnizatoria y no el señor Molinos en calidad de persona natural.

Arguyeron que la falta de titularidad o de legitimación activa que afecta al señor Molinos se ve también reflejada a partir de los hechos en que sustenta la presente demanda indemnizatoria, en cuanto al origen de los perjuicios y al sustento del daño emergente, lucro cesante y daño moral, en que de una simple lectura, se constata que las medidas afectaron a las seis sociedades las que se vieron afectadas en su imagen.

A modo ejemplar, transcribió algunos pasajes de la demanda. Así, en la página 7, numeral 10, refiere: *"En efecto, la figura del interventor, quien este caso correspondió al Sr. Enrique Concha Matus y el anuncio de que se demandaría la disolución de las sociedades, afectó la imagen de las sociedades, redundando en un perjuicio para sus clientes y en el mercado de la construcción, su personal y ante los propios Bancos"... "En la práctica ello importó que los Bancos paralizaran las líneas de créditos que tenían INATEC LTDA y Obras Civiles INATEC limitada y que le permitieran operar y funcionar en el dinámico giro de la construcción, afectando las obras vigentes de la empresa".* Luego, en la página 8, numeral 11, sostiene: *"Las medidas también afectaron la marcha y funcionamiento normal de las sociedades intervenidas. El señor interventor vivía en Concepción y él mismo reconoció que no asistía a las empresas intervenidas con la regularidad que se requiere".* También en la página 9, numeral 13, indica: *"Conjuntamente con lo anterior y como consecuencia de lo indicado, las sociedades vieron gravemente comprometidas sus posibilidades de participar en licitaciones públicas y privadas, las que constituyen su principal negocio, lo anterior en razón de que ningún mandante se expondría a encargar una obra a una sociedad intervenida...". "De esta manera, durante la intervención no fue posible adjudicarse licitación alguna, lo que afectó y trastocó gravemente el flujo y funcionamiento de las sociedades y*



Foja: 1

su patrimonio, precipitando el declive de las 2 principales sociedades, a saber, INATEC LTDA y Obras Civiles INATEC limitada, las cuales hoy día se encuentran en proceso de liquidación". De todo lo cual advierte que los supuestos daños y perjuicios sufridos a partir de la medida de intervención decretada por el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar, el propio señor Molinos los radica expresamente en las seis sociedades, especialmente en las empresas EVATEC LTDA y Obras Civiles INATEC Limitada, las que supuestamente se habrían visto afectadas en su imagen, ante los mandantes, los bancos, etc.

Evidenció que don Carlos Molinos Orrego, al comparecer en calidad de persona natural, no tiene ningún tipo de titularidad o de legitimidad activa para ahora comparecer demandando daño emergente, lucro cesante y daño moral, si él mismo reconoce que estos supuestos daños los padecieron o afectaron a los entes jurídicos, totalmente ajenos a la presente relación jurídico procesal, por lo que la presente demanda deberá ser rechazada en todas sus partes.

A mayor abundamiento, expresaron que no existe relación causa efecto entre los hechos invocados por el Sr. Molinos y los perjuicios demandados, ya que estos supuestos perjuicios los habrían padecido seis sociedades, las que no accionan en los presentes autos.

Señalaron que la presente demanda indemnizatoria carece de antecedentes verídicos y fundantes, a pesar de lo aseverado por el señor Molinos en la página 9, numeral 13, que indica: *"De esta manera, durante la intervención no fue posible adjudicarse licitación alguna, lo que afectó y trastocó gravemente el flujo y funcionamiento de las sociedades y su patrimonio, precipitando el declive de las 2 principales sociedades, a saber, INATEC LTDA y Obras Civiles INATEC limitada, las cuales hoy día se encuentran en proceso de liquidación";* antedicha afirmación dijeron no ser un hecho verídico a la luz de los antecedentes, toda vez que el mismo actor en representación de la Sociedad Inspecciones, Asesorías Técnicas y Construcción Limitada (INATEC Limitada), en el mes de mayo de 2017 se apersonó ante el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar, en causa Rol C1823-2017, solicitando la reorganización y liquidación de la señalada sociedad, arguyendo como fundamento lo siguiente: *"Que, en la representación que invisto y de conformidad a los artículos 54 y siguientes de la Ley N°20.720, de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas, vengo en solicitar el inicio de un procedimiento concursal de reorganización respecto de la sociedad Inspecciones, Asesorías Técnicas y Construcción Limitada. Lo señalado en virtud de la delicada situación financiera en que se encuentra la sociedad, la que se ha visto agravada en virtud del no pago por parte del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago de facturas emitidas desde septiembre del año 2016*



Foja: 1

por la suma de \$1.876.570.985, correspondientes al Contrato de Construcción de Red Secundaria de Alcantarillado Público de la comuna de Isla de Maipo". Así, en el proceso concursal de reorganización se señala una causa diversa, la mala situación de la empresa, hecho que no expuso en la presente demanda indemnizatoria, procurando confundir al tribunal con hechos y antecedentes carentes de veracidad, aparentando que la mala situación económica de la empresa se debió a la medida prejudicial de interventor, lo que no resulta ser efectivo. En base a lo anterior afirmaron que la presente demanda indemnizatoria es absolutamente instrumental, con el claro propósito de sacar un provecho injusto, lo que no puede ser aceptado por el Tribunal, debiendo rechazarla en todas sus partes.

En lo relativo a la presunción del artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, sostuvieron que esta admite prueba en contrario. Además, que la falta de legitimación activa y la evidente falta de argumentos verídicos o fidedignos de la demanda indemnizatoria, debe relacionarse con la presunción de dolo que establece el citado artículo, reiterando que admite prueba en contrario.

Destacaron que la presunción de dolo del artículo 280 del Código de Procedimiento Civil se desvirtúa por los mismos antecedentes expuestos en la contestación de la demanda y de los propios hechos reconocidos expresamente por el actor. En primer lugar, porque la medida prejudicial precautoria decretada por el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar se basó en un hecho totalmente objetivo, esto es, en un informe de la reconocida empresa auditora Deloitte, que daba cuenta de las graves irregularidades en la administración por parte de don Carlos Molinos Orrego, tanto contables, financieras y tributarias, con operaciones sin ningún tipo de respaldo, tal como se expuso al comienzo de la contestación de la demanda. En segundo lugar, al reconocer el actor en su solicitud de alzamiento de la medida prejudicial precautoria para ante el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar, numeral 5.2, las motivaciones y calidades que tuvieron para solicitar las medidas prejudiciales de interventor y de prohibición de celebrar actos y contratos respecto de las seis sociedades que formaban la malla societaria, al señalar: "*Los solicitantes fundaron sus medidas prejudiciales atendida su calidad de socios o accionistas de las 6 sociedades mencionadas al haber sucedido en sus derechos al fallecido socio o accionista de ellas, Sr. Mario Patricio Rodríguez Olivos, con el objeto de resguardar sus derechos sociales y patrimoniales comunes en esas 6 sociedades, en las cuales también es socio y accionista el Sr. Carlos Molinos Orrego*". En tercer lugar, porque los informes evacuados durante la gestión del interventor don Enrique Concha Matus, no solo reafirmaron los hechos graves que daba cuenta el informe de Deloitte, sino que constató un sinnúmero de



Foja: 1

operaciones con sendos traspasos de dineros a las cuentas personales del señor Molinos sin ningún tipo de respaldo ni explicación lógica, la falta de documentación, etc.

Hicieron presente que, como se aprecia de la propia demanda, sus fundamentos dicen más bien relación con un cuestionamiento a la labor que desplegó el interventor en las sociedades intervenidas y no con los fundamentos para hacer procedente esta acción indemnizatoria, lo que claramente no fue del gusto del actor, por cuanto se pudo constatar un sinnúmero de irregularidades, lo que no fue solamente objeto de una medida prejudicial precautoria, sino también de una querrella criminal por apropiación indebida y delito de estafa ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, la que se encuentra actualmente en etapa investigativa ante la Fiscalía Local de Viña del Mar.

Indicaron que no puede considerarse instrumentalizado o doloso el procedimiento, cuando a la luz de los antecedentes existen motivos graves, fundados en documentos, que han hecho procedente una medida prejudicial precautoria, con el único objeto, como lo reconoció el propio actor, de resguardar sus derechos sociales y patrimoniales comunes en las seis sociedades.

Argumentaron, además, que del análisis de la medida prejudicial precautoria decretada por el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar, en cuanto a la medida de interventor, esta intervención se llevó a efecto conjuntamente con don Carlos Molinos Orrego, no perdiendo en ningún momento la administración y representación legal, por el contrario, este último pudo seguir adelante con las empresas, pero ahora controlado por el interventor; otra cosa es que el actor se vio sorprendido con esta figura legal, pudiendo tener la Sra. Earnest y los comparecientes acceso a parte de la documentación de las empresas, a la cual el señor Molinos prohibía su acceso o conocimiento y procuraba bajo todos los medios que no ingresasen a las instalaciones de las empresas, situación que se constató mediante la utilización de tres trabajadores de la empresa Inatec que interpusieron una demanda laboral en contra de la madre de los comparecientes, en su calidad de representante legal, ante el Juzgado Laboral de Valparaíso por "vulneración de derechos", quienes sorprendentemente solicitaron en sus peticiones concretas que "se le prohibiera el ingreso a las instalaciones de estas empresas", demanda que fue rechazada en todas sus partes por dicho Juzgado del Trabajo y confirmada por la Ilma. Corte de Apelaciones de Valparaíso. Lo mismo ocurrió con la medida de prohibición de celebrar actos y contratos respecto de las seis sociedades afectadas por la medida, como bien se aprecia de su parte final, en cuanto el señor Molinos mantuvo la administración y disposición de bienes, pero visado por el interventor, no vislumbrando perjuicio alguno.



Foja: 1

Concluyeron su petitorio, y solicitaron tener por contestada la demanda indemnizatoria por responsabilidad extracontractual deducida por don Carlos Molinos Orrego y, en mérito de lo expuesto, pidieron rechazarla en todas sus partes, con expresa condena en costas.

V.- Del trámite de réplica.

Mediante presentación de 5 de diciembre de 2017, en folio 22, la parte demandante evacuó el trámite de réplica, ratificando todos y cada uno de los argumentos expuestos en la demanda y efectuando, además, algunas precisiones en relación a las excepciones y alegaciones de los demandados, las que solicitó se consideren como adiciones o ampliaciones a la acción contenida en la demanda de autos.

Hizo presente que si bien los demandados procedieron a contestar la demanda en escritos distintos (la Sra. Susan Earnest mediante escrito de 24 de noviembre de 2017, y sus hijos mediante escrito de 27 de noviembre pasado), lo cierto es que los escritos son idénticos, por lo que la réplica se hace cargo de ellos de manera conjunta, como si hubiese sido una solo escrito de contestación.

Dijo que, en términos generales, los demandados opusieron las siguientes excepciones, alegaciones o defensas en relación a la demanda de autos:

Primero, la falta de legitimidad activa del actor. Así, refirió que según los demandados, para ejercer la acción indemnizatoria amparada en el inciso 2° del artículo 280 del Código de Procedimiento Civil *“se requiere imperiosa y necesariamente que se haya decretado una medida prejudicial precautoria, y que esta medida haya afectado directamente al futuro demandado invadiendo su esfera patrimonial”*, privándolo de los atributos de su dominio o patrimonio, no pudiendo aprovecharse los otros demandados que no vieron afectado su dominio o esfera patrimonial de disposición de bienes con la medida decretada.

Argumentó que, como si la demanda hubiese dicho algo distinto, en este punto la contestación se dedica a transcribir extractos de escritos del actor como forma de afirmar que las medidas prejudiciales precautorias que sirven de sustento a la presente demanda se decretaron respecto de las sociedades (i) Inversiones Con-Con S.A., Rol Único Tributario N°76.067.965-8; (ii) Inspecciones, Asesorías Técnicas y Construcción Limitada, o INATEC Ltda, Rol Único Tributario N°77.167.300-7; (iii) Inversiones Con-Con Dos S.A., Rol Único Tributario N°76.085.664-9; (iv) Obras Civiles INATEC Limitada, Rol Único Tributario N°76.235.900-6; (v) Inmobiliaria Moro Limitada, Rol Único Tributario N°76.067.983-6; y (vi) Transportes Moro Limitada, Rol Único Tributario N°76.181.982-8, y no directamente respecto del Sr. Molinos.



Foja: 1

Relató que la contestación indica que el demandante no tendría titularidad o legitimación activa para demandar los supuestos perjuicios que señala haber sufrido, ya que las medidas prejudiciales precautorias afectaron a terceras personas (a las seis sociedades indicadas), siendo aquellas las titulares para interponer la presente demanda indemnizatoria y no el señor Molinos en calidad de persona natural.

En segundo lugar, recordó que los demandados afirman no existir relación causa efecto entre los hechos invocados por el actor y los perjuicios demandados, ya que los supuestos perjuicios los habrían padecido las 6 sociedades objeto de las medidas prejudiciales precautorias, que no se encuentran demandando en los presentes autos.

En tercero lugar, agregó que la contestación afirma que la demanda de autos carece totalmente de antecedentes verídicos y fundantes. Sobre esta alegación, señalan los demandados que en el proceso concursal de reorganización de las sociedades Inspecciones, Asesorías Técnicas y Construcción Limitada (INATEC Ltda.) don Carlos Molinos arguyó una causa diversa a la mala situación de la empresa (el no pago por parte del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago de facturas emitidas desde septiembre del año 2016 por la suma de \$1.876.570.985, correspondientes al contrato de construcción de red secundaria de alcantarillado público de la comuna de Isla de Maipo), hecho que no se expuso en la presente demanda indemnizatoria; y adicionan que esa omisión tuvo por objeto confundir al tribunal con hechos y antecedentes carentes de veracidad, haciendo aparentar que la mala situación económica de la empresa se debió a las medidas prejudiciales, lo que no resulta ser efectivo y demuestra el claro objetivo instrumental de la demanda de autos cuyo objeto es obtener un provecho injusto.

Finalmente señala la contestación que la presunción de dolo que establece el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil admite prueba en contrario, presunción que se desvirtuaría por lo siguiente: (i) porque la medida prejudicial precautoria decretada por el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar se habría basado en un hecho totalmente objetivo, esto es, en un informe de la empresa auditora Deloitte, la cual daría cuenta de las graves irregularidades en la administración por parte de don Carlos Molinos Orrego; (ii) por el fin u objetivo de los demandados para solicitar las medidas prejudiciales precautorias; (iii) porque los informes evacuados durante la gestión del interventor don Enrique Concha Matus no solo habrían reafirmado los hechos graves de que daría cuenta el informe de Deloitte, sino que habría constatado varias operaciones con sendos traspasos de dineros a las cuentas personales del señor Molinos sin ningún tipo de respaldo y explicación lógica; (iv) porque la intervención de las seis empresas se llevó a efecto



Foja: 1

conjuntamente con don Carlos Molinos Orrego, no perdiendo aquel en ningún momento la administración y representación legal de las empresas intervenidas, manteniendo la facultad de disposición de bienes, ya que sólo debía actuar autorizado o visado por el Interventor.

Adelantó que en los párrafos siguientes su parte se hará cargo, en el mismo orden antes señalado, de cada una las excepciones, alegaciones o defensas opuestas por los demandados en su contestación.

En cuanto a la supuesta falta de legitimidad activa de don Carlos Molinos Orrego y de relación causal entre los hechos invocados y los perjuicios demandados, manifestó que esta excepción debe ser rechazada por cuanto a diferencia de cómo lo entienden los demandados, don Carlos Molinos sí tiene legitimación activa para actuar en estos autos. Al efecto, los demandados sustentan su excepción de falta de titularidad o legitimación activa simplemente en el hecho que las medidas prejudiciales precautorias afectaron a terceras personas (a las seis sociedades ya referidas) y no al señor Molinos en calidad de persona natural. Es más, realizan esa afirmación como si la demanda no hubiese indicado la forma cómo se decretaron las referidas medidas.

Afirmó que, como bien lo saben los demandados, el Sr. Molinos pretende con la presente demanda la reparación pecuniaria o patrimonial encaminada a indemnizar los daños que provienen, en este caso, de una infracción al principio general de no dañar a otro (artículo 2314 del Código Civil), amparado en el estatuto de la responsabilidad extracontractual, en tanto ha demandado perjuicios sufridos en su calidad de socio de las seis sociedades objeto de las medidas prejudiciales, y de los daños propios sufridos a consecuencia de ellas. Ese es el interés específico del actor, por lo tanto y en este entendido está legitimado para accionar, con total independencia de las pretensiones que eventualmente puedan corresponder a las empresas que se vieron afectadas con las medidas.

Recordó que los demandados al fundar su excepción señalan que *"...el titular de la acción indemnizatoria, fundado en el inciso 2° del artículo 280 del CPC (doloso el procedimiento), será necesariamente el demandado que se vio afectado directamente en su esfera patrimonial, privándolo de los atributos de su dominio o patrimonio..."*, pues bien, esa es precisamente la situación de don Carlos Molinos quien se vio directamente afectado con las medidas prejudiciales solicitadas con un fin netamente "instrumental" y ajeno absolutamente al verdadero objeto y sentido de las medidas prejudiciales, cual fue ejercer un medio de presión y derechamente perjudicarlo mediante medidas precautorias que afectaron a las seis sociedades, principal fuente de trabajo e ingresos del actor. En mérito de lo anterior, no es efectivo que no exista una relación causa efecto, entre el ilícito civil



Foja: 1

invocado por el Sr. Molinos como fundamento de su acción y los perjuicios demandados, lo anterior, además, dijo ser materia de prueba en la etapa procesal correspondiente.

Respecto a la alegación que la demanda de autos carece totalmente de antecedentes verídicos y fundantes, se afirma por los demandados que don Carlos Molinos señaló una causa diversa de la mala situación de la empresa INATEC Limitada al momento de solicitar la reorganización de dicha empresa (el no pago por parte del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago de facturas emitidas desde septiembre del año 2016 por la suma de \$1.876.570.985.-), hecho que no se expuso o que se habría omitido en la presente demanda indemnizatoria. En este orden, sostuvo que dicha alegación además de vacía y rebuscada, es totalmente improcedente. En primer término, porque el hecho que el actor no haya expuesto como fundamento de la solicitud de reorganización que sus propios consocios solicitaron medidas prejudiciales instrumentales en contra de su propia sociedad, ninguna relevancia o incidencia tiene ni tenía para los efectos de la solicitud de reorganización, ni menos para los efectos de este juicio; en segundo término, porque tal como lo afirman los demandados, la solicitud de reorganización señala expresamente que la delicada situación financiera de INATEC Limitada: “... se ha visto agravada en virtud del no pago por parte del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago...”, por lo que dicha afirmación no excluye de ninguna manera el grave perjuicio causado al demandante por la ilícita actuación de los demandados.

Finalmente dijo, que tal como lo afirman los demandados, la demanda se funda en un ilícito civil respecto del cual la propia ley establece una presunción de dolo, de manera que recae en los demandados la carga de desvirtuar dicha presunción. Ahora bien, no cree que la forma de hacerlo sea mediante la afirmación de verdades a medias, mediante el intento de desvirtuar los hechos tal como ocurrieron, desconociendo circunstancias y hechos irrefutables.

Expuso que los hechos relatados en la demanda y en que se sustenta la acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, son evidentes respecto a los efectos que generaron las medidas solicitadas, así como el desinterés y desprecio por el daño ajeno y, fundamentalmente, por el abuso del derecho en el ámbito procesal de los demandados, quienes lograron la concesión de las medidas prejudiciales sin preocuparse ni siquiera de presentar su anunciada demanda. Las medidas precautorias se lograron con fines netamente instrumentales, con abuso del derecho, dolo o culpa, determinantes de una conducta totalmente reprochable y con negligencia del cumplimiento del mínimo de su deber procesal.



Foja: 1

Concluyó y solicitó tener por evacuado el trámite de réplica en los términos expuestos.

VI.- Del trámite de dúplica.

Al primer otrosí de presentación de 15 de diciembre de 2017, de folio 28, compareció don Roberto Arroyo Correa, abogado, quién evacuó el trámite de dúplica en representación de los cuatro demandados de autos, conforme los fundamentos que expresó.

Advirtió que, conforme los hechos y fundamentos expuestos, tanto en la demanda como en las contestaciones, y ahora en la réplica del actor, es que existen hechos no controvertidos entre las partes, que resultan absolutamente relevantes a la hora de resolver el presente juicio, y que hacen procedente el completo rechazo de la demanda del don Carlos Molinos Orrego.

En primer lugar, señaló existir concordancia entre las partes en que las medidas prejudiciales precautorias decretadas por el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar fueron y afectaron a las seis sociedades ya individualizadas en estos autos. Este hecho es reconocido por el actor en su demanda y ahora en su escrito de réplica, como bien lo expone en el numeral 1 de dicha presentación.

Luego, afirmó ser un hecho no controvertido por las partes, que todos sus representados, demandados en estos autos, son consocios junto al demandante señor Molinos en las sociedades sobre las que recayeron las medidas prejudiciales precautorias y que, efectivamente, todos sus representados accionaron ante el 2° Juzgado Civil en la causa Rol C 2529-2016, con el objeto de proteger su patrimonio social, tal como el actor lo reconoció en su demanda y en su escrito de réplica en el numeral 2° que refiere: “...*que sus propios consocios solicitaron medidas prejudiciales instrumentales en contra de su propia sociedad...*”.

En tercer lugar, aseveró que también es un hecho no controvertido por las partes, que el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar concedió las medidas prejudiciales precautorias fundado en un informe de la empresa auditora Deloitte, el cual daba cuenta de diversas irregularidades durante la administración y representación por parte de don Carlos Molinos Orrego, documento que este último se encargó de exponer en su escrito de demanda. Luego, encontrándose acreditado este hecho relevante, a la hora de evaluar las causas y antecedentes graves que tuvo en vista el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar, no resulta plausible lo aseverado por el actor en orden a sostener en su demanda y en su escrito de réplica que las medidas prejudiciales precautorias tuvieron un fin “Netamente Instrumental” destinado a perjudicar, presionar y dañar al señor Molinos.



Foja: 1

Argumentó, que esta supuesta instrumentalización que señala el actor se desvirtúa por sí sola con el informe de la empresa auditora Delloite, que tuvo en vista el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar al momento de decretar las medidas prejudiciales y, posteriormente, con el propio informe del interventor don Enrique Concha Matus, que vino a reafirmar o corroborar no solo las irregularidades que daba cuenta el informe de Deloitte, sino también un sin número de operaciones financieras, contables y tributarias sin respaldo alguno, con grandes trasposos de dineros desde las sociedades a las cuentas personales del señor Molinos Orrego y el hecho que este último no daba cuenta de su gestión a sus representados, procurando que estos no tuviesen acceso a la documentación de las empresas, principalmente de las sociedades Inatec Ltda. y Obras Civiles Inatec Limitada.

Agregó que, tal como sostuvo en su escrito de contestación de demanda, el hecho curioso que tres trabajadores de antedichas empresas interpusieron una demanda por "Tutela Laboral" ante el Juzgado del Trabajo de Valparaíso, en contra de su representada doña Bonnie Susan Earnest Callejas, cuyas peticiones concretas, nunca vistas en este tipo de procedimientos, estaban encaminadas a que la Sra. Earnest y su equipo jurídico no tuviese acceso a las instalaciones de las empresas o sociedades, que no tuviese contacto o comunicación con todos los trabajadores de aquellas, demanda laboral que fue rechazada en todas sus partes, con costas, como ofreció acreditar en la etapa procesal respectiva.

Destacó que, a mayor abundamiento, todos los hechos y antecedentes expuestos en el informe de Deloitte y en los informes del interventor, dieron origen a una querella criminal interpuesta por todos sus representados en contra del señor Molinos ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, la que se encuentra en actual etapa investigativa por parte del Ministerio Público, pero –dijo– para el señor Molinos seguro que también constituye una querella instrumentalizada.

Expresó que estos antecedentes, por sí solos, no solo desvirtúan la alegación que las medidas prejudiciales decretadas por el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar tuvieron un fin "netamente instrumental", sino más relevante aún, desvirtúa la presunción de dolo del artículo 280 del Código de Procedimiento Civil en que se asila livianamente el actor, para sustentar la presente demanda indemnizatoria en contra de todos sus representados.

En relación con la falta de legitimación activa del actor, reiteró en este punto que resulta ser un hecho no controvertido por las partes el que las medidas prejudiciales precautorias se decretaron en contra de las seis sociedades. Luego, don Carlos Molinos Orrego no tiene legitimación activa para demandar estos supuestos perjuicios en calidad de persona natural, no pudiendo aprovecharse y



Foja: 1

atribuirse perjuicios sufridos, cuando las medidas afectaron a las sociedades, ajenas a la presente relación procesal.

Hizo presente que, si hubiesen existido los daños a que alude en su demanda el actor, y conforme a sus propios fundamentos, el titular para accionar o demandar es exclusivamente alguna de las sociedades, y no como ahora en su escrito de réplica el actor aduce ejercer este derecho en "calidad de socio de las sociedades", no siendo en consecuencia titular de la presente acción indemnizatoria, constatándose la falta de legitimación activa.

Reforzó la idea de que no resulta conforme a derecho que un socio accione, invocando su calidad de socio, por perjuicios que hubiesen sufridos las sociedades, por cuanto estas deben comparecer a través de sus representantes legales con facultades suficientes, circunstancia que no invocó el señor Molinos Orrego y, claro está, por cuanto éste reafirma su comparecencia en su calidad de persona natural, aduciendo ahora en su escrito de réplica comparecer en su calidad de socio, misma calidad que detentan todos sus representados en esas seis sociedades, como lo reconoce el propio actor.

Le resultó contrario a la lógica, que siendo todos sus representados consocios junto con el señor Molinos Orrego, hayan pretendido -con ocasión de las medidas prejudiciales- perjudicar a las seis sociedades en su imagen con bancos, clientes, que no participara en licitaciones, etc., si éstas constituían la fuente de ingresos de todos sus representados, hasta que el actor desde el año 2014 en adelante, privó a todos ellos de la información de las empresas y acceso a la documentación financiera y bancos, sin dar cuenta de su gestión como administrador, como bien constató el informe de Delloite y del interventor don Enrique Concha Matus, lo que llevó, tal como dice el propio actor: *"a que sus representados accionaran con el objeto de proteger su patrimonio societario"*. Así, no resulta lógico que sus representados hayan querido perjudicar la imagen de estas seis sociedades, si –como se dijo- éstas constituían su fuente de ingresos.

Indicó que cosa diversa es que el señor Molinos pretenda atribuirse personalmente daños ocasionados a su persona, en calidad de socio, los que dijo ser inexistentes. Lo anterior revela el actuar que el demandante ha tenido durante estos últimos años, comportarse como señor y dueño de las sociedades en referencia, desconociendo a todos sus otros socios, esto es, a todos sus representados.

De esta forma, reiteró que queda acreditada la falta de legitimación activa de don Carlos Molinos Orrego.

Finalizó analizando el peregrino cimiento expuesto por el actor al referirse al punto N°2 de su escrito de réplica, en cuanto a los fundamentos que tuvo en vista



Foja: 1

la empresa Inatec Ltda. al momento de solicitar su reorganización, restándole total trascendencia, lo que no es menor, por cuanto el propio actor en dicho proceso judicial de reorganización expuso claramente los antecedentes en que fundaba la alicaída situación económica de la sociedad, sin referirse de modo alguno a que las consecuencias nefastas para la empresa se debían a las medidas prejudiciales precautorias interpuestas por los otros socios.

Concluyó su petitorio, y solicitó tener por evacuado el trámite de dúplica.

VII.- De la audiencia de conciliación.

El 4 de enero de 2018, conforme da cuenta acta que se lee en folio 39, tuvo lugar la audiencia de conciliación, con la asistencia de la parte demandante representada por su apoderado don Cristóbal Ekelund Karger, y en rebeldía de los demandados, quienes se encontraban expresamente notificados de la audiencia, conforme da cuenta resolución de 28 de diciembre de 2017, de folio 33.

El Tribunal llamó a las partes a conciliación, la que no se produjo, atendida la rebeldía ya indicada.

VIII.- De la resolución que recibió la causa a prueba.

Mediante resolución de 10 de enero de 2018, de folio 41, modificada por resolución de 25 de junio del mismo año, de folio 49, se recibió la causa a prueba por el término legal y se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes:

1.- Efectividad de haberse concedido una medida prejudicial precautoria en los autos Rol C-2529-2016 del 2° Juzgado Civil de Viña del Mar. En la afirmativa, términos en los que fue decretada.

2.- En su caso, efectividad que los demandados cumplieron los requisitos para mantener la medida prejudicial precautoria.

3.- Efectividad de que el demandante se encuentra legitimado activamente para accionar en el presente juicio.

4.- En su caso, existencia, naturaleza y montos de los perjuicios sufridos por el demandante.

5.- Relación de causalidad entre los hechos señalados en los puntos de prueba N°1 y 2, y los supuestos daños cuyo resarcimiento se reclama.

La antedicha interlocutoria fue notificada la parte demandante el 13 de junio de 2018, conforme da cuenta estampe receptorial agregado a los autos el 15 de junio del mismo año, en folio 42. Por su parte, los demandados fueron notificados de aquella resolución el 14 de junio de 2018, como da cuenta estampe receptorial agregado el 15 de junio del mismo año, en folio 43.

Posteriormente, mediante resolución de 21 de enero de 2021, de folio 217, modificada por la de 19 de agosto del mismo año, de folio 225, y dando



Foja: 1

cumplimiento a lo ordenado por resolución de 20 de octubre de 2020 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, que se lee en folio 212, se recibió a prueba el siguiente hecho sustancial, pertinente y controvertido:

- Efectividad de haber actuado los demandados de buena fe, con la finalidad de resguardar sus derechos sociales y patrimoniales, y sin culpa o dolo, en relación a la interposición y mantenimiento de las medidas prejudiciales precautorias decretadas en los autos Rol C-2529-2016 del 2° Juzgado Civil de Viña del Mar, y los supuestos perjuicios causados por las mismas al demandante. Hechos y antecedentes.

La resolución precedentemente señalada fue notificada a la parte de los demandados el 15 de junio de 2021, como da cuenta estampe receptorial agregado el 16 de junio del mismo año, en folio 218. Por su parte, el demandante se tuvo por notificado expresamente de aquella, conforme resolución de 14 de julio de 2021, que se lee en folio 220 de autos.

IX.- De la prueba rendida por la parte demandante.

Con la finalidad de fundar su pretensión, el actor rindió la siguiente prueba:

i.- Prueba instrumental:

1.- Copia de la solicitud de medida prejudicial precautoria, presentada por doña Bonnie Sussan Elizabeth Earnest Callejas, doña Angélica Patricia Rodríguez Earnest, don Miguel Andrés Rodríguez Earnest, y doña Catalina María Rodríguez Earnest, ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra en la carpeta de documentos de folio 1 del cuaderno de medida prejudicial.

2.- Copia de resolución que da curso a la medida prejudicial, de 4 de julio de 2016 dictada en los autos Rol C-2529-2016, caratulada "Earnest / Molinos" del Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra en la carpeta de documentos de folio 1 del cuaderno de medida prejudicial.

3.- Copia de resolución de 11 de julio de 2017, dictada por la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, en los autos Rol 2128-2016; la que se encuentra en la carpeta de documentos de folio 1 del cuaderno de medida prejudicial.

4.- Copia de resolución de 3 de agosto de 2017, dictada en causa Rol C 2529-2016, seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar, la cual ordena cumplir lo ordenado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso; la que se encuentra en la carpeta de documentos de folio 1 del cuaderno de medida prejudicial.

5.- Copia del acta de fianza otorgada el 6 de julio de 2016, en autos causa Rol C 2529-2016, seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra en la carpeta de documentos de folio 1 del cuaderno de medida prejudicial.



Foja: 1

6.- Copia de informe técnico de 22 de septiembre de 2016, elaborado por la empresa Factory Bite SpA; el que se encuentra agregado en la carpeta de documentos de folio 72.

7.- Certificado médico de 18 de julio de 2018, emitido por el médico psiquiatra don Eduardo Correa Donoso; el que se encuentra agregado en la carpeta de documentos de folio 72.

8.- Copia de balance tributario a diciembre de 2015 de la empresa Inspecciones, Asesorías Técnicas y Construcción Limitada (INATEC Ltda.); el que se encuentra agregado en la carpeta de documentos de folio 72.

9.- Copia de balance Tributario a diciembre de 2016 de la empresa Inspecciones, Asesorías Técnicas y Construcción Limitada (INATEC Ltda.); el que se encuentra agregado en la carpeta de documentos de folio 72.

10.- Copia de balance Tributario a mayo de 2017 de la empresa Inspecciones, Asesorías Técnicas y Construcción Limitada (INATEC Ltda.); el que se encuentra agregado en la carpeta de documentos de folio 72.

11.- Copia de correo electrónico de don Carlos Molinos a don Enrique Concha, de 2 de septiembre de 2016, con correo reenviado de 1 de septiembre del mismo año; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 82 del cuaderno principal.

12.- Copia de correo electrónico enviado por don Enrique Concha Matus a don Eduardo Olivares y a don Carlos Molinos, de 2 de septiembre de 2016; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 82 del cuaderno principal.

13.- Copia de escritura pública otorgada el 19 de julio de 2018, ante la Notario Público de Viña del Mar, doña Eliana Gervasio Zamudio, repertorio N°5224, de reconocimiento de instrumento privado; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 82 del cuaderno principal.

14.- Copia de correo electrónico enviado por don Eduardo Olivares a don Enrique Concha Matus, el 2 de septiembre de 2016, el cual reenvía otro correo entre los señalados de 1 de septiembre del mismo año; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 82 del cuaderno principal.

15.- Copia de correo electrónico enviado por don Guillermo de las Heras a don Enrique Concha Matus, de 3 de agosto de 2016; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 82 del cuaderno principal.

16.- Copia de correo electrónico enviado por doña Mónica Jiron Tokos a la cuenta de destino eolivares@inatec.cl, el 7 de septiembre de 2016; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 82 del cuaderno principal.



Foja: 1

17.- Copia de correo electrónico enviado desde la cuenta cmanzur@bci.cl, a la cuenta eolivares@inatec.cl, el 8 de septiembre de 2016; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 82 del cuaderno principal.

18.- Copia de correo electrónico enviado por don Guillermo de la Heras a don Enrique Concha Matus, el 13 de julio de 2016, en que aparece reenviado correo de la misma fecha de don Enrique Concha Matus a la cuenta ghp@delasheras.cl, a su vez con correo reenviado de don Ramón Ossa a don Enrique Concha y a la cuenta ghp@delasheras.cl de 12 de julio del mismo año; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 82 del cuaderno principal.

19.- Copia de correo electrónico dirigido por don Carlos Molinos a don Enrique Concha, el 13 de septiembre de 2016, en el que aparecen dos correos reenviados entre don Carlos Molinos y don Mauricio Acuña Olmedo, ambos de 26 de agosto del mismo año; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 82 del cuaderno principal.

20.- Copia de correo electrónico enviado por don Mario Pesce a don Eduardo Olivares, el 14 de septiembre de 2016, en que se reenvía correo enviado por Ferretería Higuierillas Concón a Hugo Orellana, Mario Pesce y a C. Herrera y a Marcelo Rodríguez, de la misma fecha; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 82 del cuaderno principal.

21.- Copia de correo electrónico enviado por don Carlos Molinos a don Enrique Concha, de 14 de septiembre de 2016, en el que aparecen reenviados dos correos entre ambos, de 12 y 13 de septiembre del mismo año; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 82 del cuaderno principal.

22.- Copia de correo electrónico enviado por don Carlos Molinos a don Eduardo Olivares y otros, de 15 de septiembre de 2016, con adjunto de carta dirigida al personal; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 82 del cuaderno principal.

23.- Copia de correo electrónico enviado por don Guillermo de las Heras a don Mauricio Acuña Olmedo y a don Carlos Molinos, el 16 de agosto de 2016, en el que aparece correo reenviado entre estos dos últimos en la misma fecha; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 82 del cuaderno principal.

24.- Copia de correo electrónico enviado por don Carlos Molinos a la cuenta ecliquidador@gmail.com, el 27 de septiembre de 2016, con correos reenviados entre don Carlos Molinos y don Enrique Concha Matus de 14 y 20 de septiembre



Foja: 1

del mismo año; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 82 del cuaderno principal.

25.- Copia de carta de don Jose Luis Palacios a don Carlos Molinos Orrego, de 5 de marzo de 2016, que adjunta informe de valorización del grupo de empresas Inatec; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 82 del cuaderno principal.

26.- Autos arbitrales caratulados "Earnest y otros con Molinos Orrego, Carlos", remitidos mediante oficio N°1-2018, que se lee en folio 115; expediente arbitral que se encuentra guardado en custodia bajo el N°2551-2018, de lo cual da cuenta resolución de 17 de agosto de 2018, de folio 117.

27.- Expediente causa Rol C-2529-2016, caratulada "Earnest con Molinos", seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña Del Mar, remitida mediante oficio ORD N°526-2018, del citado Tribunal, que se lee en folio 126; el expediente se encuentra guardado en custodia bajo el N°2777-2018, de lo cual da cuenta resolución de 5 de septiembre de 2018, de folio 127.

ii.- Prueba testifical:

Asimismo, la parte demandante rindió prueba testifical, compareciendo -en su oportunidad- los siguientes testigos quienes, legalmente examinados y previamente juramentados, declararon al tenor de la respectiva interlocutoria de prueba:

a.- Don Luis Eduardo Olivares Viera, cuya declaración consta en folio 35 del cuaderno de medida prejudicial; quien interrogado al hecho cuarto de prueba, dijo: *"Como Gerente de Administración y Finanzas de la empresa INATEC me tocó estar presente y recibir la llegada del receptor, el Interventor, los abogados de la señora Bonnie Susan y otras personas que no conozco, en julio de 2016, no me acuerdo el día, donde el receptor venía a notificar que el Tribunal había decretado una intervención de la empresa, esta situación fue bastante difícil de llevar, debido a que al principio hubo mucha confusión de qué hacía tanta gente en la comunicación de la determinación del Tribunal. La primera intención que así quedó demostrado con todas las facilidades que se le dieron al interventor fue proveer de toda la documentación para que pudiera cumplir con su mandato. A poco andar, nos fuimos dando cuenta que lejos de venir el interventor a cumplir con su mandato, lo que pretendía era realizar la búsqueda de información de años anteriores, en circunstancias que el mandato era para que durante el lapso que durara la intervención el interventor debía estar presente para supervisar y autorizar todos los movimientos de dinero de la empresa. También sin que existiera para ello, procedió a entregar un poder notarial a una persona que no estaba siendo nominada por el Tribunal para que cumpliera con su función, ya que*



Foja: 1

él por razones de vivir en otra ciudad, no podía cumplir diariamente con su mandato. La presencia del interventor determinó que la administración de la empresa que llevaba Carlos Molinos, la tuviera que compartir con una persona que no se encontraba presente cuando se requería, a fines de mayo de 2016, y el mes de junio, la empresa se encontraba en plena época de renovación de sus líneas de crédito con los bancos e instituciones crediticias situación que se vio entorpecida por la llegada del interventor, ya que sembró dudas en cuanto a cuál sería el futuro de la empresa. También y por casualidad se detectó que los documentos mediante los cuales giraba instrucciones la persona mandatada por el interventor, sus memorándum venían en formatos diseñados en un computador del abogado de la señora Bonnie Susan, lo que me despertó inquietud y llamé inmediatamente al abogado para que vieran y pudieran a través de peritajes determinar si esto era correcto o no. Posteriormente y debido a las dificultades de tipo económico y a que el apoyo de los bancos se veía disminuido por la presencia del interventor, nos tocó vivir una época de mucha tensión, y de mucha indefinición, ya que el gerente no podía tomar medidas sin la firma del interventor que no siempre se encontraba presente. También me tocó presenciar el deterioro de las relaciones con el personal, debido a la razón anterior y que el Gerente no podía solucionarles directamente sus problemas, inclusive en el mes de septiembre hubo necesidad de que el mismo Carlos Molinos tuviera que facilitar fondos para pagar los anticipos, ya que el interventor, a pesar de innumerables comunicaciones con él, no se hizo presente en los días previos. Obviamente, esto no solamente alteró nuestra funcionalidad en la empresa, sino que además nos causó problemas de stress que fueron manejados por las distintas personas de distintas maneras". Repreguntado para que aclare cuál era el estado o situación de la empresa INATEC antes de la intervención, respondió: "Debido a que a finales del 2015 se recibió un ingreso proveniente de la obra que se efectuaba en Isla de Maipo, y que correspondía a un aumento en los valores y que era cercano a los \$1.000.000.000.- la empresa logró regularizar la deuda que mantenía con los proveedores y enfrentar el año 2016 bastante más tranquilos de lo que estaba el año 2015, por lo tanto, como ya dije anteriormente, se habían presentado toda la documentación pertinente para la renovación de la línea de crédito de capital de trabajo de la empresa". Repreguntado para que aclare cómo era la relación, en cuanto a la administración, entre el Interventor y el Gerente de la empresa don Carlos Molinos, manifestó: "Partió siendo una relación fluida, pero debido a las constantes ausencias de interventor en momentos que su presencia era fundamental, la relación se fue deteriorando, por cuanto el gerente no podía actuar, ya que la otra firma no estaba presente". Repreguntado, para que diga



Foja: 1

cómo reaccionaba el interventor frente a los requerimientos de autorización o visaciones en el desarrollo o marcha de la empresa, durante la intervención, dijo: *“Regularmente lo hacía solicitando que se le enviara información de hechos anteriores a la intervención y no directamente a lo que se estaba requiriendo, esto fue recurrente y nunca pudimos llegar a que solamente se le presentaran los documentos necesarios para las visaciones, sólo esto ocurría cuando estaba presente, si no estaba presente, prácticamente nos quedábamos sin poder operar”*. Repreguntado, para que diga si pudo percibir un cambio de actitud o de estado de salud del ánimo en don Carlos Molinos durante todo el periodo que duró su intervención, en caso efectivo, que precise qué ocasionó aquello, respondió: *“Durante el periodo de la intervención, como lo mencioné anteriormente, todos nos vimos sometidos a un stress mayor al normal, y tengo recuerdo de haber recibido la queja de Carlos Molinos que no estaba durmiendo bien, y que necesitaba medicamentos para poder dormir, este estado de nerviosismo ocasionaba que las pocas decisiones que podía tomar por sí solo, eran condicionadas por estado de stress”*. Repreguntado, para que aclare si sabe cuándo terminó la intervención, manifestó: *“La intervención si bien desde un punto de vista judicial finalizó el 5 de octubre de 2016, desde el punto de vista real el interventor se despidió de nosotros el último viernes de septiembre de 2016”*. Contrainterrogado, para que señale cuál era el estado de la empresa después de la intervención y en qué terminó la empresa INATEC, dijo: *“Al finalizar la intervención, la empresa había sufrido un fuerte deterioro debido a que no habíamos podido renegociar las líneas de crédito con los bancos, situación que no pudo ser revertida y que se vio agravada debido a que el Gobierno Regional Metropolitano dejó de pagar las facturas debidamente autorizadas por las autoridades de la Municipalidad, y ocasionó que sin el apoyo de los bancos y sin los ingresos de esta obra, la empresa finalmente tuvo que solicitar un comienzo de reorganización y finalmente se decretó su liquidación”*. Contrainterrogado, para que aclare a qué abogados tuvo que recurrir o informar las actitudes del interventor, respondió: *“A los abogados que tenía designado en ese momento como abogados de la empresa, De Las Heras”*. Contrainterrogado, para que diga cómo es efectivo que era Guillermo de las Heras, manifestó: *“El buffete era de Guillermo De Las Heras”*. Contrainterrogado, para que diga si tomó conocimiento de la entrega que hizo don Carlos Molinos Orrego al señor Interventor, del plan de cierre de las empresas INATEC y Obras Civiles INATEC y cronología del cierre del mismo, iniciado en febrero de 2016 y debidamente protocolizado por el señor Guillermo de Las Heras en la Notaría Fischer, en el mismo mes de febrero de 2016, dijo: *“De la entrega al interventor de dicha documentación no recuerdo, de la existencia del plan de*



Foja: 1

cierre sí recuerdo que existía ese plan, y que consistía en que debido a que los socios no se ponían de acuerdo en comprar y/o vender su parte, por recomendación de un asesor contratado por la Sra. Bonnie, señor Palacios, en un informe que emitió, señalaba que era preferible ir disminuyendo la actividad en el tiempo y esperar a que se terminaran las obras para evitar un colapso mayor". Contrainterrogado, para que diga si en ese plan de cierre suscrito por el señor Molinos, señalaba que se suspendían los estudios de propuestas y celebración de nuevos contratos, que se comenzaría gradualmente y de acuerdo a las necesidades de las distintas sociedades al despido del personal con contrato indefinido, que desde el 29 de febrero de 2016 se suspenden los retiros mensuales efectuados por la Sra. Susan Earnest y Carlos Molinos, como asimismo los sueldos retirados por Angélica Tapia y Susan Earnest, quedando solamente como gastos el sueldo del gerente general, esto es el Señor Molinos, en la suma de \$6.000.000.- que se procederá a la liquidación de los activos de la empresa de acuerdo a las necesidades que permitieran seguir adelante con la operación, que este plan de cierre contempla el pago de todos y cada uno de los compromisos en la medida que los flujos y la liquidación de los activos lo permitan, y que debido a la delicada situación societaria, financiera y a que el 50% de los valores comprometidos pertenecen al gerente general, se tratará por todos los medios de lograr los mejores precios de liquidación de activos y mejor gestión en la parte financiera y operacional, respondió: *"Sí, con la salvedad de que como todo el plan no es más que una declaración de intenciones y que de acuerdo a las circunstancias en el tiempo, se va cumpliendo o no. La intervención vino a cambiar totalmente el plan, ya que cambió todas las reglas del juego".* Contrainterrogado, para que diga si ese plan de cierre fue comunicado a los trabajadores y personal de la empresa, manifestó: *"Por mi parte no lo fue, desconozco si el Gerente lo hizo o no".* Contrainterrogado, para que diga si sabe si el señor Molinos padece de alguna patología psicológica que requiera tratamiento, dijo: *"En el curso de mi declaración mencioné que hubo un momento durante la intervención, que Carlos Molinos me mencionó que debió acudir a la atención de un psiquiatra, debido a que tenía síntomas de no poder dormir y estar desconcentrado, para lo cual me contó que fue medicado. No tengo como saberlo porque no soy profesional del área, por eso todo lo que se ha dicho lo he dicho sobre la base de lo que me contaba".* Contrainterrogado, para que diga cómo es efectivo que durante la intervención se otorgaron dos créditos por los bancos, respondió: *"Uno me acuerdo yo, yo me acuerdo de un crédito de \$100.000.000.- que fue otorgado por el banco BBVA y que fue debidamente visado por el ayudante del interventor".* Contrainterrogado, para que diga si recuerda en qué



Foja: 1

época el Gobierno Regional dejó de pagar los valores comprometidos a la empresa INATEC, manifestó: *“Hasta donde recuerdo, los problemas con el Gobierno Regional comenzaron en noviembre de 2016, cuando un factoring me comentó que ya habían pasado 60 días de la factura de Isla de Maipo, y no se la habían pagado”*. Contrainterrogado, para que diga si sabe si hubo operaciones de factoring con respecto a las facturas del Gobierno Regional Metropolitano respecto a la Isla de Maipo, dijo: *“Sí hubo, no recuerdo montos, ni fechas”*. Contrainterrogado, para que diga si tuvo acceso al contenido del informe preliminar e informe final emitido por el interventor, respondió: *“Completo no, informado de partes, en las partes que me afectaban para que yo contestara lo que sabía de lo que estaba manifestando el interventor”*.

b.- Don Eduardo de Jesús Lillo González, cuya declaración consta en folio 35 del cuaderno de medida prejudicial; quien interrogado al hecho cuarto de prueba, dijo: *“En junio de 2016, llegó aproximadamente a las 17:00 horas un interventor con un grupo aproximado de 5 personas a intervenir las empresas INATEC Obras Civiles y otras empresas del grupo, dentro de esas personas venía la señora Bonnie Susan, quien me señaló “ahora vamos a ver cómo va actuar este huevón” y me lo dijo personalmente, este grupo llegó metiendo mucho miedo al personal presente, y diciendo que tenían atribuciones en su totalidad para la administración de todas las empresas señaladas, esto significó que el señor Molinos quedó sin la facultad de poder administrar la empresa como lo venía haciendo hasta ahora, porque todo tenía que pasar por manos del interventor señor Concha. El problema era que el señor Concha residía en Concepción, por lo tanto no pasaba en la empresa, lo cual entorpecía las operaciones de ésta. Sus ayudantes procedieron a solicitar información de años anteriores, con lo cual todos tuvimos que empezar a buscar papeles desde el 2012 en adelante, esta situación implicó que los grupos de interés de las empresas empezaran a dudar de la viabilidad de éstas. Específicamente, dada la intervención, los bancos fueron reticentes a entregar el capital de trabajo con que venía operando, el personal empezó a dudar de su estabilidad laboral, presentándose reiteradas licencias, el Fisco, específicamente el Servicio de Impuestos Internos, solicitó información sobre formularios 29, tanto de INATEC como de obras civiles, y me citó a declarar qué es lo que efectivamente estaba pasando con las empresas. De las reiteradas ausencias del Interventor Concha, en donde se requería su presencia, sobre todo para pagos de proveedores y personal, el señor Carlos Molinos tuvo que colocar plata personal para pagar los anticipos de los trabajadores y pagos de algunas facturas que eran urgentes. Esto fue pasando casi todos los días, lo que llevó al señor Molinos a deprimirse y además angustiarse por la situación que estaba*



Foja: 1

pasando la empresa. Es así, como los días posteriores al inicio de la intervención llegaba con calcetines cambiados, ropa sin planchar, totalmente ido. Dado que yo no tengo la confianza para señalarse esas observaciones, le dije a Eduardo Olivares que se las hiciera notar, y ahí nos explicó que había ido al psiquiatra y que estaba con ravotril, todo producto de la intervención que no se entendía, desde el punto de vista financiero, para qué era, dado que sólo trajo mala imagen con los bancos, proveedores, Fisco y personal. Esta intervención además provocó menor valor comercial de la empresa y la falta de credibilidad con potenciales clientes, por lo tanto, desde el punto de vista financiero, considerando las reiteradas ausencias del interventor, y el desconocimiento técnico contable de sus ayudantes, afectó el patrimonio del señor Carlos Molinos, dado que la empresa estaba bajando su valor, también afectó en forma muy significativa la salud del señor Molinos, quien tuvo que recurrir a medicamentos para estar un poco mejor y además afectó al señor Molinos, dado que tuvo que poner platas personales para cubrir el capital de trabajo de las empresas". Repreguntado, para que aclare cómo sabe lo que ha declarado, respondió: "Por ser el auditor externo de todas las empresas y mi permanencia en esa época de la intervención fue diaria". Repreguntado, para que diga cuál era la actitud o cómo reaccionaba el interventor frente a los requerimientos de visaciones o autorizaciones, necesarias para la administración de las empresas intervenidas, que le efectuaba el señor Molinos, en su calidad de gerente de dichas empresas, manifestó: "La actitud del interventor cuando estaba en la empresa, era de total indiferencia, estaba más preocupado de encontrar fugas de plata en años anteriores, que de la gestión propia de la empresa". Repreguntado, para que diga si el interventor negó o condicionó alguna autorización o visación solicitada por don Carlos Molinos, dijo: "Sí, a mí me consta que el interventor negaba pagos solicitados por el señor Carlos Molinos, sin dar razones que se pudieran entender, a modo de ejemplo, a mí se me debían varios meses y Carlos Molinos le solicitó que me fuesen pagados esos honorarios, y él dijo que no, al respecto tuve que llamarlo por teléfono, al interventor, y explicarle mi situación, me dijo que cuando viniese a Concón lo iba a ver, pasó más de un mes, y logré pillarlo en un pasillo, y decirle por qué no me quería pagar si era algo que estaba acordado desde el año 2012, y firmado además por el Gerente General de aquella época, al respecto me solicitó que hiciera una declaración jurada en donde señalara específicamente los trabajos que estaba realizando, ante tan situación, a través de los abogados nuestros, de mi oficina, le informamos que si no cancelaba los honorarios íbamos a demandar a Inatec y obras civiles por dichos cobros". Repreguntado, para que aclare a quién se refería la señora Bonnie Earnest cuando le afirmó o le señaló según lo



Foja: 1

declarado “ahora vamos a ver cómo va a actuar este huevón”, respondió: *“Específicamente al señor Carlos Molinos quien estaba en la oficina con el interventor”*. Repreguntado, para que diga, si sabe, qué requerimiento o documentos solicitaba el interventor de años anteriores a su nombramiento como tal, manifestó: *“Solicitaba pago de facturas, tanto de honorarios como de proveedores, que eran de años anteriores”*. Contrainterrogado para que diga, en base a lo que ha declarado, en cuanto a que estaba en forma diaria durante la intervención, explique en qué consistió la medida prejudicial y si éste tuvo conocimiento y acceso a la resolución judicial que la otorgó, dijo: *“No tuve conocimiento, dado que mi área sólo era la contable tributaria”*. Contrainterrogado, para que aclare respecto de sus propios dichos, en cuanto a que él estuvo presente al momento en que llegó el interventor con el receptor judicial y la señora Susan, cómo no pudo ese día o los días posteriores, tener acceso a la resolución que decretó las medidas, respondió: *“Tal como lo señalé anteriormente, mi campo de acción es solamente tributario contable”*. Contrainterrogado, para que aclare la época o fecha concreta en que el señor Molinos le informó tanto a don Eduardo Olivares y a él mismo, que había ido al psiquiatra, que estaba con ravotril, manifestó: *“Fue durante la época de la intervención, no recuerdo fecha”*. Contrainterrogado para que diga, en atención a sus propios dichos, en que éste concurría diariamente durante la intervención, si tomó de la entrega que hizo don Carlos Molinos Orrego al señor interventor, del plan de cierre de las empresas Inatec y Obras Civiles Inatec, y cronología de cierre del mismo, iniciado en febrero del año 2016 y debidamente protocolizado por el señor Guillermo de Las Heras, en la Notaría Fischer, en el mismo mes de febrero de 2016, dijo: *“No”*. Contrainterrogado, para que diga si conoce el plan de cierre, respondió: *“No”*. Contrainterrogado, para que diga si antes de la intervención, el señor Molinos tuvo que recurrir a créditos o a platas personales para cumplir obligaciones de la empresa, manifestó: *“Sí”*. Contrainterrogado, para que diga si durante la intervención de estas empresas Inatec, recibieron créditos de bancos, dijo: *“No recuerdo”*. Contrainterrogado para que diga, sólo si recuerda, que estos créditos fueron otorgados por el Banco BBVA o Security, respondió: *“En relación a la respuesta anterior, no recuerdo”*. Contrainterrogado, para que diga si durante la intervención la o las empresas Inatec se adjudicaron alguna licitación y, en caso de ser efectivo, señale qué obra fue adjudicada, manifestó: *“No lo sé”*. Contrainterrogado, para que diga cuánto duró la intervención, dijo: *“Sé que empezó en junio y puede haber durado unos meses. Yo no veo las partes operativas de las empresas, solo los aspectos tributarios y contables, por lo tanto, es difícil que pueda responder preguntas relativas a propuestas, adjudicaciones,*



Foja: 1

entregas de documentos a interventores, etc.” Contrainterrogado, para que diga si el señor Carlos Molinos, durante la intervención, desde el punto de vista contable, recibió un sueldo empresarial, respondió: “*Creo que sí*”.

c.- Doña Karla Pamela Morales Aguirre, cuya declaración consta en folio 105 del cuaderno principal; quien, interrogada al hecho cuarto de prueba, dijo: “*En mi calidad de testigo yo trabajaba en la empresa, estudiando propuestas por lo tanto mi relación, al momento de la intervención fue muy mínima, en el sentido que yo evaluaba propuestas o proyectos, y la intervención solamente lidiaba para firmar documentación que yo entregaba como evaluación de la propuesta al mandante. En qué me vi afectada yo o el proceso, únicamente a mi parecer es que don Carlos Molinos se encontraba ausente, estresado para poder evaluar un estudio de propuesta en esa época. Él estaba preocupado de otras cosas, no me tomaba la atención del estudio de propuesta. Señalo que yo estudiaba propuestas por lo que no podía señalar los montos*”. Repreguntada para que aclare, para qué empresa realizaba evaluación de proyectos y propuestas a las que se han referido, respondió: “*La empresa Intec Ltda.*” Repreguntada para que aclare, cómo se relacionó con el interventor para el proceso de evaluación, proyectos y propuestas; para que diga si sabe cuántas de esas propuestas y proyectos se evaluaron durante esa intervención, señaló: “*Fueron como tres propuestas que se estudiaron en ese tiempo, que yo recuerde. Y como me relacioné con el interventor, fue que él debía dos días antes firmar la documentación que yo presentaba; y luego acompañarme a los actos de apertura*”. Repreguntada para que aclare, en cuanto a sus dichos, al hecho que “el señor Carlos Molinos estaba preocupado de otras cosas” a qué cosas se refiere, manifestó: “*Tengo entendido que en ese tiempo la intervención solicitaba información o solicitaba requerimientos, que escapaban de mi área y don Carlos Molinos debía atenderlas, pero desconozco esos requerimientos*”. Repreguntada para que diga la fecha o periodo que duró la intervención, dijo: “*Creo que fueron como tres meses a mi parecer en el mes de julio al parecer 2015, no recuerdo bien si fue el año 2014 o 2015, sé que duró tres meses*”. Repreguntada para que diga si notaba en el demandante un distinto comportamiento y disponibilidad durante el periodo de intervención, respondió: “*Lo dije anteriormente, estaba poco disponible y estaba muy desgastado y estresado*”. Contrainterrogada para que diga cómo es efectivo que del año 2015 en adelante, las Empresas Inatec arrastraban serios problemas económicos, señaló: “*desconozco cuáles eran las magnitudes de estos supuestos problemas económicos. En la construcción es normal que existan atrasos de pagos y esas cosas, por lo que para mí encargada de propuesta, no tenía relación con la parte financiera*”.



Foja: 1

d.- Don **Gonzalo Piwonka Santo**, cuya declaración consta en folio 105 del cuaderno principal; quien, interrogado al hecho cuarto de prueba, dijo: *“Básicamente cuando yo trabajaba en Inatec, vino un interventor a la empresa como en el mes de julio a octubre de 2016, no recuerdo bien fecha, básicamente lo que yo noté que más que una intervención de la empresa, era encontrar algo extraño, tal como malversación o algo así, en el periodo que trabajó Carlos. Yo en ese minuto era Gerente de Operaciones, Carlos Gerente general y me di cuenta que gran parte del tiempo que Carlos se encontraba en sus labores, era responder acusaciones del interventor. Por tal razón lo vi muy recaído, preocupado e incluso se tuvo que medicar, eso me consta porque yo le ayudé a conseguir medicamentos. En esa oportunidad le recomendé que retomara su tratamiento con el psiquiatra porque lo había dejado. Esa es la forma que le afectó a Carlos esta intervención ya que se encontraba muy preocupado por esto. También el hecho que se le hubiese quitado el poder de las firmas dentro de la empresa”*. Repreguntado para que aclare qué incidencia tuvo en el área de operaciones, la existencia o presencia de un interventor durante el periodo que hizo referencia respondió: *“En la parte operativa tuvo bastante relevancia la intervención, primero porque yo trabajo con personas, lo que significaba que tenía la responsabilidad del más del 90% de la masa laboral en obra. En la cual estaban muy preocupados por el tema de la intervención, ya que siempre me preguntaban qué iba a ocurrir con la empresa, y eso implicó alguna merma en los rendimientos de la personas, e incluso hubo personas que se retiraron por esta situación. También había un tema financiero en el pago de proveedores y subcontratos, que se demoraban muchas veces porque el interventor no venía muchas veces a firmar, lo que demoraba obviamente la operación”*. Repreguntado para que diga, si sabe cuál era la actitud de don Carlos Molinos cuando el interventor no asistía a la empresa, a efectuar las visaciones o firmas para pagos de proveedores o sus contratos, señaló: *“Preocupación, nerviosismo, porque las obras tenían que continuar, pese a las dificultades anteriores descritas, entorpecían la operación de la empresa”*. Repreguntado para que aclare, o bien precise, lo que declaró “la intervención fue la forma de encontrar una malversación o algo así en el periodo que trabajó Carlos”, dijo: *“Básicamente tengo entendido que la intervención es tomar el poder de la empresa, en lo que respecto a la continuidad de funcionamiento de ésta, llegaban informes de consultas, sobre pagos anteriores, facturas pagadas, pagos realizados, cheques extendidos, eso es lo que me llamó mucho la atención de la intervención. Incluso estando en obra, fue un contador asignado por el interventor, a registrar todo lo que se estaba haciendo en obra, especialmente en forma retroactiva”*. Repreguntado para que aclare qué conductas o estados de ánimos



Foja: 1

pudo constatar respecto al demandante, durante el periodo de intervención, respondió: *“Como ya señalé anteriormente, Carlos se vio muy afectado por la intervención, un estado de ánimo de preocupación y decaído”*. Contrainterrogado para que diga, si sabe, si durante la intervención don Carlos Molinos le entregó al interventor un plan de cierre, de las empresas que data del mes de febrero de 2016, señaló: *“No tenía la menor idea, no es un tema que manejaba yo. Me preocupaba la parte operativa”*. Contrainterrogado para que diga, si sabe, si el señor Carlos Molinos, le comentó si éste padecía problemas anímicos y estaba en tratamiento desde el año 2011 en adelante, manifestó: *“Sí, pero el tratamiento lo había dejado. Pero producto de esto tuvo que volver a retomarlo”*. Contrainterrogado para que diga cuándo lo retomó, dijo: *“No lo sé”*.

iii.- Prueba confesional:

La parte demandante también solicitó prueba confesional y, oportunamente, fue citada a absolver posiciones la demandada doña Bonnie Susan Elizabeth Earnest Callejas, conforme da cuenta acta que fue agregada a los autos el 12 de enero de 2022, en folio 248. La citada demandada, previa y legalmente juramentada depuso al tenor del pliego de posiciones -que también se encuentra agregado en folio 248 de autos- en los siguientes términos:

1.- Para que diga la absolvente, cómo es efectivo que tan pronto falleció su cónyuge, don Patricio Rodríguez, se tramitó la posesión efectiva de sus bienes, y se modificaron los estatutos sociales de las sociedades Inspecciones, Asesorías Técnicas y Construcción Limitada (INATEC Ltda.), Inmobiliaria Moro Limitada y Obras Civiles INATEC Limitada con el objeto de regularizar los derechos sociales de cada heredero en dichas sociedades, y se le nombró a usted como administradora de dichas sociedades indistintamente con el Sr. Molinos con Idénticas facultades a las de él; respondió: *“Es efectivo.”*

2.- Para que diga la absolvente como es efectivo que usted, en representación de la sucesión de don Patricio Rodríguez, inició conversaciones para que el Sr. Carlos Molinos o la sucesión del Sr. Rodríguez comprara la participación accionaria o societaria de la otra parte, para lo cual se procedió a valorizar las sociedades, en un proceso que duró aproximadamente 2 años, donde hubo varias ofertas de compra y de venta por parte del Sr. Carlos Molinos; dijo: *“Sí, es efectivo que inicié conversaciones en ese sentido, que no llegaron a término, no hubo varias ofertas, fue una.”*

3.- Para que diga la absolvente como es efectivo que, en el mes de diciembre de 2015, en el contexto de las conversaciones señaladas en el punto 2 precedente, se optó por designar de común acuerdo un listado de árbitros respecto de la sociedad INATEC Ltda., en los autos ROL C 3274-2015, seguida



Foja: 1

ante el 1° Juzgado Civil de Viña del Mar, en el caso de que fracasaran las conversaciones de compra o venta o surgiera algún conflicto entre los socios que requiere su intervención; señaló: *“Se inició un proceso de arbitraje, efectivamente pero que nunca se concretó”*.

4.- Para que diga la absolvente cuál fue la razón por la cual no recurrió al árbitro que sus abogados y los abogados del Sr. Molinos de común acuerdo designaron para resolver los conflictos que se originasen entre las partes; respondió: *“Es que nunca se concretó”*.

5.- Para que diga la absolvente cuál fue la razón por la cual al presentar las medidas prejudiciales usted indicó que renunciaba como socia de las sociedades; dijo: *“Yo nunca dije eso, que yo renunciaba como socia de las sociedades, no.”*

6.- Para que diga la absolvente si usted sabía que solicitando un “interventor” para las sociedades y anunciando en la solicitud de medidas prejudiciales que se demandaría la disolución de las sociedades, se afectaba la imagen de las sociedades ante los Bancos que era la principal fuente de financiamiento para la operación y marcha de las sociedades, y por lo mismo, afectaría la relación de don Carlos Molinos ante los Bancos ya que él era quien gestionaba ante el Banco en representación de las sociedades; señaló: *“No, no lo sabía.”*

7.- Para que diga la absolvente como es efectivo que el señor interventor que designó el Tribunal fue propuesto por usted en el escrito de solicitud de medidas prejudiciales; respondió: *“No.”*

8.- Para que diga la absolvente como es efectivo que el señor interventor don Enrique Concha tenía domicilio en la ciudad de Concepción, lo que entorpecía la gestión gerencial del señor Carlos Molinos; dijo: *“No me consta.”*

9.- Para que diga la absolvente cómo es efectivo que el señor interventor don Enrique Concha no asistía diariamente a cumplir su labor en las sociedades, lo que entorpeció la administración diaria que estaba a cargo del señor Carlos Molinos; señaló: *“No me consta.”*

10.- Para que diga la absolvente cómo es efectivo que las medidas prejudiciales en contra del señor Carlos Molinos tenían un objetivo puramente instrumental ya que sólo buscaba negociar la compra o venta del resto de los derechos sociales con el señor Molinos en condiciones más ventajosas; respondió: *“Las medidas prejudiciales se fijaron en contra de las Sociedades, no en contra del señor Molinos, sino en contra de las Sociedades de las cuales yo era socia, yo tenía una participación de un 50% y un poco más.”*

11.- Para que diga la absolvente por qué no continuó el juicio o ejerció las acciones legales que usted anunció en la solicitud de medidas prejudiciales ante la



Foja: 1

Juez Árbitro que designó a solicitud suya el 2° Juzgado de Viña del Mar, doña Carmen Villar Iroume; dijo: *“Porque dado los antecedentes entregados por el Interventor durante su período de intervención de las Sociedades se determinó tomar otras acciones legales para poder constatar, verificar la información entregada por el Interventor en su informe final.”*

Se le solicita a la absolvente que aclare, en la posición número tres, a qué se refiere con que no se concretó, si se refiere a que no se designó arbitro en ese procedimiento; respondió: *“Efectivamente nunca se concretó, nunca se llegó a un listado de árbitro para poder llegar a un acuerdo y ahí quedó”*.

iv.- Prueba pericial:

La parte demandante, oportunamente, solicitó prueba pericial, y previa audiencia de rigor, conforme da cuenta resolución de 20 de septiembre de 2018, de folio 134, resultó nombrado don Germán Roberto Abarca Caro, de especialidad psicólogo, a fin que acorde a la ciencia y arte que profesa, practique un peritaje conforme a lo solicitado en audiencia de 12 de septiembre de 2018, esto es, sobre la existencia de daño moral y psicológico del demandante, don Carlos Molinos Orrego, como consecuencia de la medida de intervención e innominada decretada en los autos Rol C-2529-2016, caratulados “Earnest con Molinos”, del Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar. El informe pericial evacuado fue agregado a los autos el 29 de diciembre de 2018, en folio 154, y se reproduce en lo pertinente, a continuación.

“Antecedentes Relevantes

Actualmente Carlos vive solo, en Concón; separándose de su esposa el año 2015, con quien tuvo tres hijas. Es importante señalar que tanto con su ex esposa como con sus hijas mantiene una relación frecuente, compartiendo juntos fechas importantes como las celebraciones de cumpleaños, navidad o año nuevo. Laboralmente Carlos se desempeña como empresario en el rubro de la construcción, en este rubro inició actividades en el año 2002, formando una sociedad con Mario Patricio Rodríguez Olivos; la cual prospera de manera significativa, llegando a tener más de 400 trabajadores e importantes negocios, tanto en la V región como en otros lugares del país.

En junio del 2013 fallece sorpresivamente el socio de Carlos, quien siguió administrando la sociedad, además de realizar acciones para regularizar la herencia de la viuda e hijos de Mario Rodríguez. En este punto, es importante destacar que Carlos, en un primer momento, pensó en finiquitar la empresa, sin embargo, la esposa de Mario Rodríguez le solicita que siga con la empresa en memoria de su difunto esposo.



Foja: 1

Con el transcurrir del tiempo, empezaron a existir fuertes desavenencias entre Carlos y los herederos del señor Rodríguez, especialmente con Bonnie Earnest (viuda de Mario Rodríguez), por lo cual se iniciaron conversaciones con la intención de que alguna de las partes comprara la otra parte de la sociedad, tratativas que después de varias ofertas y un largo tiempo de negociaciones, no llegaron a acuerdo las partes, a pesar de que la empresa fue tasada por terceros.

Debido a que no se llega a acuerdo, Bonnie Earnest solicita en el Segundo Juzgado de Viña del Mar que se decretaran medidas prejudiciales precautorias, como el nombramiento de un interventor y limitar las funciones de Carlos como administrador de la empresa; bajo el rol C-2529-2016, lo cual, se traduce en complicaciones para el normal funcionamiento de la empresa, afectándola en sus posibilidades de negocios y desacreditando el prestigio ganado en el trabajo realizado entre Carlos y Mario; tanto ante posibles clientes como con la banca, lo que se vio reflejado en el no otorgamiento de líneas de crédito, ante lo cual, Carlos expuso su propio patrimonio para poder continuar financiando adecuadamente la empresa.

Con el transcurso del tiempo, Carlos se percató que el interventor no era una figura imparcial, actuando bajo lineamientos de la otra parte en discordia, presentando una demanda en su contra por ese motivo.

Es importante señalar que Carlos presenta antecedentes de trastorno de pánico desde el 2011 y que en agosto del 2016, debido a estrés ambiental, antecedentes de una depresión mayor, ambas tratadas por psiquiatra con tratamiento farmacológico.

Actualmente se encuentra en seguimiento y continúa con tratamiento farmacológico.

Resultados de la evaluación

La evaluación realizada a Carlos, permite afirmar que estuvo expuesto durante un largo tiempo a altos niveles de estrés, que significaron cambios en su forma de procesar la información y relacionarse con el medio ambiente, pudiéndose señalar que la larga duración de la fuente de estrés y su intensidad, significaron una experiencia traumática para Carlos, es decir, la fuente de estrés era mayor a los recursos psicológicos que dispone para enfrentar las exigencias del medio ambiente; pudiéndose afirmar que la fuente de estrés está directamente relacionada a las acciones realizadas por el interventor, debido a las dificultades económicas que significaron tanto para la empresa como para Carlos y, al darse cuenta de la colusión del interventor con la otra parte en disputa. Respecto a lo anterior, es importante destacar que Carlos posee recursos psicológicos mayores a la media de la población para enfrentar situaciones de estrés.



Foja: 1

Carlos, actualmente, procesa la información medioambiental de una manera que busca respuestas lógicas a las situaciones, evitando el compartir sus dificultades con otras personas y el conectarse emocionalmente, estando en estos momentos de su vida, poco tolerante e irritable ante la posibilidad de errores o equivocaciones.

Para Carlos, desde que se elevó el estrés hasta la actualidad, el manejo de las emociones es una fuente importante de estrés, al sentir que no las puede manejar de una forma racional, motivo por el cual, prefiere evitar posibles desavenencias en las relaciones sociales diarias, prefiriendo en estos momentos, contactos superficiales y no íntimos con terceros, debido a que, desde la experiencia traumática que ha vivido, tiende a percibir el entorno como amenazante, demandante y mezquino, tendiendo a centrar sus energías en enfrentar las situaciones relacionadas con la empresa creado con su socio, con la generación de recursos para mantener el estatus familiar y con la creación de una nueva empresa; tendiendo a evadirse o no conectarse con otras problemáticas, debido al agotamiento emocional que padece actualmente; lo cual, afectó la relación con su pareja, influyendo notoriamente en el quiebre de la relación de pareja.

Las consecuencias del evento y sus repercusiones en Carlos se evidencia en sintomatología como:

- a) Disminución importante del interés o del placer por varias actividades que antes eran placenteras, en remisión parcial; es decir, que todavía se manifiesta pero en menor intensidad.
- b) Pérdida del apetito, actualmente en remisión.
- c) Dificultades clínicamente significativas referentes al sueño; actualmente en remisión, debido al uso de fármacos.
- d) Falta de energía, en remisión parcial.
- e) Disminución significativa de la capacidad para concentrarse.
- f) Reacciones fisiológicas intensas a factores externos que simbolizan a un aspecto del suceso(s) traumático.
- g) Evitación activa respecto a estímulos que puedan rememorar la empresa fundada con Mario, como por ejemplo, el evitar pasar por fuera del lugar donde tenían las oficinas o no ha vuelto ir al sector de Peñablanca.
- h) Niveles clínicamente significativos de ansiedad y angustia, tratados a través de control farmacológico.
- i) Cambios de genio y humor
- j) Irritabilidad.

La sintomatología presentada anteriormente, permite afirmar que Carlos, debido a las materias de la presente causa, padeció un trastorno depresivo, además de



Foja: 1

presentar abundante sintomatología ansiosa y sintomatología de haber sufrido elevados montos de estrés, siguiendo la calificación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM – V) y de la Calificación Internacional de Enfermedades (CIE – 10) que está siendo tratado con psiquiatra particular a través de fármacos, evolucionando satisfactoriamente gracias al apoyo recibido.

En resumen, se puede señalar que Carlos, producto de los sucesos relacionados a la presente causa, ha vivido un hondo dolor psíquico, habiendo presentado un trastorno depresivo mayor, además de sintomatología ansiosa clínicamente significativa que está siendo atendida por parte de profesional particular, siendo necesitando (sic) algún acto reparatorio por parte de la contraparte, para poder ir tramitando adecuadamente esta experiencia negativa”.

X.- De la prueba rendida por parte de los demandados.

Por su parte los demandados, con el objeto de fundar sus excepciones, alegaciones y defensas, rindieron la siguiente prueba:

i.- Prueba instrumental:

1.- Copia de resolución de 4 de julio del año 2016, dictada en los autos Rol C 2529-2016, del Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar, por la cual se dio curso a las medidas prejudiciales; la que se encuentra agregada en folio 16 del cuaderno de medida prejudicial.

2.- Copia de escrito presentado el 9 de julio del año 2016, en causa Rol C 2529-2016, seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar, por don Carlos Manuel Molinos Orrego, por sí y en representación de las sociedades Inspecciones Asesorías Técnicas y Construcción Limitada (INATEC Ltda.), Obras Civiles INATEC Limitada (o INATEC Ltda.), Inversiones Con-Con S.A., Inversiones Con-Con Dos S.A., Inmobiliaria Moro Limitada y Transportes Moro Limitada; el que se encuentra agregado en folio 16 del cuaderno de medida prejudicial y en la carpeta de documentos de folio 75 del cuaderno principal.

3.- Copia de escrito presentado el 22 de agosto de 2016, en causa Rol C 2529-2016, seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar, por el apoderado de don Carlos Manuel Molinos Orrego; el que se encuentra agregado en folio 16 del cuaderno de medida prejudicial y en la carpeta de documentos de folio 75 del cuaderno principal.

4.- Copia de escrito de recurso de apelación, presentado en causa Rol C 2529-2016, seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar, por el abogado don Cristóbal Valenzuela González; el que se encuentra agregado en folio 16 del cuaderno de medida prejudicial y en la carpeta de documentos de folio 75 del cuaderno principal.



Foja: 1

5.- Copia de resolución de 31 de agosto de 2016, dictada en los autos Rol C-2529-2016, caratulados “Earnest / Molinos”, seguidos ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 75 del cuaderno principal.

6.- Copia de escrito presentado en causa Rol C 2529-2016, seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar, el 6 de octubre de 2016, por el abogado don Cristóbal Valenzuela González; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 75 del cuaderno principal.

7.- Copia de resolución dictada el 7 de octubre de 2016, en los autos Rol C-2529-2016, caratulados “Earnest / Molinos”, seguidos ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 75 del cuaderno principal.

8.- Copia de la solicitud de inicio de procedimiento concursal de reorganización, presentada por don Carlos Manuel Molinos Orrego, empresario, en su calidad de apoderado de Obras Civiles INATEC Limitada; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 79 del cuaderno principal.

9.- Copia de escrito de propuesta de acuerdo de reorganización judicial, presentada por el abogado de Obras Civiles INATEC Limitada, en causa Rol C 1821-2017, seguida ante este Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 79 del cuaderno principal.

10.- Copia de informe de la veedora titular doña Irena Ibieta Hudolin, presentado en causa Rol C 1821-2017, seguida ante este Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 79 del cuaderno principal.

11.- Copia de resolución de 27 de septiembre de 2017, que declara la liquidación, dictada en Rol C 1821-2017, seguida ante este Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 79 del cuaderno principal.

12.- Copia de acta de incautación de bienes efectuado en causa Rol C-4005-2017, de este Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 79 del cuaderno principal.

13.- Copia de inventario físico elaborado en causa Rol C-4005-2017, de este Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 79 del cuaderno principal.

14.- Copia de escrito presentado por don Felipe Parot Marro, abogado del liquidador titular, en que acompaña ampliación de inventario, en causa Rol C-



Foja: 1

4005-2017, de este Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 79 del cuaderno principal.

15.- Acta de incautación contable, de la empresa Obras Civiles INATEC Limitada; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 79 del cuaderno principal.

16.- Copia de la solicitud de inicio de procedimiento concursal de reorganización, presentada por don Carlos Manuel Molinos Orrego, en su calidad de apoderado de Inspecciones, Asesorías Técnicas y Construcción Limitada; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 80 del cuaderno principal.

17.- Copia de escrito de desistimiento de solicitud de reorganización, presentado en causa Rol C 1823-2017, seguida ante el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 80 del cuaderno principal.

18.- Copia de escrito en que se formula propuesta de acuerdo de reorganización judicial, presentada por el abogado de Inspecciones, Asesorías Técnicas y Construcción Limitada, en causa Rol C-1823-2017, seguida ante el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 80 del cuaderno principal.

19.- Copia del informe de la veedora titular, doña Irena Ibieta Hudolin, presentado en causa Rol C-1823-2017, seguida ante el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 80 del cuaderno principal.

20.- Copia de acta de audiencia de junta de acreedores, celebrada el 21 de agosto de 2017, en causa C-61823-2017, seguida ante el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 80 del cuaderno principal.

21.- Copia de resolución de liquidación dictada el 12 de septiembre de 2017, en causa Rol C-1823-2017, seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 80 del cuaderno principal.

22.- Copia de acta de incautación efectuada en causa Rol C-3764-2017, seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 80 del cuaderno principal.

23.- Copia de acta de inventario físico de bienes, presentado en causa Rol C-3764-2017, seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 80 del cuaderno principal.



Foja: 1

24.- Copia de acta de ampliación de inventario físico de bienes, presentado en causa Rol C-3764-2017, seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 80 del cuaderno principal.

25.- Copia de escrito con informe preliminar, presentado por el interventor don Enrique Concha Matus, el 22 de agosto del año 2016, en causa rol C 2529-16, caratulada "Earnest con Molinos", del Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folios 81 y 228 del cuaderno principal.

26.- Copia de escrito con informe final, presentado por el interventor don Enrique Concha Matus en causa rol C 2529-16, caratulada "Earnest con Molinos", del Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 81 y 228 del cuaderno principal.

27.- Informe de la empresa DELLOITE Auditores y Consultores Limitada, de 2 de marzo de 2015, dirigido a doña Susan Earnest Callejas; el que se encuentra agregado en la carpeta de documentos de folios 86 y 228 del cuaderno principal.

28.- Copia de solicitud de medida prejudicial precautoria, formulada por doña Bonnie Sussan Elizabeth Earnest Callejas, doña Angélica Patricia Rodríguez Earnest, don Miguel Andrés Rodríguez Earnest y doña Catalina Maria Rodríguez Earnest, ingresada el 22 de junio de 2016, recaída en el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folios 86 y 228 del cuaderno principal.

29.- Copia de resolución de 4 de julio de 2016, dictada en causa Rol C-2529-2016, caratulada "Earnest con Molinos", seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folios 86 y 228 del cuaderno principal.

30.- Copia de escrito de demanda de mera certeza, presentado por doña Bonnie Sussan Elizabeth Earnest Callejas, doña Angélica Patricia Rodríguez Earnest, don Miguel Andrés Rodríguez Earnest y doña Catalina Maria Rodríguez Earnest, el 5 de agosto de 2016, en la unidad administrativa de los Juzgados Civiles de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 86 del cuaderno principal.

31.- Copia de resolución de 8 de agosto de 2016, recaída en causa Rol C-2529-2016, caratulada "Earnest con Molinos", seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 86 del cuaderno principal.

32.- Copia de escrito presentado el 11 de agosto de 2016, por don Roberto Arroyo Correa y don Ramón Ángel Ossa Infante, abogados de doña Bonnie



Foja: 1

Sussan Elizabeth Earnest, de doña Angélica Patricia Rodríguez Earnest, de don Miguel Andrés Rodríguez Earnest y de doña Catalina Maria Rodríguez Earnest, en causa Rol C-2529-2016, caratulada "Earnest con Molinos", seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 86 del cuaderno principal.

33.- Copia de resolución de 12 de agosto de 2016, dictada en causa Rol C-2529-2016, caratulada "Earnest con Molinos", seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folios 86 y 228 del cuaderno principal.

34.- Copia de resolución de 31 de agosto de 2016, dictada en causa Rol C-2529-2016, caratulada "Earnest con Molinos", seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 86 del cuaderno principal.

35.- Copia de resolución de 6 de septiembre de 2016, dictada en causa Rol C-2529-2016, caratulada "Earnest con Molinos", seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 86 del cuaderno principal.

36.- Copia de escrito presentado por don Cristóbal Valenzuela González, el 6 de octubre de 2016, en causa Rol C-2529-2016, caratulada "Earnest con Molinos", seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 86 del cuaderno principal.

37.- Copia de sentencia de 6 de octubre de 2016, dictada en causa Rol C-2529-2016, caratulada "Earnest con Molinos", seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 86 del cuaderno principal.

38.- Copia de resolución de 7 de octubre de 2016, dictada en causa Rol C-2529-2016, caratulada "Earnest con Molinos", seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 86 del cuaderno principal.

39.- Copia de escrito de solicitud de audiencia de formalización presentado por don Lionel Alonso González González, fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Viña del Mar, en causa RUC N°1610039495-6, en contra de don Carlos Manuel Molinos Orrego, por el delito de apropiación indebida; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 86 del cuaderno principal.

40.- Copia de querella criminal presentada el 19 de octubre del año 2016 en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, por doña Bonnie Sussan Elizabeth Earnest, doña Angélica Patricia Rodríguez Earnest, don Miguel Andrés Rodríguez



Foja: 1

Earnest y doña Catalina María Rodríguez Earnest, en contra de don Carlos Molinos Orrego y don Gonzalo Piwonka Santos; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folios 86 y 229 del cuaderno principal.

41.- Copia de dos escrituras que contienen el plan y la cronología de cierre de las empresas del grupo Inatec, protocolizadas ante doña Patricia Bahamonde Vega, Notario Público suplente del titular don Luis Enrique Fischer Yavar, el 11 y 15 de febrero del 2016, respectivamente; las que se encuentran agregadas en la carpeta de documentos de folio 228 del cuaderno principal.

42.- Copia de informe pericial contable elaborado por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, suscrito por doña Marianela Pérez Zamora, perito sección contabilidad, ingresado a la Fiscalía Local de Viña del Mar el 27 de febrero de 2019, en causa RUC 1610039495-6; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 229 del cuaderno principal.

43.- Copia de solicitud inicio de procedimiento concursal de reorganización, interpuesta por don Carlos Molinos Orrego en representación de Obras Civiles Inatec Limitada; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 230 del cuaderno principal.

44.- Copia de informe de la veedora titular doña Irena Ibieta Hudolin, presentado en causa Rol C-1821-2017, del Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar Tribunal; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 230 del cuaderno principal.

45.- Copia de resolución de liquidación de 27 de septiembre de 2017, dictada en causa Rol C-1821-2017, seguida ante el Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 230 del cuaderno principal.

46.- Copia de solicitud de inicio de procedimiento concursal de reorganización, interpuesta por don Carlos Molinos Orrego, en representación de la Sociedad Inspecciones, Asesorías Técnicas y Construcción Limitada; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 231 del cuaderno principal.

47.- Copia de informe de la veedora titular doña Irena Ibieta Hudolin, presentado en causa Rol C-1823-2017, seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 231 del cuaderno principal.

48.- Copia de resolución de liquidación, dictada el 12 de septiembre de 2017, en causa Rol C 1823-2017, seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña



Foja: 1

del Mar; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 231 del cuaderno principal.

49.- Copia de informe de auditoría especial, elaborado por don Leonardo Quintanilla Espinoza, contador auditor y perito judicial, de agosto de 2018; la que se encuentra agregada en la carpeta de documentos de folio 231 del cuaderno principal.

50.- Expediente causa Rol C-1823-2017, caratulada “Inspecciones, Asesorías Técnicas y Construcción Limitada, seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar, cuyo e-book fue remitido mediante oficio del citado Tribunal, que se lee en folio 237; el expediente se encuentra guardado en custodia bajo el N°1608-2021, de lo cual da cuenta resolución de 19 de noviembre de 2021, de folio 239.

51.- Expediente causa Rol C-3764-2017, caratulada “Inspecciones, Asesorías Técnicas y Construcción Limitada”, seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar, cuyo e-book fue remitido mediante oficio del citado Tribunal, que se lee en folio 238; el expediente se encuentra guardado en custodia bajo el N°1608-2021, de lo cual da cuenta resolución de 19 de noviembre de 2021, de folio 239.

52.- Expediente causa Rol C-4005-2017, caratulado “Obras Civiles INATEC Limitada”, seguida ante este Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar, cuyo e-book fue remitido mediante oficio de 7 de julio de 2022, que se lee en folio 253; el expediente se encuentra guardado en custodia bajo el N°1345-2022, de lo cual da cuenta resolución de 7 de julio de 2022, de folio 255.

53.- Expediente causa Rol C-1821-2017, caratulado “Obras Civiles INATEC Limitada”, seguida ante este Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar, cuyo e-book fue remitido mediante oficio de 7 de julio de 2022, que se lee en folio 254; el expediente se encuentra guardado en custodia bajo el N°1345-2022, de lo cual da cuenta resolución de 7 de julio de 2022, de folio 255.

ii.- Prueba testifical:

La parte de los demandados también rindió prueba testifical, compareciendo en autos, conforme acta que se lee en folio 173, doña **Carolina de Lourdes Lommatzsch Fredericksen**, quién legalmente examinada y previamente juramentada, declaró al tenor de la respectiva interlocutoria de prueba, específicamente al hecho cuatro, quien dijo: *“No me consta que Molinos Orrego haya sufrido algún perjuicio, en el período que yo trabajaba, sí me consta que en la Empresa existían desordenes administrativos, pero que en ninguna caso afectaban a la demandante, por el contrario se veía beneficiado, ya que él no cumplía con sus compromisos económicos y nosotros sí”*. Repreguntada para que



Foja: 1

diga y aclare cuál era la función que cumplía el Sr. Orrego dentro de la empresa, respondió: *“Él era la persona que autorizaba los pagos y autorizaba contrataciones de proyectos y personal en su calidad de Gerente General y cumpliendo funciones administrativas”*. Repreguntada para que diga cuál era la función que cumplía la demandada, señaló: *“La Sra. Bonny Susan Elizabeth Earnest Callejas como socia del Molinos Orrego hacía trabajos administrativos y revisión de contabilidad; no cumplía funciones mayores como hacer cheques ni revisar contratos, ni autorizar pagos”*. Repreguntada para que diga quién manejaba todos los recursos económicos de la Empresa Inatec y Obras Civiles, manifestó: *“Todos los recursos los manejaba don Carlos Molinos Orrego”*. Repreguntada para que diga si durante su permanencia en la empresa pudo observar, o no, si el señor Molinos Orrego tuvo alguna complicación, enfermedad, que lo haya imposibilitado física o moralmente, para manejar la empresa, dijo: *“No, nunca lo vi enfermo, siempre asistía a la empresa”*. Repreguntada para que diga cuál era el estado anímico del Sr. Molinos durante su permanencia en la empresa, respondió: *“Normal, a veces era agresivo y grosero con el personal”*. Repreguntada para que diga si sabe, o no, si la empresa le causó perjuicios de carácter económicos al Sr. Molinos, señaló: *“No, por el contrario él fundó una nueva empresa llamada Inconur Ltda.”*. Repreguntada para que diga si la demandada Susan Earnest le ha causado algún perjuicio económico o moral al demandante don Carlos Molinos, manifestó: *“No, por el contrario ella ayudó a la empresa y trato de conciliar con él para el buen funcionamiento”*. Repreguntada para que diga si sabe, o no, si la empresa de la que eran socios el Sr. Molinos y la Sra. Susan, están aún vigentes, dijo: *“No está vigente, se produjo liquidación forzosa con liquidador concursal a petición de acreedores”*. Repreguntada para que diga si sabe, o no, si existieron o existen diferencias societarias con anterioridad a la liquidación concursal, respondió: *“Sí existían, ya que el Sr. Molinos no dejaba participar a la Sra. Susan en la toma de decisiones de los proyectos y tampoco la dejaba participar en el ámbito económico”*. Repreguntada para que diga quiénes son las partes o persona realmente perjudicada o beneficiadas en esta relación societaria, habida entre las partes, señaló: *“Los perjudicados fueron los trabajadores y los acreedores y el beneficiado fue don Carlos Molinos, ya que hoy tiene una nueva empresa que produce y en cuanto a la Sra. Susan, ella resultó perjudicada al no contar con los bienes que le correspondían a la liquidación de la empresa. En la liquidación Concursal ella no recibió nada”*. Contrainterrogada para que aclare en qué sentido formar una nueva empresa significa un beneficio, manifestó: *“Porque la nueva empresa que formó el Sr. Carlos Molinos, tomó los proyectos ya adjudicados a la empresa liquidada; lo*



Foja: 1

que me consta porque tengo documentación consistente en una carta en que Carlos Molinos solicita que el proyecto de la Empresa Bezanilla lote 21, ya adjudicado a la empresa quebrada por un monto de \$559.000.000 le fuera adjudicado a su nueva empresa Inconur. Y en esta nueva empresa el Sr. Carlos Molinos ha adquirido maquinaria nueva que le ha permitido otros negocios y proyectos". Contrainterrogada para que diga, si sabe si en el año 2016 al señor Molinos le limitaron sus facultades de administración de las dos empresas a que ella hace referencias, mediante medida prejudicial precautoria solicitada por la parte demanda de este juicio, mediante la presencia de un interventor, dijo: *"Efectivamente ingresó un interventor, pero eso fue en beneficio de las empresas, ya que los bancos nos otorgaron nuevos créditos".* Contrainterrogada para que diga si para autorizar pagos y otras gestiones de administración el señor Molinos necesitaba el visto bueno del interventor, respondió: *"Sí, así es".* Contrainterrogada para que diga con qué frecuencia asistía a la empresa el interventor designado don Enrique Concha, señaló: *"En un principio dos a tres veces a la semana, pero todos los días tenía allí un asistente que le remitía por mail todo la documentación y posteriormente concurría todos los días viernes".* Contrainterrogada para que diga si la ejecución de esos actos dictados por el señor Molinos era necesaria la firma del interventor o de su representante, manifestó: *"Solo firma del interventor".* Contrainterrogada para que diga si sabe que la no concurrencia del interventor todos los días de la semana, impedía a la empresa realizar actos administración y ello, en definitiva, entorpecía el funcionamiento de la empresa, dijo: *"No, todo lo contrario, cuando el Sr. Interventor llegó a la empresa nos enseñó a tener debidamente hecha la documentación para que el día viernes diera su firma".*

XI.- De la reanudación del término probatorio.

Por resolución de 15 de octubre de 2021, que se lee en folio 227, y previa solicitud de parte, atendido el cese del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública declarado por Decreto Supremo N°104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y la entrada en vigencia de la Ley N°21.379, que modifica y complementa la Ley N°21.226, para reactivar y dar continuidad al sistema de justicia, se reanudó el término probatorio a contar de la notificación de la presente resolución por el estado diario.

XII.- De la citación para oír sentencia.

Mediante resolución de 16 de noviembre de 2022, de folio 259, atendido lo dispuesto en el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, se citó a las partes para oír sentencia.

XIII.- De la medida para mejor resolver.



Foja: 1

Que, por resolución de 16 de diciembre de 2022, de folio 260, atendido el mérito de los antecedentes, y conforme lo dispuesto en los artículos 159 N°1 y 431 del Código de Procedimiento Civil, se decretó como medida para mejor resolver agregar a los autos el oficio N°315405-2019, que fue remitido por la Fiscalía Local de Viña del Mar, el que adjunta copia de la investigación fiscal seguida en causa RUC 1710010580-2.

Luego, por resolución de 19 de diciembre de 2022, de folio 262, se tuvo por cumplida la medida para mejor resolver, con el mérito del documento agregado en folio 261, consistente en oficio N°315405-2019, que fue remitido por la Fiscalía Local de Viña del Mar, el que adjunta copia de la investigación fiscal seguida en causa RUC 1710010580-2, por el delito de prevaricación judicial, en contra del interventor don Enrique Alejandro Concha Matus y que -atendida su extensión- fue guardado en custodia con el número 1764-2019.

Considerando:

I.- En cuanto a la objeción de documentos:

Primero: Que, mediante presentación de 21 de julio de 2018, de folio 87, don Roberto Arroyo Correa, abogado de los demandados, objeta los documentos acompañados por la parte demandante a lo principal de presentación de 18 de julio de 2018, de folio 72, signados con los números 1 a 5 de dicha presentación, a saber:

1.- La copia de informe técnico de 22 de septiembre de 2016, elaborado por la empresa Factory Bite SpA. Funda su objeción en ser un documento privado, emitido aparentemente por una empresa privada, que se desconoce su origen y existencia, emitido a instancias de la propia parte que lo presenta, sin metodología y el contenido propio respecto a sus conclusiones, por lo cual, a su juicio, carece integridad y autenticidad y por lo tanto de valor probatorio. Junto lo anterior, arguye que aparentemente se encuentra firmado por su representante legal, quien no es parte en este juicio, es decir, es un tercero, quien no lo ha reconocido en el presente juicio, por lo que, a su juicio, no satisface los presupuestos del artículo 346 N°1 del Código de Procedimiento Civil. Por último, refiere que, no tiene ninguna relación con los puntos de prueba fijados en la respectiva interlocutoria.

2.- Certificado médico de 18 de julio de 2018, emitido por el médico psiquiatra don Eduardo Correa Donoso. Funda esta objeción en carecer el documento de valor probatorio al emanar de un tercero ajeno al juicio, quien no ha reconocido el contenido y su firma puesta en dicho instrumento, careciendo a su vez de autenticidad. Adicionalmente, tal documento no establece la metodología empleada para llegar a concluir estas supuestas patologías, como tampoco establece el contenido de los tratamientos, limitándose a señalarlos de manera



Foja: 1

genérica, tampoco establece cuales son las “indicaciones médicas”, tampoco se especifica con exactitud a qué problemas de índole laboral, económico y judicial se refiere, por lo que, a su juicio, carece de mérito probatorio por manifiesta falta de integridad. Finalmente, no existe constancia o documento alguno que acredite que el señor Eduardo Correa Donoso es médico psiquiatra, careciendo de autenticidad.

3.- Copia de balance tributario a diciembre de 2015 de la empresa Inspecciones, Asesorías Técnicas y Construcción Limitada (INATEC Ltda.); y

4.- Copia de balance Tributario a diciembre de 2016 de la empresa Inspecciones, Asesorías Técnicas y Construcción Limitada (INATEC Ltda.). Ambos documentos objetados por los mismos fundamentos, esto es, corresponder a una simple hoja, emanada de la propia parte que lo presenta, sin timbres, autorización o visado del Servicio de Impuestos Internos, por lo que adolecen de falta de integridad y autenticidad. A mayor abundamiento, agrega que aquellos no van acompañados de otros documentos, como declaraciones de rentas presentadas ante el Servicio de Impuestos Internos, que den fe de que las glosas o columnas sean auténticas o veraces.

5.- Copia de balance Tributario a mayo de 2017 de la empresa Inspecciones, Asesorías Técnicas y Construcción Limitada (INATEC Ltda.). Sin perjuicio de señalar que se remite a los fundamentos de la objeción expuesta precedentemente, referida a los balances “2015 y 2017” de la empresa Inatec, los que reitera, agregó que el documento corresponde a una simple hoja, sin contar con firma de responsable, por lo que carece de integridad y veracidad, debiendo restársele todo mérito probatorio.

Segundo: Que, para resolver las objeciones detalladas precedentemente, se tendrá presente, por una parte, en cuanto la alegación de falta de integridad de los documentos signados con los números 1, 2, 3, 4 y 5, que no se aprecia en ellos el defecto alegado, es decir, no se advierte que aquellos estén cortados, superpuestos o enmendados, sin perjuicio de lo cual no se ha rendido prueba alguna en autos que permita sustentar antedicha falta, no bastando la mera afirmación de no constarle aquello a la articulista; razón por la que se rechazará la objeción formulada por este fundamento.

Luego, en lo que dice relación con el fundamento de falta de autenticidad de los documentos signados con los números 1, 2, 3, 4 y 5, tampoco es posible apreciar, con su solo mérito, este supuesto defecto y, a mayor abundamiento, ninguna prueba se ha rendido en autos a fin de acreditar dicha falta, no bastando la mera afirmación de no ser auténticos, razón por la que se rechazará la objeción formulada por este fundamento.



Foja: 1

De otro lado, en cuanto al fundamento de emanar los documentos N°1 y 2 de un tercero ajeno al juicio, quien no los ha reconocido en autos, en este punto cabe precisar que esta no es una causal legal de objeción documental, de modo que necesariamente ha de rechazarse la misma, correspondiendo -además- la valoración del documento a una actividad privativa de esta sentenciadora.

Finalmente, la circunstancia alegada respecto del documento signado con el N°1 de no tener relación alguna con los puntos de prueba fijados en la respectiva interlocutoria, al no ser una causal legal de objeción y correspondiendo -además- dicha valoración a una actividad intelectual propia de esta juez, es que también se rechazará la objeción por este fundamento.

Todo lo anterior sin perjuicio del valor probatorio que le asigne -en definitiva- a los citados documentos por esta juez.

Tercero: Que, mediante presentación de 26 de julio de 2018, de folio 95, don Roberto Arroyo Correa, abogado de los demandados, dedujo objeción respecto de los documentos acompañados por la parte demandante en su escrito de 20 de julio de 2018, de folio 82.

En primer lugar, objeta de manera principal y conjunta las copias de los correos electrónicos signados con los numerales 1, 2 y 4 al 15 de la precitada presentación de la contraria. Funda su objeción en la falsedad o falta de autenticidad todos ellos, por cuanto a su respecto no se habría practicado la audiencia de percepción documental ordenada en el artículo 348 bis del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual carecen de certeza respecto a su origen, respecto del emisor y en otros casos respecto del receptor.

En segundo término, y para el evento que la precedente objeción documental sea rechazada, objeta algunos de los documentos, de manera separada, y conforme a los argumentos particulares que refiere para cada uno de ellos, a saber:

1.- Documento signado con el N°1, copia de correo electrónico de don Carlos Molinos a don Enrique Concha, de 2 de septiembre de 2016, con correo reenviado de 1 de septiembre del mismo año; señala que el documento no corresponde en ningún caso a los enviados entre el señor Carlos Molinos y Enrique Concha, sino que estos son enviados aparentemente desde el correo de don Eduardo Olivares, quien no es parte en este juicio, es decir, emana de un tercero, de modo que el demandante reconoce como de su autoría un correo electrónico que proviene de otra cuenta de correo electrónico, por lo que adolecen de falsedad y falta de autenticidad, careciendo en consecuencia de todo valor probatorio. Adicionalmente, el tercero, que no es parte en el juicio, no los ha reconocido, por lo que igualmente adolecen de falta de autenticidad.



Foja: 1

2.- Documento signado con el N°4, consistente en copia de correo electrónico enviado por don Eduardo Olivares a don Enrique Concha Matus, el 2 de septiembre de 2016, el cual reenvía otro correo entre los señalados de 1 de septiembre del mismo año; funda la objeción en su falta de integridad y autenticidad, dado que de una simple lectura o revisión de aquellos, estos son enviados por don Eduardo Olivares y no por don Carlos Molinos Orrego, es decir, estos correos no pertenecen a la cuenta del señor Molinos Orrego, ya que salen del correo de don Eduardo Olivares, por lo tanto, indica que mal puede la parte demandante invocarlos como medios de prueba, no siendo íntegros o auténticos, por lo que carecen de todo valor probatorio.

3.- Documento signado con el N°5, consistente en copia de correo electrónico enviado por don Guillermo de las Heras a don Enrique Concha Matus, de 3 de agosto de 2016; fundó la presente objeción documental en cuanto se trata de un documento privado, que supuestamente emana de don Guillermo de Las Heras, quien no es parte en este juicio, es decir, es un tercero que no ha reconocido el documento en este juicio, por lo que no satisface el artículo 346 N°1 del Código de Procedimiento Civil. Luego, al no estar reconocido en juicio por la persona que supuestamente lo ha otorgado, no consta a su parte la autoría de aquel ni la veracidad del contenido de dicho documento, careciendo de integridad y autenticidad, debiendo restársele todo valor probatorio.

4.- Documento signado con el N°6, consistente en copia de correo electrónico enviado por doña Mónica Jiron Tokos a la cuenta de destino eolivares@inatec.cl, el 7 de septiembre de 2016; fundado en que, como la propia parte demandante lo reconoce, este documento es remitido o enviado por una supuesta ejecutiva del Banco Santander, quien no es parte en este juicio, es decir, un tercero quien no lo ha reconocido en la presente causa, por lo que no satisface los presupuestos del artículo 346 N°1 del Código de Procedimiento Civil. Luego, al no estar reconocido en juicio por la persona que supuestamente lo remite en nombre del Banco Santander, como tampoco el del destinatario, no consta a su parte la autoría de aquel ni la veracidad del contenido de dicho documento, como tampoco cuales serían los motivos o causas de su aseveración, careciendo -en consecuencia- de integridad y autenticidad, debiendo restársele todo valor probatorio.

5.- Documento signado con el N°7, correspondiente a copia de correo electrónico enviado desde la cuenta cmanzur@bci.cl, a la cuenta eolivares@inatec.cl, el 8 de septiembre de 2016; funda la presente objeción en que, tal como la propia parte demandante lo reconoce, es remitido o enviado por una supuesta ejecutiva del Banco Crédito e Inversiones, quien no es parte en este



Foja: 1

juicio, es decir, un tercero, quien no lo ha reconocido en autos, por lo que no satisface los presupuestos del artículo 346 N°1 del Código de Procedimiento Civil. Luego, al no estar reconocido en juicio por la persona que supuestamente lo remite, no consta a su parte la autoría del mismo ni la veracidad del contenido de dicho documento, como tampoco cuales serían los motivos o causas de su aseveración, careciendo de integridad y autenticidad, debiendo restársele todo valor probatorio.

6.- Documento signado con el N°9, consistente en copia de correo electrónico dirigido por don Carlos Molinos a don Enrique Concha, el 13 de septiembre de 2016, en el que aparecen dos correos reenviados entre don Carlos Molinos y don Mauricio Acuña Olmedo, ambos de 26 de agosto del mismo año; explica el articulista que objeta el correo de 26 de agosto del año 2016, enviado a las 15:22 horas, por don Carlos Molinos Orrego, sin señalar su destinatario o su receptor, por lo mismo, este documento pierde todo valor probatorio, por emanar o tener su origen en la propia parte que lo presenta, sin señalar su destinatario, por lo que adolece de falta de integridad, conforme al artículo 346 N°3 del Código de Procedimiento Civil.

7.- Documento signado con el N°10, consistente en copia de correo electrónico enviado por don Mario Pesce a don Eduardo Olivares, el 14 de septiembre de 2016, en que se reenvía correo enviado por Ferretería Higuierillas Concón a Hugo Orellana, Mario Pesce y a C. Herrera y a Marcelo Rodríguez, de la misma fecha; fundado en que, como la propia parte demandante lo reconoce, este documento es remitido por quien no es parte en este juicio, es decir, un tercero quien no lo ha reconocido en juicio, por lo que no satisface los presupuestos del artículo 346 N°1 del Código de Procedimiento Civil. Luego, al no estar reconocido en juicio por la persona que supuestamente lo otorga, no consta a su parte la autoría del mismo y menos la veracidad del contenido de dicho documento, como tampoco los motivos o causas de su aseveración, careciendo en consecuencia de integridad y autenticidad, debiendo restársele todo valor probatorio.

8.- Documento signado con el N°11, consistente en copia de correo electrónico enviado por don Carlos Molinos a don Enrique Concha, de 14 de septiembre de 2016, en el que aparecen reenviados dos correos entre ambos, de 12 y 13 de septiembre del mismo año; fundado en su falta de integridad y autenticidad, atendido que estos correo electrónicos únicamente son aparentemente remitidos o enviados por don Carlos Molinos Orrego, no constando las respuestas a dichos correos por parte del señor interventor don Enrique Concha. Luego, los documentos emanan de la propia parte que los presenta, no constando la veracidad de su contenido, por lo que no tienen ningún valor



Foja: 1

probatorio. En segundo lugar, se aprecia que estos correos electrónicos se encuentran cortados, en efecto, en el correo de 14 de septiembre del 2016, de 12:53 horas, se aprecia en su parte final lo siguiente: "*Atte Carlos Molinos Orrego Gerente General Inatec Ltda.*", sin embargo, los otros correos electrónicos de 13 de septiembre 2016 a las 17:51 horas y de 12 de septiembre de 2016 a las 18:55 horas, se aprecia que están cortados o superpuestos con otros correos electrónicos, apareciendo únicamente las palabras "*Atte.*", enseguida con una línea negra, en paralelo, que impide ver la firma del responsable, por lo que estos correos electrónicos adolecen de falta de integridad y, al mismo tiempo, no consta a su parte la veracidad del contenido del documento, más aun, emana de la propia parte que lo presenta, por lo que se les deberá restar todo valor probatorio.

9.- Documento signado con el N°14, consistente en copia de correo electrónico enviado por don Guillermo de las Heras a don Mauricio Acuña Olmedo y a don Carlos Molinos, el 16 de agosto de 2016, en el que aparece correo reenviado entre estos dos últimos en la misma fecha; fundado en que se trata de un documento privado, que emanaría de don Guillermo de Las Heras y el otro de don Mauricio Acuña, quienes no son parte en este juicio, es decir, son terceros quienes no lo han reconocido en juicio, por lo que no se satisfacen los presupuestos del artículo 346 N°1 del Código de Procedimiento Civil. Luego, al no estar reconocido en juicio por la persona que supuestamente lo otorga, no consta a su parte la autoría del mismo y menos aún la veracidad del contenido de dicho documento, careciendo de integridad y autenticidad, debiendo restársele todo valor probatorio.

10.- Documento signado con el N°15, consistente en copia de correo electrónico enviado por don Carlos Molinos a la cuenta ecliquidador@gmail.com, el 27 de septiembre de 2016, con correos reenviados entre don Carlos Molinos y don Enrique Concha Matus de 14 y 20 de septiembre del mismo año; fundado en que emanan de la propia parte que los presenta, no constando su autenticidad e integridad, por corresponder a documentos privados supuestamente originados o confeccionados por la propia parte demandante, los que no han sido reconocidos en juicio por su autor, por lo que se les deberá restar todo valor probatorio.

11.- Documento signado con el N°16, consistente en copia de carta de don José Luis Palacios a don Carlos Molinos Orrego, de 5 de marzo de 2016, que adjunta informe de valorización del grupo de empresas Inatec; fundado en ser un documento privado, el que emana supuestamente de don José Luis Palacios Ibaceta, quien no es parte en este juicio, es decir, un tercero quien no lo ha reconocido en el presente juicio, por lo que no se satisfacen los presupuestos del artículo 346 N°1 del Código de Procedimiento Civil. Luego, al no estar reconocido



Foja: 1

en juicio por la persona que supuestamente lo otorga, no consta a su parte la autoría del mismo y menos aún el contenido de aquel, careciendo de integridad y autenticidad, debiendo restársele todo valor probatorio.

Cuarto: Que para resolver, en primer lugar, la objeción realizada de manera conjunta y principal, respeto de los documentos signados con los números 1, 2, y 4 a 15, fundada en su supuesta falsedad o falta de autenticidad al no haberse percibido en la respectiva audiencia de percepción documental, ha de tenerse presente que la resolución de 23 de julio de 2018, que se lee en folio 90, junto con tenerlos por acompañados, en lo pertinente dispuso: “Proveyendo la presentación realizada por la parte demandante con fecha 20 de julio a las 07:58 horas: Respecto de los documentos acompañados bajo los numerales 3 y 16, téngase por acompañados, con citación. En cuanto a los correos electrónicos, téngase por acompañados con citación, con excepción de aquel individualizado bajo el numeral 12, por no encontrarse entre aquellos presentados por la demandante; teniendo presente que dichos documentos pueden ser percibidos directamente de la carpeta electrónica, y de conformidad con lo prevenido en el inciso final del artículo 348 bis del Código de Procedimiento Civil, se omita la citación a la audiencia de percepción documental, sin perjuicio de poder ser solicitado por la contraria, si así lo estima pertinente.”

Luego el inciso final del artículo 348 bis del Código de Procedimiento Civil dispone: *“En el caso que los documentos electrónicos acompañados puedan ser percibidos directamente en la carpeta electrónica, el tribunal podrá omitir la citación a audiencia de percepción, debiéndose entender que han sido puestos en conocimiento de la parte contraria desde que se notifica la resolución que los tiene por acompañados bajo el apercibimiento correspondiente.”*

De este modo, conforme lo permite la norma precitada y el mérito de la resolución transcrita precedentemente, la que si bien omitió la citación a la audiencia de percepción, confirió a la parte contraria de quien presentó los documentos -esto es a la propia articulista- el derecho de solicitarla si así lo estimase procedente, lo que en los hechos no ocurrió en autos, de manera que necesariamente se rechazará la objeción por este fundamento.

Quinto: Que respecto a las objeciones realizadas por vía subsidiaria, conforme lo detallado en el motivo tercero, en cuanto al fundamento de emanar los documentos signados con los N°1, 5, 6, 7, 10, 14 y 16 de terceros ajenos al juicio, quienes no los han reconocido en autos, en este punto cabe destacar que esta no resulta ser una causal legal de objeción, de modo que necesariamente se rechazará la misma, correspondiendo –en consecuencia- la valoración de cada uno de los documentos a una actividad privativa de esta sentenciadora.



Foja: 1

Luego, respecto del fundamento de ser falsos o no auténticos, esgrimido respecto de los documentos signados con los N°1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15 y 16, ha de tenerse presente que, con su solo mérito, no se advierte el pretendido defecto y que, a mayor abundamiento, ninguna prueba se ha rendido en autos a fin de acreditar dicha falta, no bastando la mera afirmación de ser falsos o no auténticos, razón por la que se rechazará la objeción formulada por este fundamento.

Finalmente, en cuanto a la pretendida falta de integridad de que adolecerían los documentos signados con los números 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15 y 16, ha de tenerse en vista que, por una parte, ninguna prueba fue rendida en autos a fin de acreditar este defecto y, por otra, como ya se aclaró en el motivo cuarto, respecto de aquellos que la parte demandada y articulista pudo solicitar la realización de la audiencia de percepción documental a fin de constatar su integridad o su falta, aquella no lo solicitó en tiempo ni forma, a pesar de habersele concedido dicha facultad, todas razones por las que se rechazará la objeción basada en este fundamento.

Todo lo anterior sin perjuicio del valor probatorio que le asigne -en definitiva- a los citados documentos por esta juez.

II.- En cuanto al fondo:

Sexto: Que, con la finalidad de seguir un orden lógico, se alterará la disposición en que se encuentran fijados los hechos de prueba en la interlocutoria de autos, abordándose, en primer lugar la excepción de fondo opuesta por los demandados en orden a la falta de legitimación procesal del actor.

Así, en cuanto al hecho número tres de la interlocutoria de prueba, la efectividad de que el demandante se encuentra legitimado activamente para accionar en el presente juicio- ha de tenerse presente que, conforme la doctrina de don Manuel Ortells Ramos, quien refiriéndose a los requisitos subjetivos de las partes que condicionan la admisibilidad del pronunciamiento de fondo sobre la pretensión procesal, explica que: *“La legitimación es un requisito también subjetivo, pero no solo eso. Su existencia depende de una cierta vinculación de las personas que se presentan como parte con la situación jurídica material a que se refiere la pretensión procesal. En atención a esa vinculación se determina quién puede pretender eficazmente el pronunciamiento judicial sobre la situación jurídica material (legitimación activa) y frente a quién ha de ser pretendido ese pronunciamiento para que sea eficaz (legitimación pasiva). La legitimación no puede ser apreciada sino en consideración de la concreta pretensión procesal interpuesta en un proceso.”* (Manuel Ortells Ramos. Derecho Procesal Civil. Editorial Aranzadi, cuarta edición, año 2003. Pág. 161.)



Foja: 1

De otro lado, existe amplia y reiterada jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema respecto de la legitimación procesal activa y pasiva; a modo ejemplar, en autos Rol Excma. CS N°8324-2019, ha referido: “**UNDÉCIMO:** (...) *En efecto, se ha señalado que no basta la presencia de los elementos de la acción para que sea favorablemente acogida por la sentencia. Para que el actor triunfe en su demanda, se requiere las siguientes condiciones: 1) derecho, o sea una norma de la ley que garantice al actor el bien que pretende; 2) calidad, o sea la identidad de la persona del actor con la persona favorecida por la ley y de la persona obligada con la del demandado; 3) Interés, de conseguir el bien mediante la intervención del órgano público. Así, la legitimación procesal es la consideración especial que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto del litigio y, en virtud de la cual, exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada, en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como parte en tal proceso. La sola capacidad procesal no basta para formular una pretensión y para oponerse a ella en un proceso, sino que es necesaria una condición más precisa y específica referida al litigio mismo. DUODÉCIMO: Que lo importante, para la determinación respecto del vicio invocado, es que la legitimación activa o pasiva es un presupuesto indispensable de la relación procesal. Interesa destacar que la legitimación no es un requisito para el ejercicio de la acción, sino para su admisión en la sentencia, cuestión que debe ser establecida por el juez aun cuando las partes del pleito no hayan enarbolado entre sus defensas la falta de legitimación activa o pasiva o lo hicieren extemporáneamente. (...)*”; asimismo en autos Rol Excma. CS N°31.350-2018, ha expresado: “**QUINTO:** *Que para abordar el análisis de esta controversia resulta útil recordar que la legitimación es un presupuesto procesal que dice relación con la aptitud para ser parte en un juicio, y se encuentra determinada por la pretensión planteada en un caso concreto con relación al objeto del litigio. En palabras del profesor Alejandro Romero Seguel, la legitimación se vincula con la titularidad de la situación controvertida en un juicio y es un presupuesto de fondo de procedencia de la acción; es decir una exigencia cuya falta determina ineludiblemente que no se pueda conceder la petición de tutela judicial solicitada en el proceso. Si no concurre la legitimación -activa y pasiva- faltaría un elemento básico para acceder a la tutela judicial. (Curso de Derecho Procesal Civil, Editorial Jurídica de Chile. Santiago, edición del año 2014, Tomo I, página 101).*”

Séptimo: Que, establecido lo anterior, y sin entrar por ello al fondo de la acción deducida por el demandante, del mérito de autos se advierte que don Carlos Molinos Orrego ha deducido en el presente litigio una pretensión procesal indemnizatoria, basada en la responsabilidad extracontractual que le pudo haber



Foja: 1

cabido los demandados por el hecho de haber solicitado y obtenido medidas prejudiciales precautorias en causa Rol C-2529-2016, caratulados “Earnest con Molinos”, seguida ante el 2° Civil de Viña Del Mar, respecto de sociedades en las cuales el actor no solo tenía la calidad de socio, sino que –además- ostentaba el cargo de generante general, incumpliendo presuntamente los demandados el inciso 2° del artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, que señala: “... *Si no se deduce demanda oportunamente, o no se pide en ella que continúen en vigor las medidas precautorias decretadas, o al resolver sobre esta petición el tribunal no mantiene dichas medidas, por este solo hecho quedará responsable el que las haya solicitado de los perjuicios causados, considerándose doloso su procedimiento.*”, lo que le habría reportado los perjuicios que reclama.

De contrario, los demandados fundan la excepción de falta de legitimación activa, en el hecho que el actor comparece en estos autos como persona natural, en circunstancias que las medidas prejudiciales precautorias fueron dirigidas en contra de seis personas jurídicas, y no en contra del actor; afirman que cualquier presunto daño, habría afectado a las personas jurídicas pues, a su entender, para que opere el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, sería necesario que la medida prejudicial hubiese afectado directamente al futuro demandado en su esfera patrimonial, lo que no ocurriría en este caso.

De este modo, a fin de resolver la excepción que nos ocupa, ha de estarse al expreso tenor del artículo 280 del Código precitado, el que refiere en su inciso primero que aceptada o concedida la medida prejudicial: “... *deberá el solicitante presentar su demanda en el término de diez días y pedir que se mantengan las medidas decretadas. Este plazo podrá ampliarse hasta treinta días por motivos fundados.*”; y agrega su inciso segundo: “*Si no se deduce demanda oportunamente, o no se pide en ella que continúen en vigor las medidas precautorias decretadas, o al resolver sobre esta petición el tribunal no mantiene dichas medidas, por este solo hecho quedará responsable el que las haya solicitado de los perjuicios causados, considerándose doloso su procedimiento.*”

Así las cosas, de la norma transcrita no se evidencia la restricción alegada por los demandados, en el sentido que el único titular de una acción indemnizatoria fundada en el supuesto que aquella prescribe sea el mismo demandado de la medida prejudicial –en cuanto parte directa- y, a falta de restricción, ha de entenderse que podrá solicitarse por cualquiera que acredite un interés en ello, lo anterior sin perjuicio de su deber procesal de acreditar la necesaria relación de causalidad entre el hecho contemplado en la norma y los perjuicios, así como de acreditarse también la efectividad y entidad de estos últimos, pero aquello es objeto de otros hechos de prueba que han de ser analizados con posterioridad;



Foja: 1

luego, como se ha acreditado, el actor no sólo era –a la fecha de decretarse y ejecutarse las medidas prejudiciales- socio de las sociedades afectadas, sino también su gerente general, de manera que ello resulta suficiente para dar por establecido su legítimo interés, razón por la que se rechazará la excepción opuesta como se dirá en la parte resolutive del presente fallo.

Octavo: Que, en cuanto al hecho número uno de la interlocutoria de prueba, la efectividad de haberse concedido una medida prejudicial precautoria en los autos Rol C-2529-2016 del 2° Juzgado Civil de Viña del Mar y en la afirmativa, términos en los que fue decretada; de la prueba rendida en autos, particularmente del mérito de la prueba documental agregada oportunamente, es que se encuentra acreditado que por resolución de 4 de julio de 2016 dictada en causa Rol C-2529-2016, del Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar, se concedió la medida prejudicial de nombramiento de interventor respecto de las sociedades Inversiones Con-Con S.A, Inatec Ltda., Inversiones Concón Dos S.A, Obras Civiles Inatec Limitada, Inmobiliaria Moro Limitada, Transportes Moro Limitada y en todas ellas que en su conjunto constituyen la malla societaria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 293 N°4 del Código de Procedimiento Civil, siendo designado interventor el abogado perteneciente a la nómina de liquidadores y veedores de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento don Enrique Concha Matus; además, la misma resolución concedió -desde luego- la medida prejudicial precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos, respecto de las sociedades indicadas precedentemente, limitando las facultades de administración y representación legal de don Carlos Manuel Molinos Orrego, tanto para la administración, disposición de bienes sociales y facultad de obligar válidamente a la sociedad, pudiendo administrarla y hacer uso de su razón social únicamente en conjunto con el interventor designado o previa visa por escrito del referido interventor; asimismo, se ordenó inscribir la medida en los Conservadores de Bienes Raíces de Viña del Mar y Concón, según lo dispuesto en el artículo 297 N°1 del Código de Procedimiento Civil.

De todo lo anterior da cuenta la causa tenida a la vista Rol C-2529-2016, caratulada “Earnest con Molinos”, seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña Del Mar, remitida mediante oficio N°526-2018, del citado Tribunal, que se lee en folio 126, expediente que se encuentra guardado en custodia bajo el N°2777-2018. En el mismo sentido la documental agregada por la parte demandante consistente en copia de la solicitud de medida prejudicial precautoria, presentada por doña Bonnie Sussan Elizabeth Earnest Callejas, doña Angélica Patricia Rodríguez Earnest, don Miguel Andrés Rodríguez Earnest y doña Catalina María Rodríguez Earnest, ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar, y copia de resolución que



Foja: 1

da curso a la medida prejudicial, de 4 de julio de 2016 dictada en los autos Rol C-2529-2016, caratulada "Earnest/Molinos" del Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar; los que se encuentran agregados en la carpeta de documentos de folio 1 del cuaderno de medida prejudicial. De la misma manera, la documental acompañada por la parte de las demandadas consistente en copia de resolución de 4 de julio del año 2016, dictada en los autos Rol C 2529-2016, del Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar, por la cual se dio curso a las medidas prejudiciales, la que se encuentra agregada en folio 16 del cuaderno de medida prejudicial.

Noveno: Que, en lo relativo al hecho número dos de la interlocutoria de prueba -en su caso, efectividad que los demandados cumplieron los requisitos para mantener la medida prejudicial precautoria- en este punto cabe nuevamente tener en vista el tenor del artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, el que dispone en su inciso primero, para el caso de haberse concedido la solicitud de medida prejudicial en los términos del artículo 279 precedente: *"Aceptada la solicitud a que se refiere el artículo anterior, deberá el solicitante presentar su demanda en el término de diez días y pedir que se mantengan las medidas decretadas. Este plazo podrá ampliarse hasta treinta días por motivos fundados."* Y agrega su inciso segundo: *"Si no se deduce demanda oportunamente, o no se pide en ella que continúen en vigor las medidas precautorias decretadas, o al resolver sobre esta petición el tribunal no mantiene dichas medidas, por este solo hecho quedará responsable el que las haya solicitado de los perjuicios causados, considerándose doloso su procedimiento."* A su turno, el artículo 287 del mismo código precitado, norma que también se encuentra en el título IV titulado De Las Medidas Prejudiciales, previene: *"Para decretar las medidas de que trata este Título, deberá el que las solicite expresar la acción que se propone deducir y someramente sus fundamentos."* Finalmente, el inciso primero del artículo 273 del mismo código de procedimiento, previene: *"El juicio ordinario podrá prepararse, que la medida exigiendo el que pretende demandar de aquel contra quien se propone dirigir la demanda..."*

Así las cosas, de la lectura armónica de los artículos transcritos, se extraen los requisitos copulativos para que se mantenga una medida prejudicial previamente decretada, a saber: que el solicitante presente su demanda oportunamente, esto es dentro del término de diez días contados desde que se concedió la medida, o dentro de la ampliación que se haya concedido por motivos fundados, con un máximo de treinta días; que la demanda contenga la petición expresa de que se mantengan las medidas; el pronunciamiento expreso del tribunal en orden mantener dichas medidas; que la acción anunciada en la medida prejudicial sea la misma entablada en la demanda; y que las medidas prejudiciales



Foja: 1

se haya impetrado por el ahora demandante, en contra de quien éste se propone dirigir la demanda, ahora demandado, es decir, la identidad entre uno y otro, tanto en la medida como en la acción deducida con posterioridad.

Décimo: Que, del mérito de la prueba rendida en autos, particularmente de la causa tenida a la vista Rol C-2529-2016, caratulada "Earnest con Molinos", seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña Del Mar, remitida mediante oficio N°526-2018, del citado Tribunal, que se lee en folio 126, expediente que se encuentra guardado en custodia bajo el N°2777-2018, es que se acredita -por una parte- que el 22 de junio de 2016 doña Bonnie Earnest Callejas, por sí, y en representación de doña Angélica Patricia Rodríguez Earnest, de don Miguel Andrés Rodríguez Earnest y de doña Catalina María Rodríguez Earnest, solicitaron: *"las medidas prejudiciales precautorias contenidas en el número 2 del artículo 290 y artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, en contra de las siguientes sociedades, respecto de las cuales soy socia y representante legal conjuntamente con el demandado don Carlos Manuel Molinos Orrego"*, luego de lo cual detalla las sociedades, a saber: Inspecciones, Asesorías Técnicas y Construcción Limitada, cuyo nombre de fantasía es INATEC LTDA.; de Obras Civiles INATEC Limitada, cuyo nombre de fantasía es O.C. INATEC LTDA.; de Inversiones Con-Con S.A.; de Inversiones Con-Con Dos S.A.; de Inmobiliaria Moro Limitada; y de Transportes Moro Limitada; y agrega: *"Asimismo, solicitaremos a V.S., la medida precautoria innominada autorizada por el artículo 300 del Código de Procedimiento Civil, para que se le prohíba al futuro demandado don CARLOS MANUEL MOLINOS ORREGO, realizar actos de administración y disposición patrimonial en las referidas sociedades, sin previa autorización del Interventor que se haya designado, sin perjuicio, de conservar las facultades de mera administración ordinaria del giro societario, a fin de no embarazar la continuidad de los negocios."*; finalmente: *"respecto de las Sociedad Anónimas "CONCON S.A." Rut N°76.067.965-8 y "CON-CON DOS S.A." Rut N°76.085.664-9 solicitaré al concluir esta presentación se conceda la medida prejudicial precautoria, contemplada en el numeral 4to., del artículo 290 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la prohibición de celebrar actos y contratos respecto del paquete de acciones que posee en las citadas sociedades don CARLOS MANUEL MOLINOS ORREGO..."*. Se lee, además, al sexto otrosí de aquella gestión lo siguiente: *"SEXTO OTROSÍ: Sírvese SS., tener presente que mi parte de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, anuncia como acción a deducir en este procedimiento, la acción de disolución de las sociedades, sin perjuicio de ejercer las acciones derivadas de su incumplimiento al deber ético jurídico contenido en el artículo 402,403,404 v siguientes del Código de Comercio,*



Foja: 1

conforme a los hechos expuestos en lo principal de esta presentación, que solicito a SS., tenerlos presente y por reproducido aquí como fundamentos de la acción que se deducirá y para los efectos de dar cumplimiento a la norma citada.”

En segundo lugar, da cuenta el referido expediente, que los solicitantes de la medida prejudicial -demandados en estos autos- presentaron a lo principal de escrito de 5 de agosto de 2016, demanda de mera certeza como cuestión previa a las demandas contenidas en el primer otrosí, en contra de Inversiones Con-Con S.A.; de Inversiones Con-Con Dos S.A.; de Inspecciones, Asesorías Técnicas y Construcción Limitada, cuyo nombre de fantasía es INATEC LTDA; de Obras Civiles INATEC Limitada, cuyo nombre de fantasía es O.C. INATEC LTDA.; de Inmobiliaria Moro Limitada; y de Transportes Moro Limitada; y en el primer otrosí de su escrito, demandan para que una vez: *“Resuelta que sea la acción deducida en lo principal de esta presentación, acogiéndola o rechazándola en su caso, corresponderá designar el tribunal arbitral, llamado a conocer de las siguientes acciones que se educen en forma conjunta”*, a saber, de remoción del gerente general o administrador de las sociedades demandadas, de exclusión y retiro de las sociedades que administra y representa legalmente don Carlos Molinos Orrego, de disolución de las sociedades demandadas, y de indemnización de perjuicios por los daños causados y provocados al patrimonio social, a sus socios y accionistas, por el administrador o gerente general.

En tercer lugar, consta del citado expediente tenido a la vista, que mediante resolución 12 de agosto de 2016, el tribunal dio curso a la demanda, y proveyendo a lo principal y primer otrosí de ella, advirtiendo que lo que solicita la parte demandante es un asunto que será resuelto por un arbitraje forzoso y según lo dispuesto en el artículo 227 del Código Orgánico de Tribunales, citó a las partes al comparendo de designación de árbitro; luego, proveyendo al tercer otrosí del libelo, decretó se mantuviera la medida prejudicial en carácter de precautoria.

En cuarto lugar, da cuenta el expediente en análisis, que mediante presentación de 22 de agosto de 2016, se solicitó se dejaran sin efecto las medidas precautorias decretadas, fundado en la falta de los requisitos para su procedencia, específicamente infracción a la norma del artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, esto es que las medidas que se decretaron fueran dirigidas en contra del futuro demandado; solicitud que fue rechazada por el tribunal de la instancia, mediante resolución de 31 de agosto de 2016, al estimar que -a dicha época- si se cumplían los requisitos legales para mantener la medida prejudicial precautoria; esta última resolución fue recurrida de apelación mediante presentación de 6 de septiembre del mismo año, ingresando a la Ilustrísima Corte



Foja: 1

de Apelaciones de Valparaíso con el Rol Ica 2130-2016, la que junto con otras apelaciones en la misma causa, se acumuló en causa Rol Ica 2128-2016.

Finalmente, da cuenta el referido expediente que, conociendo de las apelaciones precitadas, y en la parte que resulta pertinente, mediante sentencia de 11 de julio de 2017 de la citada Ilustrísima Corte, en su parte considerativa razonó: *“III.- En cuanto al recurso de apelación deducido a fojas 1894, en contra de la resolución de 31 de agosto de 2017, que no dio lugar a la solicitud de fojas 1719, de dejar sin efecto la medida precautoria decretada como prejudicial por resolución de 4 de julio de 2016, escrita a fojas 1554 y mantenida por resolución de 12 de agosto de 2016, escrita a fojas 1668. Ingreso Corte Civil N°2130-2016.*

“15° Que, de acuerdo a lo razonado en los considerandos primero a cuarto, la parte solicitante de la medida precautoria anunció demanda en contra de don Carlos Manuel Molinos Orrego, en la que pediría la disolución de las sociedades antes referidas, sin perjuicio de ejercer las acciones derivadas de su incumplimiento al deber ético jurídico contenido en los artículos 402, 403 y 404 y siguientes del Código de Comercio; lo que no hizo ya que dedujo una acción de mera certeza en contra de las sociedades tantas veces referidas y no respecto de don Carlos Molinos Orrego.

“16° Que, en consecuencia, no habiendo cumplido la solicitante con la obligación que le impone el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, procede dejar sin efecto las medidas prejudiciales decretadas. No obsta lo anterior la circunstancia que se hayan presentado las demandas del primer otrosí del escrito de fojas 1608, en atención a que la acción es subsidiaria y fue anunciada para presentarse ante un tribunal arbitral.” Y, en la parte resolutive de la citada sentencia, ordenó: “III.- Ingreso Corte Civil N°2130-2016. Que se revoca la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, escrita a fojas 1827, en cuanto por ella se mantienen las medidas precautorias decretadas con fecha 4 de julio de 2016 y mantenidas por resolución de 12 de agosto de 2016; y en su lugar se declara que, por no reunirse los requisitos del artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, se las deja sin efecto.”

De todo lo cual se sigue, que se encuentra fehacientemente acreditado que los demandados de estos autos no cumplieron los requisitos para mantener la medida prejudicial precautoria que fuera decretada en causa Rol C-2529-2016, caratulada “Earnest con Molinos”, seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Viña Del Mar.

Undécimo: Que, en lo relativo al hecho de prueba número cuatro, esto es, en su caso, existencia, naturaleza y montos de los perjuicios sufridos por el demandante; cabe recordar que el actor aseveró en su libelo haber sufrido daños



Foja: 1

derivados del actuar culpable de los demandados, al solicitar se decretaran medidas prejudiciales precautorias que le causaron graves y cuantiosos perjuicios patrimoniales y morales a su persona.

Así, por una parte, alega el actor haber sufrido daño emergente, por el cual demandó la suma de \$1.000.000.000.- o la suma mayor o menor que el Tribunal estime conforme al mérito de autos; refiriendo en este punto que, durante el tiempo que las medidas prejudiciales precautorias se decretaron y mantuvieron vigentes, afectaron gravemente a las sociedades objeto de las mismas -en especial las sociedades operativas INATEC Ltda. y Obras Civiles INATEC Limitada- tanto por la figura de interventor, ya que atendido a que se necesitaban sus visiones, ralentizó los procesos y gestiones, y en la práctica significó que un tercero absolutamente desconocido, de un momento a otro, pasara a ocupar y controlar de alguna manera el trabajo y la forma como administraba el actor su patrimonio; junto a lo anterior, el anuncio de que se demandaría la disolución de las sociedades, ello redundó en la imagen de aquellas y en un desprestigio ante sus clientes y el mercado de la construcción, su personal y ante los Bancos -principal fuente de financiamiento para la operación y marcha de las sociedades por su giro y actividad principal: la construcción, y que ello importó que los Bancos paralizaran las líneas de crédito que tenía INATEC Ltda. y Obras Civiles INATEC Limitada y que le permitían operar y funcionar en su giro de la construcción, afectando también las obras vigentes y obligando al demandante a tener que comprometer su patrimonio personal para financiar las sociedades y así continuar con las obras en ejecución, adicionalmente dijo que el interventor se negó al pago de la remuneración o sueldo del actor, quien no pudo recibirlo durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2016.

En este sentido, tanto la jurisprudencia como la doctrina, están contestes en que de acuerdo al artículo 1698 del Código Civil, corresponde a la parte demandante acreditar el daño cuya indemnización impetra, por ser éste uno de los fundamentos de su acción. Además, la indemnización del daño requiere que sea cierto, esto es, que sea real y no hipotético, lo que debe ser debidamente acreditado por los medios de prueba aceptados por la ley, toda vez que mediante la prueba, se logra garantizar que el juzgador se convenza acerca de la verdad de las proposiciones solicitadas por las partes.

Así las cosas, en lo que respecta al daño emergente alegado, ha de tenerse en vista que la única prueba que consta en autos para acreditar la existencia del referido daño, en la parte que alega el actor de tener que comprometer su patrimonio personal para financiar las sociedades, consiste en las declaraciones de dos de los testigos que deponen de su parte, don Luis Eduardo Olivares Viera y



Foja: 1

don Eduardo de Jesús Lillo González, cuyas declaraciones constan en folio 35 de autos; así, el primero de los señalados indicó: *“Posteriormente y debido a las dificultades de tipo económico y a que el apoyo de los bancos se veía disminuido por la presencia del interventor, nos tocó vivir una época de mucha tensión, y de mucha indefinición, ya que el gerente no podía tomar medidas sin la firma del interventor que no siempre se encontraba presente. También me tocó presenciar el deterioro de las relaciones con el personal, debido a la razón anterior y que el Gerente no podía solucionarles directamente sus problemas, inclusive en el mes de septiembre hubo necesidad de que el mismo Carlos Molinos tuviera que facilitar fondos para pagar los anticipos, ya que el interventor, a pesar de innumerables comunicaciones con él, no se hizo presente en los días previos.”*; por su parte el segundo testigo dijo: *“De las reiteradas ausencias del Interventor Concha, en donde se requería su presencia, sobre todo para pagos de proveedores y personal, el señor Carlos Molinos tuvo que colocar plata personal para pagar los anticipos de los trabajadores y pagos de algunas facturas que eran urgentes.”* Así, si bien en principio de antedichas declaraciones es posible establecer que efectivamente el actor, en una oportunidad debió cubrir con su patrimonio personal pagos o anticipos de remuneraciones, aquellas no se pronuncian en cuanto al monto al que habría ascendido aquello, ni a qué número de trabajadores habría abarcado, ni menos si ello incluyó a todas los trabajadores de todas las sociedades, o solo de alguna o algunas, lo que tampoco se ve complementado con otra prueba rendida en autos, de manera que si bien se ha acreditado su existencia y su naturaleza patrimonial, no se puede determinar su monto, de manera que desde ya ha de ser rechazada la acción por esta partida.

En lo que dice relación con que el interventor se habría negado al pago del sueldo o remuneración del actor, devengado durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2016, la única prueba que se ha rendido en autos para intentar acreditar este daño patrimonial emergente, consiste en la copia del correo electrónico enviado por don Enrique Concha Matus a don Eduardo Olivares y a don Carlos Molinos, de 2 de septiembre de 2016, agregada en la carpeta de documentos de folio 82 del cuaderno principal, sin embargo aquel solo hace referencia en términos imprecisos *“al sueldo empresarial de Carlos Molinos”*, agregando que aquel *“se rige de acuerdo al reglamento de las sociedades limitadas”*, pero nada dice en cuanto a los meses supuestamente adeudados, ni aporta otro elemento que le otorgue certeza y realidad a la partida reclamada, de manera que aquello no resulta suficiente para establecer su existencia, menos su entidad, de modo que desde ya procede el rechazo de la acción por esta partida.



Foja: 1

Duodécimo: Que, en cuanto al lucro cesante, concepto por el cual el actor alegó daños que avaluó en la suma de \$1.200.000.000.- o la suma mayor o menor que el Tribunal estime conforme al mérito de autos; ha de tenerse presente que si bien el daño para ser indemnizado debe ser cierto y no eventual, esta certeza en el caso del lucro cesante es de carácter relativo, pues de otro modo nos alejaríamos del principio de reparación integral del daño; pero como contrapartida deberá fundarse en antecedentes objetivos que consten en el proceso, a fin de que concurra la verosimilitud suficiente para ser reputados como muy probables, o con la mayor aproximación a su certeza efectiva.

No obstante lo anterior, la parte demandante no señala de manera precisa cómo arriba al monto demandado por esta partida y, más importante aún, en qué consiste específicamente el lucro cesante invocado, no señalando si proviene de la pérdida de remuneraciones futuras, si de retiros no efectuados de las sociedades, o porcentajes de sobre sueldos o incentivos que tuviese derecho a percibir, ya sea en calidad de gerente general, socio o accionista de alguna de las sociedades respecto de la cuales se decretaron las medidas prejudiciales precautorias. A mayor abundamiento, tampoco se ha rendido prueba que permita establecer la pérdida del provecho económico que alega el actor, de manera que, ha de rechazarse la acción por esta partida reclamada.

Décimo tercero: Que, finalmente, el actor refirió haber sufrido daño moral debido al ilícito en que incurrieron los demandados por el hecho de la intervención decretada en la medida prejudicial, lo que provocó daños a su reputación y el desprestigio tanto respecto de los trabajadores de la empresa, como Bancos, clientes y proveedores, sufriendo ansiedad, preocupación, depresión y angustia tanto aquel como su familia, razón por la cual demanda por este concepto la suma de \$500.000.000.- o la suma mayor o menor que el Tribunal estime conforme al mérito de autos.

En este punto, hay que precisar que tanto la doctrina como la jurisprudencia refieren que el daño moral no lesiona el patrimonio de la víctima sino otros intereses no patrimoniales, constituyéndose como el detrimento o menoscabo provocado a bienes que carecen de significación patrimonial o no susceptibles de medición en dinero, y que se puede categorizar desde el sufrimiento efectivo que se experimenta física o psíquicamente, denominado tradicionalmente *pretium doloris*, pero que no se limita a este, pudiendo incluso consistir en violación a ciertos bienes como el honor, la libertad, la tranquilidad espiritual e incluso la intimidad personal o familiar, el daño a la imagen y el denominado perjuicio de agrado; luego, probada la vulneración o agravio del derecho subjetivo, queda



Foja: 1

demostrada la existencia del daño moral, y corresponderá su valoración, conforme a la cuantificación que se logre acreditar.

Luego, se tendrá presente el mérito de la prueba pericial solicitada oportunamente por la parte demandante, y que derivó en el informe pericial evacuado por don Germán Roberto Abarca Caro, psicólogo, el que fue agregado a los autos el 29 de diciembre de 2018, en folio 154. El referido informe, luego de describir las fuertes desavenencias entre el periciado y los herederos de su ex socio -los demandados de autos- las que llevaron a que se presentara la solicitud de medidas prejudiciales precautorias ante el Segundo Juzgado de Viña del Mar, como el nombramiento de un interventor y la limitación de las funciones del actor como administrador de la empresa; refiere como resultados de la evaluación que el demandante: *“estuvo expuesto durante un largo tiempo a altos niveles de estrés, que significaron cambios en su forma de procesar la información y relacionarse con el medio ambiente, pudiéndose señalar que la larga duración de la fuente de estrés y su intensidad, significaron una experiencia traumática para Carlos, es decir, la fuente de estrés era mayor a los recursos psicológicos que dispone para enfrentar las exigencias del medio ambiente; pudiéndose afirmar que la fuente de estrés está directamente relacionada a las acciones realizadas por el interventor, debido a las dificultades económicas que significaron tanto para la empresa como para Carlos y, al darse cuenta de la colusión del interventor con la otra parte en disputa.”* Agrega como consecuencias del evento y sus repercusiones la siguiente sintomatología: a) disminución importante del interés o del placer por varias actividades que antes eran placenteras, en remisión parcial; es decir, que todavía se manifiesta pero en menor intensidad; b) pérdida del apetito, actualmente en remisión; c) dificultades clínicamente significativas referentes al sueño; actualmente en remisión, debido al uso de fármacos; d) falta de energía, en remisión parcial; e) disminución significativa de la capacidad para concentrarse; f) reacciones fisiológicas intensas a factores externos que simbolizan a un aspecto del suceso(s) traumático; g) evitación activa respecto a estímulos que puedan rememorar la empresa fundada con Mario, como por ejemplo, el evitar pasar por fuera del lugar donde tenían las oficinas o no ha vuelto ir al sector de Peñablanca; h) niveles clínicamente significativos de ansiedad y angustia, tratados a través de control farmacológico; i) cambios de genio y humor; j) irritabilidad. Además afirma que el actor padeció un trastorno depresivo, y presentó abundante sintomatología ansiosa y sintomatología de haber sufrido elevados montos de estrés. En resumen, reitera que el actor, producto de los sucesos relacionados a la presente causa, ha vivido un hondo dolor psíquico, presentando un trastorno depresivo mayor, además de sintomatología ansiosa



Foja: 1

clínicamente significativa que está siendo atendida, requiriendo algún acto reparatorio por parte de la contraparte, para poder ir tramitando adecuadamente esta experiencia negativa.

Refuerza lo anterior el certificado médico de 18 de julio de 2018, emitido por el médico psiquiatra don Eduardo Correa Donoso, el que se encuentra agregado en la carpeta de documentos de folio 72, y que da cuenta que en agosto de 2016 y asociado a un problema de índole laboral económico, se gatilla en el actor un cuadro ansioso grave, que posteriormente compromete su ánimo, provocándole una depresión mayor durante el primer semestre de 2017.

En el mismo sentido, la testifical rendida por el actor, mediante la cual los testigos don Eduardo de Jesús Lillo González, cuya declaración consta en folio 35, de doña Karla Pamela Morales Aguirre, cuya declaración se lee en folio 105, y don Gonzalo Piwonka Santo, cuya declaración consta en folio 105, dan cuenta de la afectación psicológica que sufrió actor; así, el primero de los señalados refiriéndose a don Carlos Molinos, declaró: *“Es así, como los días posteriores al inicio de la intervención llegaba con calcetines cambiados, ropa sin planchar, totalmente ido. Dado que yo no tengo la confianza para señalarse esas observaciones, le dije a Eduardo Olivares que se las hiciera notar, y ahí nos explicó que había ido al psiquiatra y que estaba con ravotril, todo producto de la intervención que no se entendía, desde el punto de vista financiero, para qué era, dado que sólo trajo mala imagen con los bancos, proveedores, Fisco y personal.”* Por su parte, la segunda de las testigos, repreguntada acerca de si notaba en el demandante un distinto comportamiento y disponibilidad durante el periodo de intervención, respondió: *“Lo dije anteriormente, estaba poco disponible y estaba muy desgastado y estresado”*. Finalmente, el tercero de los señalados refirió: *“Por tal razón lo vi muy recaído, preocupado e incluso se tuvo que medicar, eso me consta porque yo le ayudé a conseguir medicamentos. En esa oportunidad le recomendé que retomara su tratamiento con el psiquiatra porque lo había dejado. Esa es la forma que le afectó a Carlos esta intervención ya que se encontraba muy preocupado por esto. También el hecho que se le hubiese quitado el poder de las firmas dentro de la empresa”,* y luego agregó: *“Como ya señalé anteriormente, Carlos se vio muy afectado por la intervención, un estado de ánimo de preocupación y decaído”*.

De este modo, conforme la prueba analizada precedentemente, es que se ha logrado acreditar que el actor sufrió el daño moral que alega, pero, que en mérito de la misma prueba, este no es de la entidad o extensión que reclama, desde que la sintomatología y el cuadro ansioso se gatillaron durante el segundo semestre de 2016, provocando la depresión mayor durante el primer semestre del



Foja: 1

año 2017, conforme da cuenta el certificado médico de folio 72; junto a lo anterior, el informe pericial agregado en folio 154 –a la fecha de su elaboración en el segundo semestre del año 2018- refiere que la mayor parte de la sintomatología esta en remisión o en remisión parcial; de manera que, a fin de resarcir el daño que ha experimentado el actor en su esfera extra patrimonial, atendido el alcance, intensidad y duración que se ha acreditado, es que se fijará la suma ascendente a \$12.000.000.- (doce millones de pesos) a fin de compensar el daño moral sufrido.

Décimo cuarto: Que respecto al hecho número cinco de prueba, esto es la relación de causalidad entre los hechos señalados en los puntos de prueba N°1 y 2, y los supuestos daños cuyo resarcimiento se reclama; se hace presente que este solo se analizará respecto del daño moral alegado, toda vez que las otras partidas de daño reclamadas –daño patrimonial emergente y daño patrimonial lucro cesante- no lograron acreditarse por el reclamante, conforme se estableció en los motivos undécimo y duodécimo.

En cuanto al daño moral que fue establecido en el motivo décimo tercero precedente, se tendrá por probado que aquel ha sido consecuencia directa de los hechos números uno y dos de la interlocutoria de prueba, los que también fueron debidamente acreditados, desde que ello se demuestra con el mérito de la misma documental y pericial analizada en el considerando precedente, esto es el certificado médico de folio 72, y el informe pericial agregado en folio 154, pues ambos documentos sitúan el origen de la sintomatología, cuadro ansioso y posterior depresión, en aquellos hechos, así el certificado médico refiere: *“En agosto del 2016, asociado a problema en ámbito laboral-económico y luego judicial...”*; por su parte el informe pericial indica: *“...pudiéndose afirmar que la fuente de estrés está directamente relacionada a las acciones realizadas por el interventor, debido a las dificultades económicas que significaron tanto para la empresa como para Carlos y, al darse cuenta de la colusión del interventor con la otra parte en disputa.”*, de modo tal que se tendrá por probado el hecho respecto del daño moral reclamado.

Décimo quinto: Que, en cuanto al último hecho de la interlocutoria de prueba, fijado por resolución de 21 de enero de 2021, de folio 217, modificada por la de 19 de agosto del mismo año, de folio 225, la efectividad de haber actuado los demandados de buena fe, con la finalidad de resguardar sus derechos sociales y patrimoniales, y sin culpa o dolo, en relación a la interposición y mantenimiento de las medidas prejudiciales precautorias decretadas en los autos Rol C-2529-2016 del 2° Juzgado Civil de Viña del Mar, y los supuestos perjuicios causados por las mismas al demandante, hechos y antecedentes; al efecto, es preciso destacar que el inciso segundo del tantas veces citado artículo 280 del Código de Procedimiento



Foja: 1

Civil, establece una presunción simplemente legal que opera en contra de los demandados y en favor del actor, al prescribir que: “....*por este solo hecho quedará responsable el que las haya solicitado de los perjuicios causados, considerándose doloso su procedimiento.*”; y que, como consecuencia de la señalada presunción, se alteran las reglas del *onus probandi*, siendo entonces carga de los demandados destruir tal presunción.

Establecido lo anterior se tendrá presente que, conforme la prueba rendida en autos, los demandados no han logrado desvirtuar la presunción prescrita en la norma precedentemente citada y, consecuencialmente, se tendrá por no probado el hecho que nos ocupa, debiendo regir entonces la presunción.

Décimo sexto: Que, conforme se ha venido razonando, no habiéndose acreditado la concurrencia de los elementos de la responsabilidad extracontractual alegada en autos respecto al daño emergente y lucro cesante, la demanda ha de ser necesariamente rechazada respecto de éstos; al contrario, si se logró acreditar sus elementos únicamente en lo relativo al daño moral, de manera que la acción será acogida parcialmente como se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Décimo séptimo: Que la suma a la cual se arribó en el motivo décimo tercero, a la que serán condenados los demandados, constituye una obligación solidaria, al tratarse de un cuasidelito civil que ha sido cometido por todos ellos, conforme lo dispuesto en el artículo 2317 del Código Civil.

Décimo octavo: Que, en cuanto al reajuste peticionado, como la reparación debe ser completa, el monto regulado en el motivo décimo tercero, deberá ser reajustado conforme a la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor, calculado entre el mes anterior a la fecha en que la presente sentencia cause ejecutoria y hasta el mes anterior a la fecha en que las demandadas hagan efectivo pago de la suma a la que serán condenadas.

En cuanto a los intereses, que también son peticionados, se otorgará el corriente para operaciones reajustables, los que se calcularán desde la fecha en que la presente sentencia cause ejecutoria y hasta el pago efectivo de las obligaciones a las que serán condenados los demandados.

Décimo noveno: Que, conforme lo prevenido por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, al haberse anunciado que se acogerá la demanda de manera parcial, no se condenará en costas a los demandados, en razón de no haber resultado totalmente vencidos.

Vigésimo: Que la prueba rendida en autos y no analizada en forma particular en nada altera lo concluido.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1437 y siguientes, 1698 y siguientes, 2314, 2317 y siguientes del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 280,



Foja: 1

342 y siguientes, 385 y siguientes, 426, 428 y 432 del Código de Procedimiento Civil; se declara:

I.- Que **se rechazan** las objeciones documentales deducidas por la parte de los demandados, conforme lo razonado en los considerado segundo, cuarto y quinto.

II.- Que **se rechazan** las excepciones de falta de legitimación activa opuesta por la parte demandada de doña Bonnie Susan Elizabeth Earnest Callejas, en lo principal de su escrito de 24 de noviembre de 2017, y por lo demandados doña Angélica Patricia Rodríguez Earnest, don Miguel Andrés Rodríguez Earnest y doña Catalina María Rodríguez Earnest, en lo principal de su presentación de 27 de noviembre de 2017, que se lee en folio 17, conforme lo razonado en los motivos sexto y séptimo.

III.- Que **se acoge** la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, presentada a lo principal de solicitud de 27 de septiembre de 2017, en folio 1, por don Cristóbal Valenzuela González, abogado y mandatario judicial de don **Carlos Manuel Molinos Orrego**, en contra de doña **Bonnie Susan Elizabeth Earnest Callejas**, de doña **Angélica Patricia Rodríguez Earnest**, de don **Miguel Andrés Rodríguez Earnest** y de doña **Catalina María Rodríguez Earnest**, todos debidamente individualizados, solo en cuanto se condena solidariamente a los segundos a pagar al primero, la suma de **\$12.000.000.-** (doce millones de pesos) como indemnización de perjuicios por daño moral; rechazándose en aquella parte que pretendía la indemnización por daño emergente y por lucro cesante, conforme lo razonado en los considerandos octavo a décimo séptimo.

IV.- Que la suma que se ordena pagar al actor, lo será reajustada y con intereses, que se aplicarán y calcularán en la forma dispuesta en el motivo décimo octavo, de conformidad con la liquidación que practicará -en su oportunidad- la Señora Secretaria de este Tribunal o quien legalmente la subrogue.

V.- Que **no se condena** en costas a la parte de los demandados, debiendo soportar cada parte las suyas, conforme lo expresado en el motivo décimo noveno.

Notifíquese a los apoderados de las partes personalmente o por cédula.

Hecho, regístrese y archívese en su oportunidad.

Dictada en los autos Rol C-3337-2017 por **Miriam Armijo Indellicati**, Juez Subrogante no inhabilitada del Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar.



C-3337-2017

Foja: 1

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Viña del Mar, veintiséis de Diciembre de dos mil veintidós**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SXVXXCJDMHY